



PODER JUDICIAL
REPUBLICA DE CHILE

MANUAL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I: SECCIÓN GENERAL

- 1. Gobierno, estructura y funciones del Estado**
 - 1.1. Gobierno, Administración o Poder Ejecutivo
 - 1.2. Congreso Nacional o Poder Legislativo
 - 1.3. Poder Judicial

- 2. Derechos humanos y derechos fundamentales**
 - 2.1. Derechos Civiles
 - 2.2. Derechos Políticos
 - 2.3. Derechos Económicos, Sociales y Culturales
 - 2.4. Garantías Constitucionales
- 3. El estado de Derecho**
- 4. El ciudadano y sus derechos**
 - 4.1. El ciudadano y el Poder Judicial
 - 4.2. El ciudadano y el acceso a información pública
- 5. Transparencia y Poder Judicial**
- 6. La Ética Judicial**
 - 6.1. Principios
 - 6.2. Inhabilidades
 - 6.3. Prohibiciones
 - 6.4. Comisión de Ética de la Corte Suprema

CAPÍTULO II: ESTRUCTURA DE LOS TRIBUNALES

- 1. El Comité de Jueces**
- 2. Juez Presidente**
- 3. Administrador de Tribunal**
- 4. Unidades Administrativas**
- 5. Los Consejos Técnicos**



6. Auxiliares de la Administración de Justicia

7. Personal del Poder Judicial

CAPÍTULO III: PROCEDIMIENTOS PARA LOS TRIBUNALES QUE TRAMITAN CON CARPETA ELECTRÓNICA

1. Tramitación

2. AUDIENCIAS

3. Notificaciones

4. De los ministros visitantes

CAPÍTULO IV: NORMAS COMUNES A TODO PROCEDIMIENTO

1. El proceso

2. Elementos del proceso

3. El emplazamiento

4. Tramitación digital de procedimientos judiciales

5. Plazos

6. Las actuaciones judiciales

7. Las notificaciones

8. Las resoluciones judiciales

9. Efectos de las resoluciones judiciales

CAPÍTULO V: DE LOS PROCEDIMIENTOS EN ASUNTOS CIVILES

1. Juicio ordinario civil de mayor cuantía

2. Juicio Ejecutivo

3. El Juicio Sumario

CAPÍTULO VI: DE LOS PROCEDIMIENTOS EN ASUNTOS DE FAMILIA

1. Aspectos administrativos en los Juzgados de Familia

2. Competencia de los Juzgados de Familia

3. De los procedimientos aplicables en los Juzgados de Familia



CAPÍTULO VII: DE LOS PROCEDIMIENTOS EN ASUNTOS LABORALES

- 1. Procedimiento de aplicación general u ordinario ante los
Juzgados de Letras del Trabajo**
- 2. Procedimiento de cumplimiento de la sentencia y de la ejecución de los títulos
ejecutivos laborales**
- 3. Procedimiento de tutela laboral**
- 4. Procedimiento monitorio**

CAPITULO IXI: DE LOS PROCEDIMIENTOS EN ASUNTOS PENALES

- 1. Competencia de los tribunales penales**
- 2. El proceso penal**

CAPITULO X: COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTOS EN CORTES DE APELACIONES

- 1. Generalidades**
- 2. Concepto**
- 3. Principales funciones**
- 4. Organización y composición**
- 5. Características**
- 6. Funcionamiento ordinario y extraordinario**
- 7. Competencia**
- 8. Tramitación de los recursos**
- 9. Integración**

CAPITULO XI: CORTE SUPREMA

- 1. Composición**
- 2. Competencia y funcionamiento**
- 3. Estructura de trabajo interno de la Corte Suprema**



INTRODUCCIÓN

El Poder Judicial de Chile está constituido por los tribunales de justicia establecidos por la ley a los cuales les corresponde ejercer la función jurisdiccional.

Una de las bases de nuestra institucionalidad es la independencia del Poder Judicial, consagrada expresamente en el artículo 76 de nuestra Constitución Política de la República, al disponer que “La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos.” Pero, así como los tribunales de justicia son independientes en el ejercicio de sus funciones, están obligados a respetar, desde luego, la independencia y atribuciones de los demás poderes públicos.

Los tribunales están dotados de la facultad de imperio para hacer cumplir sus resoluciones, pudiendo impartir órdenes directas a la fuerza pública o ejercer los medios de acción necesarios para cumplirlas.

Integran el Poder Judicial, como tribunales ordinarios de justicia, la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, los Presidentes y Ministros de Corte, los Juzgados de Letras, los Juzgados de Garantía y los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal.

Asimismo, forman parte de él, como tribunales especiales, los Juzgados de Familia, los Juzgados de Letras del Trabajo, los Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional, y los Tribunales Militares en tiempo de paz.

Los Juzgados de Letras están integrados por uno o más jueces, y pueden ser de dos tipos: Juzgados Civiles, y Juzgados de Competencia Común o Juzgados Mixtos. El territorio jurisdiccional de cada uno de los Juzgados de Letras es una comuna o agrupación de comunas.

En términos generales, estos Juzgados de Letras conocen las causas civiles, comerciales, los actos judiciales no contenciosos; y también, en el caso de los Juzgados de Competencia Común o Juzgados Mixtos, las causas del trabajo y de familia y los demás asuntos que las leyes les encomienden.

En ese contexto, el presente manual tiene por propósito allanar el camino para la adecuada inducción y preparación de aquellos funcionarios judiciales para los procesos de selección de los cargos en los tribunales superiores o de primera instancia y, por ende, se hace preciso conocer aspectos generales en materia de procedimientos y estructura del Poder Judicial.

El presente manual también incorpora aspectos generales referidos a la competencia de los Juzgados Civiles, de Familia y del Trabajo y a los procedimientos aplicables para el conocimiento, resolución y ejecución de lo juzgado en ellos, tratados con la suficiente extensión para su adecuada comprensión.

Finalmente, este manual contiene normas referidas al proceso penal regulado a través del Código Procesal Penal. Se revisan materias sobre los intervinientes y los derechos y deberes que les corresponden, los diversos procedimientos reglamentados –ordinario, abreviado, simplificado-, y los recursos consagrados en la legislación penal.



CAPÍTULO I: SECCIÓN GENERAL

1. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL ESTADO



De acuerdo a nuestra Constitución Política de la República, el Estado de Chile se divide en Gobierno, Administración o Poder Ejecutivo; Congreso Nacional o Poder Legislativo y Poder Judicial, a través de los cuales se cumplen los fines del Estado. Son las denominadas funciones del Estado que son tres: la función legislativa; la función ejecutiva y la función jurisdiccional.

El objetivo fundamental de la distinción de funciones es evitar la arbitrariedad y el abuso en el ejercicio del poder concentrado en un solo órgano o institución e introducir un equilibrio entre las distintas instituciones que ejercen cada uno de los poderes del Estado. La separación o distribución de funciones en órganos distintos garantiza de mejor manera la libertad y el ejercicio de los derechos de las personas. Esto es considerado universalmente como base de una convivencia social libre y democrática. A continuación, revisaremos brevemente la estructura de los poderes del Estado.

1.1. Gobierno, Administración o Poder Ejecutivo.

La función Ejecutiva puede subdividirse en una función administrativa y una función política.

1.1.1. El Presidente de la República.

El Poder Ejecutivo tiene como cabeza al Presidente de la República, quien tiene a su cargo el gobierno y la administración del Estado. Para el desarrollo de sus funciones cuenta con los ministros de Estado que son sus colaboradores directos.

Para ser elegido Presidente de la República se requiere:

- a) Tener la nacionalidad chilena de acuerdo a lo dispuesto en los números 1º o 2º del artículo 10 de la Constitución Política;
- b) Tener cumplidos treinta y cinco años de edad; y
- c) Poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio.

El Presidente de la República cuenta con atribuciones que podemos clasificar en: atribuciones gubernamentales y administrativas, legislativas, judiciales y económicas, además de participar en el poder constituyente derivado.

a) Atribuciones gubernativas y administrativas:

Entre otras al Presidente le corresponden:

- 1) La potestad reglamentaria, que puede clasificarse en autónoma y de ejecución. La primera le permite al Presidente de la República normar todas aquellas materias que no sean materias de ley. En tanto, la potestad reglamentaria de ejecución es aquella que permite dictar normas para complementar o detallar las leyes, a fin de que ellas lleguen a producir sus efectos.
- 2) Nombrar y remover a su voluntad a los ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores y a los cargos de su exclusiva confianza al interior de la Administración del Estado.
- 3) Designar a los embajadores y ministros diplomáticos, y a los representantes del país ante los organismos internacionales.
- 4) Nombrar al Contralor General de la República con acuerdo del Senado.



- 5) Designar y remover a los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y al General Director de Carabineros.
- 6) Disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, organizarlas y distribuirlas de acuerdo con las necesidades de la seguridad nacional.
- 7) Asumir en caso de guerra la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas.
- 8) Declarar la guerra, previa autorización por ley, debiéndose dejar constancia de haberse oído al Consejo de Seguridad Nacional.
- 9) Conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos internacionales, y llevar a cabo las negociaciones; concluir, firmar y ratificar los tratados que estime convenientes para los intereses del país, los que deberán ser sometidos a la aprobación del Congreso Nacional.

b) Atribuciones legislativas:

Estas, a su vez, se pueden clasificar en atribuciones legislativas directas, que son aquellas que dicen relación con el proceso de formación de la ley, y las atribuciones legislativas indirectas, que dicen relación con la integración y funcionamiento del Congreso Nacional.

Las atribuciones legislativas directas son:

- 1) La iniciativa exclusiva para las materias establecidas en la Constitución Política y que sólo pueden, en consecuencia, iniciar su discusión en el Congreso Nacional por Mensaje del Ejecutivo, como por ejemplo aquellas que se refieran a gastos del presupuesto nacional.
- 2) Tomar parte en el debate de los proyectos de ley en las Cámaras del Congreso Nacional a través de los ministros de Estado; calificar las urgencias con que deben ser considerados los proyectos en cada trámite legislativo; ejercer el derecho de veto; promulgar las leyes y ordenar su publicación en el Diario Oficial.
- 3) Dictar, previa delegación de facultades del Congreso Nacional, decretos con fuerza de ley sobre las materias que señala la Constitución.
- 4) Convocar a plebiscito en caso de que el Congreso Nacional insista, por dos tercios de los miembros de cada Cámara, en aprobar un proyecto de reforma constitucional vetado por el Presidente de la República.

c) Facultades en el ámbito del Poder Judicial:

Entre ellas cabe mencionar:

- 1) La facultad de otorgar indultos particulares en los casos que determine la ley.
- 2) Nombrar a los magistrados y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones y a los jueces letrados, a proposición de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, respectivamente y a los magistrados y fiscales judiciales de la Corte Suprema, todo ello conforme a lo prescrito en la Constitución.



d) Atribuciones económicas:

Cabe destacar, que al Presidente de la República le corresponde cuidar de la recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión con arreglo a la Ley de Presupuestos del Sector Público.

1.1.2. La Administración del Estado.



La Administración del Estado está constituida por los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los Gobiernos Regionales, las Municipalidades y las empresas públicas creadas por ley.

a) Los Ministerios:

Son los órganos superiores de colaboración del Presidente de la República en las funciones de gobierno y administración de sus respectivos sectores, los cuales corresponden a los campos específicos de actividades en que deben ejercer dichas funciones.

Su función principal es proponer y evaluar las políticas y planes sectoriales, estudiar y proponer las normas aplicables a los sectores a su cargo, velar por el cumplimiento de las normas dictadas, asignar recursos y fiscalizar las actividades del respectivo sector.

En cada Ministerio puede haber una o más Subsecretarías, cuyos jefes superiores son los Subsecretarios, que tienen el carácter de colaboradores inmediatos de los Ministros.

La mayoría de los Ministerios se desconcentran territorialmente en Secretarías Regionales Ministeriales encabezadas por un Secretario Regional Ministerial quien es el representante del Ministro en la región.

b) Los servicios públicos:

Son órganos administrativos encargados de satisfacer necesidades colectivas, de manera regular y continua a través de la ejecución de las políticas, planes y programas que diseña cada Ministerio.

Los servicios públicos están a cargo de un jefe superior denominado Director, a quien le corresponde dirigir, organizar y administrar el servicio; controlarlo y velar por el cumplimiento de sus objetivos.

c) Las superintendencias:

Son en general servicios públicos que se relacionan con el Gobierno Central a través de los Ministerios respectivos.

Su principal función es fiscalizar el cumplimiento de la normativa de un determinado sector, contando con facultades normativas, fiscalizadoras y sancionadoras.

Las superintendencias están a cargo de un jefe superior denominado Superintendente, a quien le corresponde dirigir, organizar y administrar el servicio; controlarlo y velar por el cumplimiento de sus objetivos.

d) La Contraloría General de la República:

Es el órgano superior de fiscalización de la Administración del Estado contemplado en la Constitución Política.

La labor de la Contraloría es eminentemente fiscalizadora; de carácter jurídico, contable y financiero, pues está destinada a cautelar el principio de legalidad, es decir, verificar que los

órganos de la Administración del Estado actúen dentro del ámbito de sus atribuciones y con sujeción a los procedimientos que la ley contempla.

e) Las Municipalidades:

Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas.

Están constituidas por un alcalde y un concejo comunal electos directamente por un periodo de 4 años, renovable. La municipalidad es asesorada por un Consejo Económico y Social Comunal (CESCO), integrado por representantes de las actividades y organizaciones comunales importantes.

1.2. Congreso Nacional o Poder Legislativo.



La función legislativa tiene esencialmente el cometido de la creación, modificación o supresión de normas.

La función legislativa en nuestro país es ejercida principalmente por el Congreso Nacional, conformado de una Cámara de Diputados y un Senado, cada uno con su respectivo Presidente.

1.2.1. La Cámara de Diputados.

En el contexto de la vigencia de la Ley N°20.840, que sustituye el sistema electoral binominal, la Cámara de Diputados estará integrada por 155 diputados, que duran cuatro años en el ejercicio de sus cargos, con posibilidad de reelección.

Para ser elegido Diputado se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, tener cumplidos 21 años de edad, haber cursado enseñanza media o equivalente y tener residencia en la región a la que pertenezca el distrito electoral durante un plazo no inferior a dos años contados hacia atrás desde el día de la elección.

La Cámara de Diputados tiene por función esencial participar en la elaboración de las leyes y tiene como funciones exclusivas fiscalizar los actos del gobierno e iniciar las acusaciones constitucionales. La Ley de Presupuestos y toda legislación relativa a tributos y reclutamiento debe discutirse primero en la Cámara de Diputados.

1.2.2. El Senado.

En el contexto de la vigencia de la Ley N°20.840, que sustituye el sistema electoral binominal, el Senado estará integrado por 50 senadores, que duran ocho años en el ejercicio de sus cargos, con posibilidad de reelección.

Para ser elegido Senador se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, haber cursado la enseñanza media o equivalente y tener cumplidos 35 años de edad el día de la elección.

La principal función del Senado es la de concurrir, conjuntamente con la Cámara de Diputados, a la formación de las leyes. Además tiene, entre otras, las atribuciones exclusivas de conocer de las acusaciones constitucionales que entable la Cámara de Diputados, las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales superiores de justicia, declarar la inhabilidad del Presidente de la República y pronunciarse sobre la dimisión que haga de su cargo.

El Senado no puede realizar actos de fiscalización del Gobierno, que son de competencia exclusiva de la Cámara de Diputados.

1.2.3. El Congreso Pleno.

Adicionalmente existen las denominadas atribuciones exclusivas del Congreso Pleno, aquellas que deben ser conocidas en un solo cuerpo por las dos ramas del Congreso Nacional. Por ejemplo, en caso de vacancia del cargo de Presidente de la República, el Congreso Pleno podrá elegirlo, siempre que falte menos de dos años para la próxima elección general presidencial.

1.2.4. El proceso de formación de las leyes.



La principal función del Congreso Nacional es debatir y aprobar las leyes.

Nuestra Constitución Política de la República no define expresamente lo que debe entenderse por ley, sin embargo la considera como toda norma de carácter general y obligatoria que estatuya las bases esenciales de un ordenamiento jurídico, según se desprende del art. 63 N° 20.

Las leyes pueden tener origen tanto en la Cámara de Diputados, como en el Senado, por mensaje que dirija el Presidente de la República o por moción de cualquiera de sus miembros.

El proceso legislativo está conformado por etapas sucesivas, a saber:

a. La iniciativa.

Es la etapa en que comienza el primer impulso para que una proposición sea analizada por el Congreso Nacional. Ello significa elaborar un proyecto que sea susceptible, por su forma y por su contenido, de convertirse en ley. En nuestro país tienen iniciativa de ley el Presidente de la República y los parlamentarios; en el primer caso se habla de Mensaje, en el segundo de Moción.

b. La discusión.

En ella se verifica el estudio, análisis y deliberación del Senado y en la Cámara de Diputados sobre un proyecto de ley, la cual pasa por distintas etapas. Una vez aprobado un proyecto en su Cámara de origen, pasa a la Cámara revisora, la cual procede de la misma manera como lo hizo la primera. Una vez aprobado por ambas, el proyecto es enviado al Presidente de la República.

c. La sanción.

Al Presidente de la República le es enviado el proyecto de ley aprobado por ambas Cámaras a efectos de que lo apruebe o rechace. Si no dice nada en un plazo de 30 días desde que recibió el proyecto de ley, se entiende que lo aprueba.

d. La promulgación.

Aprobado el proyecto de ley por el Presidente de la República, éste dicta un decreto promulgatorio dentro de un plazo de 10 días.

e. La publicación.

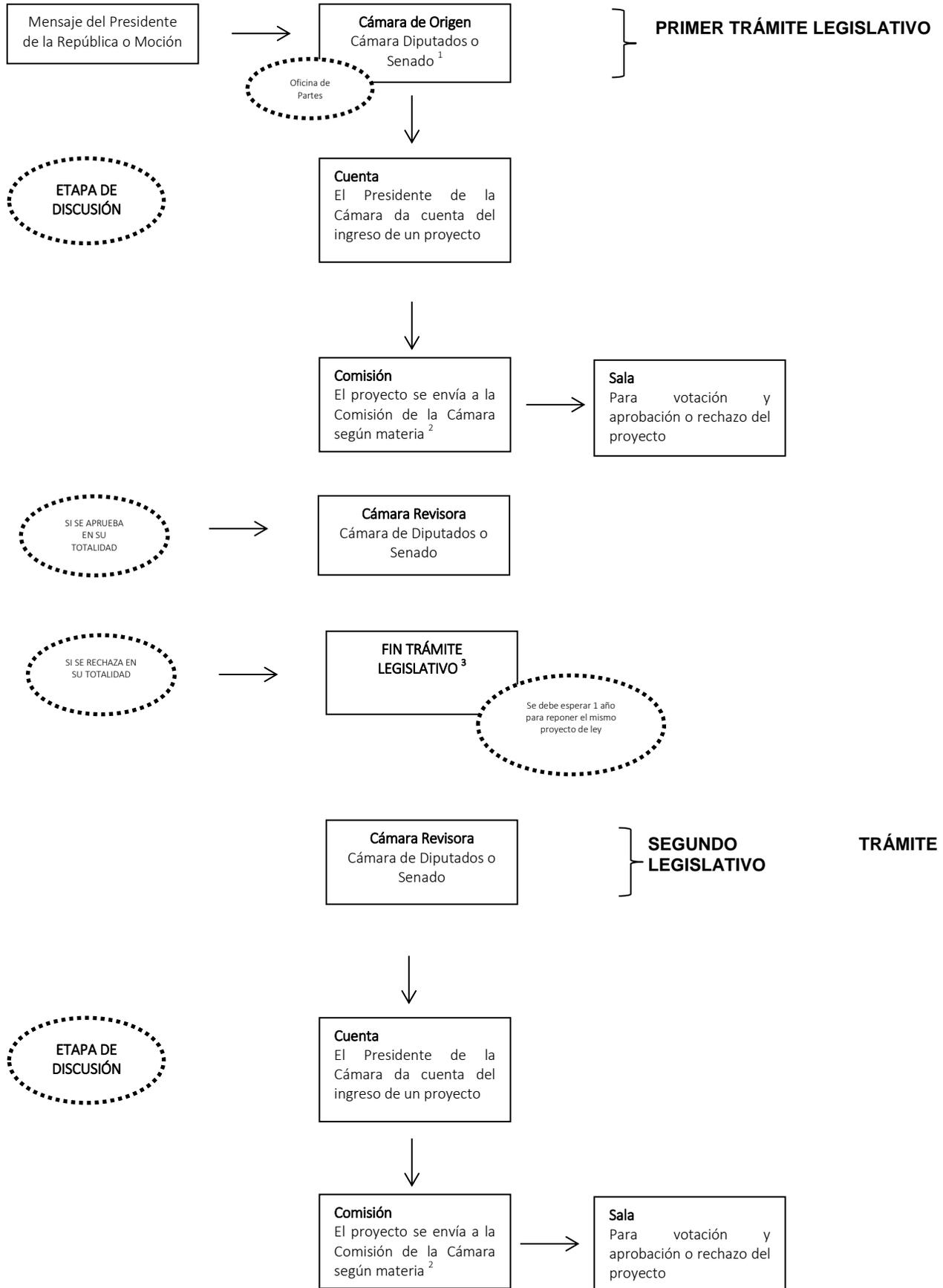
En el plazo de 5 días desde que queda tramitado el decreto promulgatorio, el texto de la ley debe publicarse en el Diario Oficial y, desde ese momento es obligatoria y se presume conocida por todos.

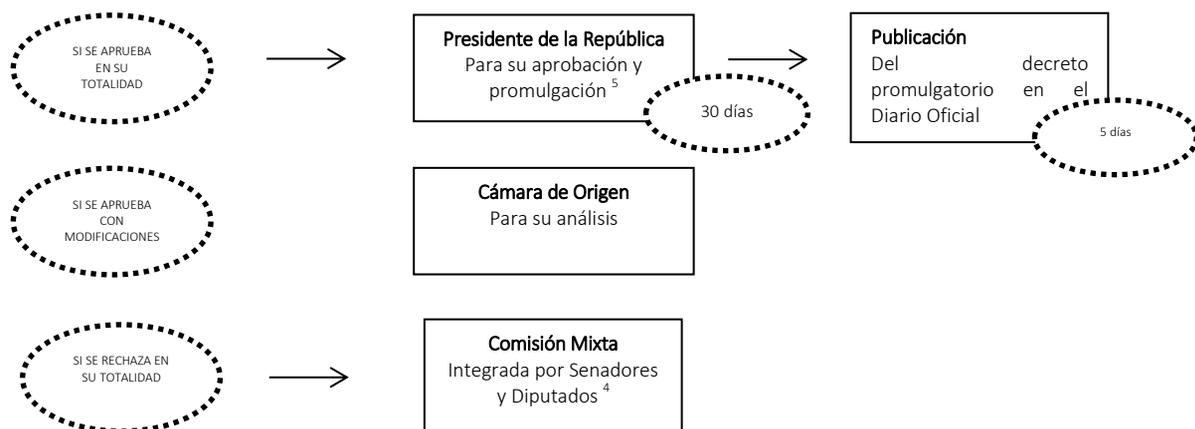
En todo este proceso hay que considerar que la tramitación de una ley no está sujeta a un tiempo determinado. Sin embargo, un proyecto puede ser calificado con urgencia por el Presidente de la República y en tal caso, su discusión y votación en la Cámara requerida deberán quedar terminadas en el plazo de treinta días; si la calificación fuere de suma urgencia, ese plazo será de quince días y, si se solicitare discusión inmediata, será de seis días.



Estos plazos corren desde la sesión de la Cámara correspondiente en que se dé cuenta del Mensaje u oficio que requiere la urgencia a una de las Cámaras.

ESQUEMA GENERAL DE PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN DE LA LEY





¹ El esquema se trata de una explicación general y por ello, en casos específicos puede experimentar diferencias. Así por ejemplo, algunas materias sólo pueden tener su origen en la Cámara de Diputados y otras sólo en el Senado. En tales casos, el Presidente de la República deberá enviar su Mensaje a la Cámara correspondiente. En el caso de las Mociones, éstas sólo pueden ser presentadas por parlamentarios que formen parte de la corporación respectiva.

² Salvo por acuerdo unánime de la sala de omitir este trámite. La Comisión discute en general el proyecto, habitualmente invita a expertos y a organizaciones de la sociedad civil a expresar su opinión sobre el mismo, luego de lo cual acuerda generalmente un plazo para que se presenten indicaciones. A continuación, se procede al análisis y votación en particular de las indicaciones y de los artículos del proyecto de ley uno a uno.

³ Si el proyecto rechazado fuese de iniciativa del Presidente de la República, éste podrá solicitar que el Mensaje pase a la otra Cámara. En ésta, requerirá de la aprobación de dos tercios de sus miembros presentes. De aprobarse por ese quórum, retornará a la Cámara de Origen, donde sólo podrá volver a ser desechado con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes.

⁴ Las comisiones mixtas se crean al no producirse acuerdos entre las Cámaras.

Cuando se da acuerdo en la comisión mixta, el proyecto vuelve a ser considerado por ambas Cámaras, donde requiere de la mayoría de sus miembros presentes para ser aprobado. En tal caso el proyecto es remitido al Presidente de la República.

En caso de no haber acuerdo en la comisión mixta, o si su propuesta es rechazada en la Cámara de Origen, ésta puede insistir, a petición del Presidente de la República, en su proyecto anterior. Esta insistencia requiere de una mayoría de dos tercios de sus miembros presentes. Si la Cámara de Origen acuerda la insistencia, el proyecto pasa por segunda vez a la Cámara Revisora, el cual sólo podrá ser reprobado con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes. De no lograr este quórum, el proyecto se da por aprobado y continúa su tramitación.

⁵ Si el Presidente desaprueba el proyecto aprobado por el Congreso, formulando vetos u observaciones, el proyecto es devuelto a la Cámara de Origen, con las observaciones, dentro del plazo de 30 días.

Si ambas Cámaras aprueban las observaciones, el proyecto es devuelto al Ejecutivo para su promulgación como ley.

Si las dos Cámaras rechazan todas o alguna de las observaciones del Presidente, e insistieren, por los dos tercios de sus miembros presentes, en la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellas, se devolverá el proyecto al Ejecutivo, el que debe promulgarlo como ley.

En caso de ser rechazadas por las dos Cámaras todas o algunas de las observaciones hechas por el Presidente, pero no se reuniera el quórum de dos tercios para insistir en el proyecto previamente aprobado por ellas, no habrá ley respecto de los puntos de discrepancias.

1.2.5. Participación ciudadana en la formación de las leyes.

Cada vez más relevante es la participación que tienen los ciudadanos en el proceso de formación de la ley, a través de:

- a. Procesos de consulta ciudadana a iniciativa del Congreso Nacional;
- b. Invitación de ciudadanos interesados o de organizaciones para escuchar su opinión en las distintas comisiones del Congreso Nacional;

- c. Invitación de personas como opinión experta durante la tramitación de un proyecto de ley; y
- d. Cualquier instancia en que los ciudadanos transmiten su interés en que se legisle sobre una materia en particular.

1.3. Poder Judicial



La función jurisdiccional tiene por finalidad conocer, resolver y hacer ejecutar lo juzgado. Así, a los tribunales, que son los órganos que ejercen la función jurisdiccional, les corresponde conocer de las causas civiles y criminales, resolverlas y hacer ejecutar lo juzgado, lo que tiene efectos relativos, esto es, sólo aplicables para el caso particular y no para la generalidad de casos similares. Esta función jurisdiccional que desempeñan los tribunales de justicia les permite hacer ejecutar lo juzgado, para lo cual pueden impartir órdenes directas a la fuerza pública o ejercer los medios de acción conducentes de que dispusieren. Es la denominada fuerza de imperio de los tribunales de justicia.

Los tribunales de justicia se encuentran distribuidos en todo el territorio del Estado y ejercen sus atribuciones y competencias dentro de los límites territoriales que les corresponden según la Constitución Política de la República y las leyes.

La actuación de los tribunales de justicia está informada de los principios de independencia, legalidad, territorialidad, pasividad, inamovilidad, inexcusabilidad, responsabilidad y publicidad. A continuación se describen:

- 1) Principio de independencia. Principio esencial del Estado de Derecho que otorga independencia al Poder Judicial respecto de los demás poderes del Estado, para así dar cabal cumplimiento a las funciones que la Constitución y las leyes le encomiendan.
- 2) Principio de legalidad. Este principio supone, en primer lugar, que los tribunales deben estar establecidos por ley y, segundo, que los tribunales conocen las causas y fallan conforme a la ley.
- 3) Principio de territorialidad. Implica, en cuanto principio, que cada tribunal ejerce sus funciones en un determinado territorio de la República, con excepción de la Corte Suprema que tiene jurisdicción sobre todo el territorio nacional.
- 4) Principio de pasividad. Supone que, por regla general, los tribunales actúan a requerimiento de parte, salvo las excepciones legales, como por ejemplo: la oficialidad que exige de los tribunales de familia en casos en que existe vulneración de los derechos de un niño, niña o adolescente.
- 5) Principio de inamovilidad. Está relacionado estrechamente con el principio de independencia de las funciones judiciales, ya que pretende resguardar que los tribunales de justicia puedan actuar con libertad e imparcialidad, a través de otorgarle estabilidad a los jueces en su desempeño como tales.

Sin embargo, la inamovilidad de los jueces no es absoluta y la cesación de los jueces en sus funciones tiene lugar: por haber cumplido 75 años de edad; por incapacidad legal sobreviniente; por renuncia; o por ser depuestos de sus destinos, por causa legalmente sentenciada.

- 6) Principio de inexcusabilidad. Este principio establece que los jueces deben resolver siempre los asuntos de su competencia sometidos a su consideración, aun ante ausencia de ley al respecto, debiendo en tal caso aplicar el espíritu general de la legislación y la equidad natural. Al respecto nuestra Carta Fundamental señala que *"reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse (los tribunales) de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometidos a su decisión"*.

- 7) Principio de responsabilidad. La responsabilidad es otro principio básico del Estado de Derecho. No puede haber ninguna autoridad u órgano del Estado liberado de responsabilidad por los actos que ejecuten dentro de sus funciones. En este sentido, la Constitución Política establece la responsabilidad ministerial de los jueces, haciéndolos responsables de los delitos de: cohecho, falta de observancia de las leyes que reglan el proceso, prevaricación y torcida administración de justicia.
- 8) Principio de publicidad. En virtud de este principio, los actos de los tribunales son públicos para terceros, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley, referidas por ejemplo a proteger la presunción de inocencia, datos personales de los litigantes o cuestiones que involucren la seguridad interior del Estado.

1.3.1. Organización y funcionamiento del Poder Judicial



El Poder Judicial está conformado jerárquicamente por la Corte Suprema, Cortes de Apelaciones y Juzgados de Letras. Tiene una estructura jerárquica piramidal, en cuya base se encuentran los tribunales de primera instancia, siguiendo en línea ascendente hacia las Cortes de Apelaciones y en la cúspide de su estructura la Corte Suprema.

a) Corte Suprema

La Excm. Corte Suprema es el más alto tribunal del país, abarcando su jurisdicción a todo el territorio de la República.

Le corresponde ejercer la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la nación, excluyendo el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones, los tribunales electorales regionales y los tribunales militares en tiempo de guerra.

Además, le corresponde conocer de los recursos procesales (casación, apelación, queja y revisión) entablados contra resoluciones de los tribunales inferiores, uniformando la interpretación de la ley, generando jurisprudencia, que en casos análogos puede ser seguida por los tribunales de inferior jerarquía.

Está compuesta por 21 miembros, cada uno de los cuales recibe el nombre de Ministro, uno de los cuales es su Presidente, elegido por los propios ministros, y dura dos años en sus funciones, no pudiendo ser reelegido.

La Corte Suprema de Justicia funciona dividida en *salas especializadas* o en *pleno*, según lo determine la ley para las materias que le corresponda conocer. Corresponderá a la Corte Suprema, mediante auto acordado, establecer cada dos años las materias de que conocerá cada una de las salas en que ésta se divide, tanto en funcionamiento ordinario como extraordinario. Al efecto, especificará la o las salas que conocerán de materias civiles, penales, constitucionales, contencioso administrativas, laborales, de menores, tributarias u otras que el propio tribunal determine.

b) Cortes de Apelaciones

En nuestro país existen 17 Cortes de Apelaciones, las que tienen asiento en Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Santiago, San Miguel, Rancagua, Talca, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas.

Cada Corte de Apelaciones tiene su propio territorio jurisdiccional y el número de miembros que les designa la ley. Los miembros de las Cortes de Apelaciones reciben el nombre de Ministros.

Cada Corte ejerce su jurisdicción sobre un cierto territorio compuesto por un conjunto de provincias o una región. Actualmente sólo la Octava Región y la Metropolitana poseen dos Cortes de Apelaciones.



Al igual que la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones funcionan en salas o como tribunal pleno. En general, podemos decir que las materias entregadas al conocimiento de una Corte de Apelaciones son los recursos de apelación deducidos en contra de las resoluciones pronunciadas en primera instancia. Es por ello que las Cortes de Apelaciones reciben el nombre de Tribunal de Apelación o de Segunda Instancia.

c) Tribunales de primera instancia

En la base del Poder Judicial se encuentran los tribunales de primera instancia, que son, salvo excepciones, los primeros en ser llamados a conocer de los distintos asuntos que se han judicializado. Actualmente, los tribunales de primera instancia están integrados por:

- i) Los Juzgados de Letras en lo Civil, que son los llamados a resolver asuntos de naturaleza contenciosa o no contenciosa civil. Destacan los juicios ordinarios por incumplimiento de contratos, por indemnización de perjuicios, juicios de arrendamiento, etc.

La Estructura Organizacional, se compone de un Juez, un secretario, y funcionarios de apoyo administrativo.

En virtud del artículo 47 del COT, tratándose de juzgados de letras que cuenten con un juez y un secretario, las Cortes de Apelaciones podrán ordenar que los jueces se aboquen de un modo exclusivo a la tramitación de una o más materias determinadas, de competencia de su tribunal, cuando hubiere retardo en el despacho de los asuntos sometidos al conocimiento del tribunal o cuando el mejor servicio judicial así lo exigiere.

Al Juzgado Civil le corresponde conocer de todas las causas civiles, de comercio y de minas, y se entiende por causas de minas, aquellas en que se ventilan derechos regidos especialmente por el Código de Minería;

- ii) Los Juzgados de Garantía, a los cuales corresponde el conocimiento de los delitos, la aplicación de las penas, la protección a los ofendidos, y en general, garantizar los derechos de todos los intervinientes del proceso penal.

Los Juzgados de Garantía son tribunales compuestos por uno o más jueces con competencia en un mismo territorio jurisdiccional, que actúan y resuelven unipersonalmente los asuntos sometidos a su conocimiento. Se encuentran bajo la supervigilancia de las Cortes de Apelaciones.

A los Juzgados de Garantía les corresponde:

- a. Asegurar los derechos del imputado y demás intervinientes en el proceso penal, de acuerdo a la ley procesal penal;
- b. Dirigir personalmente las audiencias que procedan, de conformidad a la ley procesal penal;
- c. Dictar sentencia, cuando corresponda, en los procedimientos simplificado y abreviado que contempla la ley procesal penal;
- d. Conocer y fallar las faltas penales de conformidad con el procedimiento contenido en la ley procesal penal;
- e. Conocer y fallar, conforme a los procedimientos regulados en el Título I del Libro IV del Código Procesal Penal, las faltas e infracciones contempladas en la Ley de Alcoholes, cualquiera sea la pena que ella les asigne;
- f. Hacer ejecutar las condenas criminales y las medidas de seguridad, y resolver las solicitudes y reclamos relativas a dicha ejecución, de conformidad a la ley procesal penal, y
- g. Conocer y resolver todas las cuestiones y asuntos que le encomiende el Código Orgánico de Tribunales, la ley procesal penal y la ley de responsabilidad penal adolescente.

iii) Tribunales de Juicio Oral en lo Penal

Son tribunales colegiados de primera instancia. Los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal funcionan en una o más salas integradas por tres miembros. Sin perjuicio de lo anterior, podrán integrar también cada sala otros jueces en calidad alternos, con el sólo propósito de subrogar, si fuere necesario, a los miembros que se vieren impedidos de continuar participando en el desarrollo del juicio oral, en los términos que contemplan los artículos 76, inciso final, y 281, inciso quinto, del Código Procesal Penal.

Cada sala esta dirigida por un *Juez Presidente de Sala*. La integración de las salas de estos tribunales, incluyendo los jueces alternos de cada una, se determina mediante sorteo anual, que se efectúa durante el mes de enero de cada año.

A los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal les corresponde:

- a) Conocer y juzgar las causas por crimen o simple delito, salvo aquellas relativas a simples delitos cuyo conocimiento y fallo corresponda a un juez de garantía;
- b) Resolver, en su caso, sobre la libertad o prisión preventiva de los acusados puestos a su disposición;
- c) Resolver todos los incidentes que se promuevan durante el juicio oral, y
- d) Conocer y resolver los demás asuntos que la ley procesal penal y el sistema de justicia militar les encomiende.

Los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal se encuentran sometidos a la supervigilancia de las Cortes de Apelaciones.

iv) Los Juzgados de Familia que conocen la mayor parte de los asuntos de familia, aquellos en que se ve implicado un niño, niña o adolescente y las cuestiones relativas a violencia intrafamiliar que no sean constitutivas de delito.

Los Juzgados de Familia tendrán el número de jueces que para cada caso señala la Ley N° 19.968 y contarán, además, con un consejo técnico, un administrador y una planta de empleados de secretaría y se organizarán en unidades administrativas.

A los Juzgados de Familia les corresponde conocer entre otras materias:

1. Las causas relativas al derecho de cuidado personal de los niños, niñas o adolescentes;
2. Las causas relativas al derecho y el deber del padre o de la madre que no tenga el cuidado personal del hijo, a mantener con éste una relación directa y regular;
3. Las causas relativas al ejercicio, suspensión o pérdida de la patria potestad;
4. Las causas relativas al derecho de alimentos;
5. Todos los asuntos en que aparezcan niños, niñas y adolescentes gravemente vulnerados o amenazados en sus derechos, respecto de los cuales se requiera adoptar una medida de protección;
6. Las acciones de filiación y todas aquellas que digan relación con la constitución o modificación del estado civil de las personas;
7. La autorización para la salida de niños, niñas o adolescentes del país, en los casos en que corresponda de acuerdo con la ley;
8. Las causas relativas al maltrato de niños, niñas o adolescentes
9. El procedimiento de adopción
10. Las acciones de separación, nulidad y divorcio reguladas en la Ley de Matrimonio Civil;
11. Los actos de violencia intrafamiliar;

- v) Los Juzgados Laborales, que son competentes para conocer de las causas laborales, es decir, aquellas que se suscitan entre trabajadores y empleadores.

Las materias de las cuales estos tribunales son competentes para conocer son:

1. Las cuestiones suscitadas entre trabajadores y empleadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales o colectivos del trabajo o de las convenciones y fallos arbitrales en materia del trabajo.
2. Las cuestiones derivadas de la aplicación de las normas sobre organización sindical y negociación colectiva que la ley entrega al conocimiento de los juzgados de letras del trabajo.
3. Las cuestiones derivadas de la aplicación de las normas de previsión o seguridad social, planteadas por pensionados, trabajadores activos o empleadores, salvo en lo referido a la revisión de las resoluciones sobre declaración de invalidez o del pronunciamiento sobre el otorgamiento de licencias medicas.
4. Los juicios en que se demande el cumplimiento de obligaciones que emanen de títulos a los cuales las leyes laborales y de previsión o de seguridad social otorguen merito ejecutivo, salvo que exista dentro de la jurisdicción juzgados de cobranza laboral y previsional, en cuyo caso a éstos les corresponde su conocimiento.
5. Las reclamaciones que procedan contra resoluciones dictadas por autoridades administrativas en materias laborales, previsionales o de seguridad social.
6. Los juicios en que se pretenda hacer efectiva la responsabilidad del empleador derivada de accidentes del trabajo o de enfermedades profesionales,
7. Todas aquellas materias que las leyes entreguen a juzgados de letras con competencia en lo laboral.

En las comunas que no sean territorio jurisdiccional de los juzgados de letras del trabajo, conocerán de las materias antes señaladas los juzgados de letras.

El Código del Trabajo además del procedimiento ordinario establece otros procedimientos especiales como el monitorio, tutela laboral, ejecutivo y reclamo de multas administrativas.

- vi) Los Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional a los cuales compete conocer del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales.

La Ley N° 20.022, publicada el 30 de mayo del año 2000, modifica el modelo organizativo de la justicia del trabajo, separando las funciones jurisdiccionales, según se trate de controversias propiamente laborales (juicios declarativos), o de aquellas destinadas a conocer la ejecución de títulos ejecutivos laborales y previsionales. De esta manera se crean 4 Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional con asiento en las siguientes comunas:

- Valparaíso;
- Concepción;
- San Miguel;
- Santiago.

A estos tribunales les corresponde conocer las siguientes materias:

1. Los juicios en que se demande el cumplimiento de obligaciones que emanen de títulos a los cuales las leyes laborales y de previsión o seguridad social otorguen mérito ejecutivo; y
2. La ejecución de todos los títulos ejecutivos regidos por la ley N° 17.322 modificada por la ley N° 20.023, relativa a la cobranza judicial de imposiciones, aportes y multas en los institutos de previsión (Cotizaciones previsionales, de salud, seguro de cesantía, mutuales de seguridad y cajas de compensación).

Esta competencia se ejerce por los juzgados de letras del trabajo en aquellas comunas en que no existen juzgados de cobranza laboral y previsional.

- vii) Los Juzgados de Letras de competencia común, son tribunales de primera instancia encargados de impartir justicia en dos o más competencias (civil, garantía, familia, cobranza, laboral).

Los Juzgados de Letras son tribunales unipersonales de primera instancia. Están compuestos por un juez letrado, un secretario abogado, y un número variable de funcionarios administrativos o personal de secretaría. Se encuentran bajo la supervigilancia de las Cortes de Apelaciones.

Habitualmente tienen jurisdicción común (esto es, conocen todo tipo de asuntos), sin embargo, también, existen juzgados especializados en materias penales, civiles, de familia y de trabajo.

La legislación vigente establece que debe existir, a lo menos, un juzgado de letras por cada comuna, sin embargo, en la práctica, muchas comunas del país cuentan con más de un tribunal en su jurisdicción, mientras existen otras donde dicha disposición es aún una mera expectativa.

De acuerdo a la jurisdicción asignada, los juzgados se dividen en: Asiento de Corte de Apelaciones, Capital de Provincia y de comuna o agrupación de comunas, sin constituir esto una dependencia jerárquica.

Producto de las reformas procesales de los últimos años muchos Juzgados de Letras poseen competencia en materias de garantía, familia, laboral y cobranza, además de las materias civiles.

viii) Los Juzgados de letras de dos jueces

Estos tribunales son juzgados de competencia común formados por dos jueces pero que actúan jurisdiccionalmente de forma unipersonal (si bien hay dos jueces, cada causa la conoce y resuelve un solo juez). Tal como los juzgados de letras tradicionales pueden tener competencia en materias de garantía, familia, laboral y cobranza, además de las materias civiles.

Están compuestos por dos jueces, un administrador, un jefe de unidad y un número variable de funcionarios administrativos o personal de secretaría.

Son tribunales de primera instancia que se encuentran bajo la supervigilancia de las Cortes de Apelaciones.

2. DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES



Los derechos humanos son aquellos derechos inherentes a la persona y que le pertenecen en razón a su dignidad, por su naturaleza y condición humana. Son independientes del derecho positivo vigente.

Los derechos fundamentales, por su parte, son los derechos humanos garantizados en el ordenamiento jurídico y reconocidos principalmente en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Son, en consecuencia, los que conforman el bloque constitucional de derechos humanos.

Entre los tratados internacionales de mayor relevancia en el ámbito de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana cabe mencionar:

- 1) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;



- 2) El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y
- 3) La Convención Americana de Derechos Humanos.

El catálogo de derechos fundamentales consagrados en nuestro ordenamiento jurídico suele clasificarse en:

2.1. Derechos Civiles

La Constitución asegura expresamente el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, protegiendo de manera expresa la vida del que está por nacer.

A continuación, la Constitución consagra el respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia. La infracción de este derecho, a través de un medio de comunicación social, puede constituir delito. Esta protección de la vida privada se complementa con el derecho a la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada, salvo en los casos y formas determinados por la ley.

Se asegura también a toda persona el derecho a la libertad de conciencia, a la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, las buenas costumbres o al orden público. En similar sentido el derecho a la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder por los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio del derecho.

Igualmente, la Carta Fundamental reconoce el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual, la libre residencia, circulación y entrada o salida del país, en las condiciones establecidas por la ley, y además una indemnización por error judicial, que cubre los perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido el procesado o condenado por resolución o sentencia injustificadamente errónea o arbitraria, declarada así por resolución de la Corte Suprema de Justicia.

Por su parte, se garantiza a toda persona el derecho a un debido proceso, a defensa y a la irretroactividad de la ley penal, entre otras importantes garantías constitucionales.

En materia laboral, se asegura la libertad de trabajo, el derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo, prohibiéndose cualquier discriminación que no se base en la capacidad e idoneidad personal. Con todo, en determinadas circunstancias, la ley puede exigir nacionalidad chilena y límites de edad.

En cuanto a la libertad económica, se establece el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulan.

La Constitución Política reconoce el derecho a la propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Sólo la ley determina el modo de adquirir, usar y gozar de la propiedad y disponer de ella, como asimismo las limitaciones y obligaciones que derivan de su función social. El titular del derecho de propiedad sólo puede ser privado de él o de algunos de sus atributos o facultades esenciales por una ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado tiene, por cierto, derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado.

2.1.1. La garantía de igualdad



Con relación a las igualdades que forman parte de los derechos civiles y políticos, nuestra Constitución Política asegura las siguientes:

- 1) La igualdad ante la ley en virtud de la cual ni la ley, ni autoridad alguna pueden establecer diferencias arbitrarias.

- 2) La igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas públicas.
- 3) La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.
- 4) La igualdad en la admisión a todas las funciones públicas, sin otros requisitos que los que impongan la Constitución y las leyes.

La garantía de igualdad resulta fundamental en un Estado de Derecho y se expresa, tanto como un principio jurídico que obliga a los poderes públicos a proteger su contenido, como el derecho subjetivo de toda persona de exigir un trato igualitario.

En particular, en materia de igualdad entre hombres y mujeres, desde mediados de los años '90 se ha incorporado la denominada "perspectiva de género" como un instrumento para promover la igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la desigual distribución del poder entre ambos.

Tratándose de personas con discapacidad, la promulgación de la Ley N° 20.422, sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, ha significado un importante avance en la garantía efectiva de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad con el fin de obtener su plena inclusión social, asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad.

En el caso de personas extranjeras, cabe considerar que nuestra Constitución les garantiza los mismos derechos que a los chilenos pudiendo votar en las elecciones si tienen permanencia definitiva y viven en Chile por más de 5 años. En materia de educación, el ordenamiento jurídico les garantiza educación gratuita desde la enseñanza preescolar hasta la media, incluso si su condición migratoria es irregular; y en salud, tienen derecho a la atención de urgencia y también en forma privada pagando las prestaciones médicas y hospitalarias y, si son niños o adolescentes, hay atención de salud en los establecimientos de la red pública en igualdad de condiciones que los chilenos.

2.2. Derechos Políticos

Desde esta perspectiva, son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. Esta calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieran.

Además, los ciudadanos tienen derecho a participar en la aprobación o rechazo de reformas constitucionales, bajo los supuestos establecidos en la propia Carta Fundamental.

Finalmente, cabe considerar que los ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentren fuera del país pueden sufragar desde el extranjero en las elecciones primarias presidenciales, en las elecciones de Presidente de la República y en los plebiscitos nacionales. Tratándose de extranjeros avecindados en Chile por más de cinco años, que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva, podrán también ejercer el derecho de sufragio.

2.3. Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Son los derechos humanos socioeconómicos, que se diferencian de los derechos civiles y políticos. Los derechos económicos, sociales y culturales están contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuya protección contempla el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se consideran como derechos de segunda generación e incluyen, entre otros, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, a la seguridad social y a la educación.

2.4. Protección de Garantías Constitucionales

Un simple listado de derechos establecidos en el texto de la Constitución, por muy completo que éste sea, no serviría de mucho si no se consignaran los recursos o medios idóneos que permitan a las personas recurrir a un órgano jurisdiccional objetivo e imparcial cuando los derechos fundamentales sean amenazados, perturbados o conculcados por acto de autoridad o de particulares, para que éste restablezca el imperio del derecho. Corresponde a los tribunales asegurar el respeto de esas garantías por medio de las acciones constitucionales, como la acción de amparo y recurso de protección.

3. EL ESTADO DE DERECHO

Hablamos de Estado de derecho para referirnos a aquel que se rige por un sistema de leyes e instituciones ordenado en torno de una Constitución, en el que el ordenamiento jurídico organiza y fija los límites de actuación de autoridades, organismos y funcionarios.

Habitualmente se atribuye al Estado de derecho las siguientes características esenciales:

- a. La función jurisdiccional está radicada en tribunales de justicia a los que les corresponde conocer de las causas civiles y criminales, resolverlas y hacer ejecutar lo juzgado para un caso determinado.
- b. El ordenamiento jurídico es expresión auténtica de la nación, manifestada a través del órgano constituyente o legislativo elegido libremente, en elecciones donde la ciudadanía se pronuncia de manera informada, libre y sin temor a represalias.
- c. El poder Estatal se distribuye en órganos diferenciados que desarrollan su tarea con suficiente autoridad e independencia. Ello implica la existencia de órganos ejecutivos, legislativos, judiciales, de control, entre otros, que desarrollan sus funciones específicas y que pueden evitar que los otros abusen del poder o realicen actos arbitrarios.
- d. Los órganos del Estado sólo pueden actuar válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescribe la ley. En consecuencia, toda autoridad es responsable por los actos contrarios al ordenamiento jurídico generándose responsabilidad penal, civil, administrativa y/o política.
- e. El ordenamiento jurídico reconoce, ampara y promueve los derechos humanos, estableciendo mecanismos o medios jurídicos eficaces.

4. EL CIUDADANO Y SUS DERECHOS

Los derechos de los ciudadanos en general y, particularmente frente a los órganos de la Administración del Estado y de la Administración de Justicia son ejercidos cada vez con más fuerza, en la medida que la normativa perfila nuevas y mejores herramientas para hacerlos efectivos y también en la medida que la ciudadanía se va informando acerca de los mismos.

El ciudadano, en consecuencia, descubre que puede ubicarse desde distintas perspectivas o posiciones en su relación con el Estado y con la sociedad en general, como usuario de servicios, beneficiario de políticas públicas, cliente, solicitante de información pública, funcionario o defensor de sus datos personales, entre otros.

4.1. El ciudadano y el Poder Judicial.



Sin perjuicio de los recursos administrativos, es posible sostener que los tribunales de justicia son el espacio esencial al que los ciudadanos recurren en busca de la protección, restablecimiento o reparación de sus derechos cada vez que éstos son



amenazados o vulnerados, sin embargo hay que considerar también que, en su calidad de ciudadanos, les asisten derechos y tienen deberes en relación al trato en cuanto usuarios del sistema judicial.

Dentro de los principales derechos que podemos mencionar, está el de recibir información general y actualizada sobre el funcionamiento del Poder Judicial y sobre las características y requisitos genéricos de los distintos procedimientos judiciales y administrativos en que deba o pueda participar; a conocer el horario de atención al público, el que deberá encontrarse en un lugar visible y accesible; a obtener información clara, completa, veraz y actualizada sobre el estado de su trámite; a acceder a los documentos, libros, archivos y registros judiciales que no tengan carácter reservado; a ser informada con un lenguaje sencillo y preciso; entre otros.

El ciudadano tiene también derecho a ser atendido con dignidad, respeto e igualdad por las autoridades y funcionarios del Poder Judicial, sin distinción de raza, género, religión, opinión política, nacionalidad, origen social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición; a exigir reserva de la información que proporcione a los funcionarios y autoridades y que pertenezca a su esfera privada, salvo aquella que por ley deba ser puesta a disposición de las partes o de terceros.

Adicionalmente, tiene derecho a conocer la identidad y categoría de la autoridad o funcionario que le atienda; a recibir respuesta oportuna a las peticiones que formule respetuosamente; a que las presentaciones judiciales sean proveídas y las resoluciones judiciales sean dictadas en un plazo razonable y a exigir que las actuaciones judiciales o en las que se solicite su comparecencia se celebren con puntualidad.

También tiene derecho a expresar su opinión sobre la calidad de la atención brindada y a formular consultas, reclamos, felicitaciones o sugerencias relativas al funcionamiento y a la calidad de la atención recibida, y a ser informado respecto del procedimiento a seguir ante dichas consultas, reclamos, felicitaciones o sugerencias.

En materia de costos, el ciudadano tiene derecho a incurrir en los menores costos económicos posibles; a que su comparecencia personal ante los órganos y tribunales que integran el Poder Judicial sea lo menos gravosa posible; y a disponer gratuitamente de los formularios que se necesiten para el ejercicio de sus derechos ante los tribunales cuando no se ordene obligatoriamente la intervención de abogado u otro profesional.

En relación a situaciones particulares, cabe agregar que la Ley de Juzgados de Familia establece que el niño, niña o adolescente tiene derecho a ser oído en todo proceso judicial en que esté directamente implicado y a que se guarde la reserva necesaria para preservar su intimidad y el derecho a su propia imagen.

Por su parte, tratándose de los ciudadanos con discapacidad sensorial, física o psíquica, se debe considerar especialmente que ellos pueden ejercer sus derechos y que, en casos expresamente establecidos en la ley, tienen derecho a la utilización de un intérprete de signos o de medios tecnológicos para comunicarse.

Finalmente, en Chile los extranjeros tienen derecho a acceder a la justicia en igualdad de condiciones que los nacionales y, en consecuencia, deben ser atendidos sin sufrir discriminación alguna por razón de su raza, lengua, religión o creencias.

En materia de deberes, es útil recordar que el ciudadano que recurre al Poder Judicial tiene el deber de respetar a los funcionarios y autoridades que le atienden, respetar los procedimientos y horarios dispuestos para su atención y no dañar los bienes y dependencias que se ponen a disposición del público.

4.2. El ciudadano y el acceso a información pública.

La Ley N° 20.285, de Transparencia de la función pública, establece el derecho de acceso a la información y los procedimientos para su ejercicio y amparo.

La referida ley distingue al efecto entre transparencia activa y pasiva.

La primera, consiste en la obligación que tienen los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades, las Fuerzas Armadas, los servicios públicos, las empresas del Estado, la Contraloría General de la República, el Banco Central, el Congreso Nacional, los Tribunales que forman parte del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Justicia Electoral, de mantener información actualizada en sus respectivas páginas web.

Si el órgano obligado a mantener la información referida en su página web incumple con esta obligación, cualquier ciudadano puede denunciar al Consejo para la Transparencia y a la Contraloría General de la República.

El Consejo para la Transparencia es un servicio público autónomo que tiene por funciones principales promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas de transparencia y garantizar el derecho de acceso a la información.

En relación a la transparencia denominada “pasiva”, podemos señalar que es el derecho que tienen los ciudadanos para solicitar información de cualquier órgano de la Administración del Estado presencialmente en el servicio al cual se requiere el acceso a la información, o bien a través de su respectiva página web, completando el formulario diseñado especialmente para estos fines.

En su solicitud de acceso a la información pública, el ciudadano deberá indicar: nombre, apellidos y dirección del solicitante, una identificación clara de la información que requiere, el órgano al que se dirige y su firma. Esta solicitud es gratuita y el organismo requerido sólo puede exigir el pago de los costos directos de reproducción de los antecedentes que se solicitan.

Una vez hecha la solicitud, el requerido tiene un plazo máximo de 20 días hábiles para dar respuesta, plazo que se puede extender excepcionalmente por otros 10 días hábiles, lo que le debe ser comunicado al solicitante.

En caso que la información solicitada no sea entregada dentro de plazo o sea denegada por causa que no se estime por el ciudadano como de secreto o reserva, éste puede presentar una acción de reclamo –o amparo- ante el Consejo para la Transparencia, dentro del plazo de 15 días hábiles. Recibido el amparo, el Consejo para la Transparencia pide informe al organismo reclamado el cual tiene 10 días hábiles para formular sus observaciones y/o descargos. Evacuado el informe o transcurrido el plazo, el Consejo para la Transparencia resuelve el amparo. Si decide que debe entregarse la información, fijará un plazo prudente para su entrega.

En contra de la resolución del Consejo para la Transparencia procede recurso de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro del plazo de 15 días corridos. La interposición de este recurso suspende los efectos de la resolución recurrida que da lugar al acceso a la información.

Finalmente, cabe considerar que el jefe de servicio del organismo –su Subsecretario o Director- que niegue infundadamente el acceso a la información, puede ser sancionado con una multa de 20% a 50% de su remuneración. Si la autoridad persiste en su actitud, se le doblará la sanción pudiendo ser suspendido del cargo por cinco días.

5. TRANSPARENCIA Y PODER JUDICIAL



Tal como se señaló en el apartado precedente, la Ley N° 20.285, de Transparencia de la función pública, sólo establece obligaciones para el Poder Judicial en relación a transparencia activa, pero no así para los requerimientos y solicitudes de acceso a la información que formulan los ciudadanos: transparencia pasiva. Sin embargo, desde el mes de diciembre de 2013 el Poder Judicial se sumó, de manera voluntaria, al Portal de Transparencia del Estado que integran también otras instituciones, como la Contraloría General de la República y la Cámara de Diputados.

En consecuencia, el Poder Judicial asumió desde ese momento un compromiso institucional expreso de entregar información a la ciudadanía en forma transparente, asertiva, con un lenguaje comprensible, sin más límite que las exigencias legales que establecen la reserva o el secreto de asuntos específicos.

Adicionalmente, hay que destacar que el Poder Judicial cuenta, desde el año 2008, con una Comisión de Transparencia, encargada de velar, promover e impulsar iniciativas que contribuyan al fortalecimiento de la transparencia como un valor institucional, así como también conocer y resolver las peticiones que en esta materia realice la ciudadanía, haciendo efectivo el cumplimiento de las normas relativas a la materia establecidas tanto en la referida Ley N° 20.285, como en la Constitución Política de la República, el Código Orgánico de Tribunales y en los acuerdos adoptados por el tribunal pleno.

En este contexto, se exige a los miembros del Poder Judicial, en garantía de los principios de probidad y transparencia, presentar declaraciones juradas de intereses, de patrimonio y de no ser dependiente de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales.

Dentro de las obligaciones que impone la Ley 20.285 al Poder Judicial, hay que considerar la establecida en el artículo octavo transitorio, que impone a la Corporación Administrativa del Poder Judicial el deber de mantener a disposición permanente del público en sus sitios electrónicos, y debidamente actualizados, los antecedentes indicados en el artículo 7° de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado.

En los asuntos cuya cuantía exceda de 500 unidades tributarias mensuales o respecto de los cuales se impongan multas superiores a dicho monto, o penas de presidio o reclusión superiores a tres años y un día, las sentencias de término de los tribunales ordinarios o especiales, y las definitivas en caso de que las primeras sólo modifiquen o reemplacen parte de éstas, deberán publicarse.

En consecuencia, la norma no obliga a la publicidad de todas las sentencias ejecutoriadas, sino solo aquellas consideradas según su cuantía. Sobre este punto cabe anotar que la cuantía, en materia civil corresponde al valor de lo disputado y, en materia penal a la pena que el delito lleva consigo.

En materia de transparencia activa el Poder Judicial, junto con cumplir la obligación de mantener información permanentemente actualizada en su página web, publica información adicional, tal como la votación de los candidatos a ministros de la Corte Suprema y la publicación de sus antecedentes en el sitio web, los concursos públicos para la selección de abogados integrantes, las declaraciones de patrimonio, intereses y currículos de todos los ministros de la Corte Suprema y ministros de las Cortes de Apelaciones del país.

6. LA ÉTICA JUDICIAL



La ética judicial está relacionada estrechamente con el principio de independencia judicial. Implica el deber de todo juez de adoptar las normas más elevadas posibles de conducta personal y profesional.

6.1. Principios

La ética judicial se inspira en los siguientes principios:

1. Dignidad.

Exige a todo miembro del Poder Judicial ejercer su cargo con dignidad, absteniéndose de toda conducta contraria a la seriedad y decoro que el cargo exige. Este principio debe expresarse especialmente en las audiencias, en relación a las exigencias que requiere la dignidad de la magistratura en el vestuario, trato con abogados y otros partícipes en los procedimientos, así



como con los subordinados y público en general, evitando toda actitud o comportamiento que menoscabe tal condición.

2. Probidad.

Consiste en el deber de actuar con rectitud y honestidad, procurando prestar servicio satisfaciendo el interés general de la Justicia y desechando todo provecho o ventaja personal que pueda lograr por sí o a través de otras personas.

Esta obligación exige abstenerse de mostrar interés por asuntos de que conozca o pueda conocer un tribunal, interceder o intervenir en cualquier forma a favor o en contra de persona alguna, cualquiera que sea la naturaleza del juicio o gestión de que se trate. Ella comprende también los concursos, nombramientos, calificaciones, traslados y demás materias relativas al personal del Poder Judicial.

3. Integridad.

Implica una conducta recta e intachable, de modo de promover la confianza de la comunidad en la Justicia. En consecuencia, con su comportamiento procurará no dar lugar a críticas ni reclamos de parte de quienes recurren a los tribunales ni de otras autoridades o del público, en general.

4. Independencia.

Tanto los jueces, como los demás funcionarios judiciales, deben en conjunto e individualmente, velar por la autonomía de los tribunales y hacerla respetar en toda circunstancia.

5. Prudencia.

Todo miembro del Poder Judicial debe actuar con diligencia, tino y criterio en todas las materias en que le corresponda intervenir en razón o con ocasión de sus funciones, procurando que la forma como las ejercen inspire confianza a la comunidad.

6. Dedicación.

Los jueces y demás funcionarios judiciales deberán tener una disposición permanente a desempeñar sus cargos con acuciosidad, conocimiento y eficiencia, actuando con equidad y diligencia en todas las funciones que deban cumplir.

7. Sobriedad.

Los jueces y otros funcionarios del Poder Judicial deben demostrar templanza y austeridad tanto en el ejercicio de sus cargos como en su vida social, evitando toda ostentación que pueda plantear dudas sobre su honestidad y corrección personales.

8. Respeto.

Los jueces y demás funcionarios judiciales deberán demostrar respeto por la dignidad de todas las personas en las audiencias y demás actuaciones que lleven a cabo con motivo del desempeño de sus cargos.

9. Reserva.

Los jueces y demás funcionarios judiciales deben mantener absoluta reserva sobre todos los asuntos que así lo exijan y de los que tomen conocimiento, absteniéndose de darlos a conocer, emitir opiniones en público o privadas a su respecto, permitir que sean conocidos por otras personas ni utilizar la información que posean en razón de sus funciones en beneficio propio o ajeno.

Los Ministros, Jueces y demás funcionarios judiciales deberán abstenerse de conceder entrevistas, formular declaraciones, aceptar y contestar interrogatorios e incurrir de cualquier

modo en publicidad, en diarios, revistas, televisión o cualquier medio de comunicación social sobre las causas sometidas a su conocimiento o de otro Tribunal, bajo apercibimiento de aplicación de las medidas disciplinarias que procedan.

10. Prohibición de Recibir Estímulos Pecuniarios.

Se prohíbe a los jueces y demás funcionarios judiciales la recepción de estímulos de carácter pecuniario que excedan lo simbólico por el ejercicio de sus labores, pues ello, aparte de crear un ambiente público desfavorable a la función judicial en general, afecta seriamente la independencia e imparcialidad de esos funcionarios.

6.2. Inhabilidades



Los jueces o funcionarios auxiliares de la administración de justicia no deben intervenir en asuntos en que pueda estar en duda su imparcialidad. En este caso, el juez o funcionario debe señalar con el mayor detalle y precisión los hechos que constituirían la causal de inhabilidad, indicando claramente la norma legal que autoriza su exclusión en el caso.

Todos los jueces, abogados integrantes y relatores deben dejar la debida constancia, con igual precisión y objetividad de las circunstancias que, a su juicio, puedan configurar una causal de recusación amistosa a su respecto.

6.3. Prohibiciones



En el ejercicio de sus cargos, los funcionarios del Poder Judicial están sujetos a las siguientes prohibiciones:

- a) Expresar su juicio respecto de los negocios que por la ley son llamados a fallar;
- b) Insinuar juicios, aun privadamente, sobre el asunto que es llamado a resolver;
- c) De ejercer la abogacía, y sólo podrán defender causas personales o de sus cónyuges, convivientes civiles, ascendientes, descendientes o hermanos.
- d) Adquirir bienes subastados por la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

6.4. Comisión de Ética de la Corte Suprema

La Comisión de Ética de la Corte Suprema, tiene por objeto prestar cooperación al Pleno de la Corte Suprema en el ejercicio de funciones de prevención, control y corrección del comportamiento de los Ministros y Fiscal del Tribunal. Está conformada por el Presidente titular de la Corte Suprema, que la preside, y por dos Ministros titulares nombrados por el Pleno de la Corte Suprema, a proposición del Presidente.

A la Comisión le corresponde conocer las conductas de Ministros y Fiscal Judicial de la Corte Suprema que puedan importar una contravención a la ética judicial o que sean reñidas con la probidad y la moral y, desempeña su labor con miras a su prevención, control y corrección.

La Comisión debe guardar estricta y total reserva sobre las materias, asuntos, antecedentes y documentos que se relacionen con sus actuaciones.



CAPÍTULO II: ESTRUCTURA DE LOS TRIBUNALES PENALES, LABORALES Y DE FAMILIA

1. EL COMITÉ DE JUECES

Es el nivel superior de decisión dentro del tribunal, integrado por un número variable de tres a cinco Jueces dependiendo de la dotación del tribunal o juzgado.

El Art. 23 del Código Orgánico de Tribunales asigna al Comité de Jueces las siguientes funciones:

- a) Aprobar el procedimiento objetivo y general a que se refieren los artículos 15 y 17¹, en su caso;
- b) Designar, de la terna que le presente el juez presidente, al administrador del tribunal;
- c) Resolver acerca de la remoción del administrador;
- d) Designar al personal del juzgado, a propuesta de terna del administrador;
- e) Conocer de la apelación que se interpusiere en contra de la resolución del administrador que remueva a los jefes de unidades o a los empleados del tribunal;
- f) Decidir el proyecto de plan presupuestario anual que le presente el juez presidente, para ser propuesto a la Corporación Administrativa, y
- g) Conocer de todas las demás materias que señale la ley.

Existirá Comité de Jueces en los tribunales en los que sirvan tres o más jueces. El Comité se conforma de acuerdo a los siguientes criterios:

- *Tribunales compuestos por cinco jueces o menos*, el Comité se conformará por todos ellos.
- *Tribunales compuestos por más de cinco jueces*, el Comité se compondrá por los cinco jueces que sean elegidos por la mayoría del tribunal, cada dos años.

En los Juzgados en que se desempeñen uno o dos jueces, las atribuciones indicadas en las letras b), c), d) y f)² corresponderán al Presidente de la Corte de Apelaciones respectiva. A su vez, las atribuciones definidas en las letras a), e), g) y h) quedarán radicadas en el juez que cumpla la función de Juez Presidente.

Los acuerdos del Comité de Jueces se adoptarán por mayoría de votos; en caso de empate decidirá el voto del Juez Presidente.

2. JUEZ PRESIDENTE

El objetivo general del cargo es velar por el adecuado funcionamiento del tribunal o juzgado.

El Art. 24 del Código Orgánico de Tribunales establece que en el cumplimiento de su función, el Juez Presidente tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Presidir el Comité de Jueces.
- b) Relacionarse con la Corporación Administrativa del Poder Judicial en todas las materias relativas a la competencia de ésta³

¹ Art. 15, La distribución de las causas entre los jueces de los juzgados de garantía se realizará de acuerdo a un procedimiento objetivo y general, que deberá ser anualmente aprobado por el Comité de Jueces del juzgado a propuesta del juez presidente, o sólo por este último, según corresponda.

Art. 17, (inciso cuarto) La distribución de las causas entre las diversas salas se hará de acuerdo a un procedimiento objetivo y general que deberá ser anualmente aprobado por el Comité de Jueces del tribunal, a propuesta del Juez Presidente.

² Designar, de la terna que le presente el juez presidente, al administrador del tribunal; Calificar anualmente al administrador del tribunal; Resolver acerca de la remoción del Administrador; Conocer de la apelación que se interpusiere en contra de la resolución del administrador que remueva al subadministrador, a los jefes de unidades o a los empleados del juzgado o tribunal;

³ De acuerdo al Título XIV, del Código Orgánico de Tribunales.

- c) Proponer al Comité de Jueces el procedimiento objetivo y general a que se refieren los artículos 15 y 17⁴;
- d) Elaborar anualmente una cuenta de la gestión jurisdiccional del juzgado;
- e) Aprobar los criterios de gestión administrativa que le proponga el Administrador del Tribunal y supervisar su ejecución;
- f) Aprobar la distribución del personal que le presente el Administrador del Tribunal;
- g) Calificar al personal, teniendo a la vista la evaluación que le presente el Administrador del Tribunal;
- h) Presentar al Comité de Jueces una terna para la designación del Administrador del Tribunal;
- i) Proponer al Comité de Jueces la remoción del Administrador del Tribunal.

El Juez Presidente es elegido de entre los miembros del Comité de Jueces, dura dos años en el cargo pudiendo ser reelegido hasta por un nuevo período.

En aquellos tribunales que no cuenten con Comité de Jueces se aplicarán los siguientes criterios:

- *Tribunales en que se desempeñe solo un Juez*, éste tendrá las atribuciones de Juez Presidente, con excepción de las contempladas en las letras a) y c)⁵. Las atribuciones de las letras h) y j)⁶ las ejercerá el Juez ante el Presidente de la Corte de Apelaciones respectiva.
- *Tribunales conformados por dos Jueces*, las atribuciones de Juez Presidente, con las mismas excepciones del caso anterior, se radicarán anualmente en uno de ellos empezando por el más antiguo.

En ambos casos, el Juez Presidente deberá realizar, además de las señaladas en el artículo 23 del Código Orgánico de Tribunales, las siguientes atribuciones (asignadas al Comité de Jueces):

- a) Aprobar el procedimiento objetivo y general a que se refieren los artículos 15 y 17 en su caso;
- b) Designar al personal del juzgado o tribunal, a propuesta de terna del administrador;
- c) Decidir el proyecto de plan presupuestario anual que le presente el juez presidente, para ser propuesto a la Corporación Administrativa, y
- d) Conocer de todas las demás materias que señale la ley.

3. ADMINISTRADOR DE TRIBUNAL:

Son funcionarios auxiliares de la administración de justicia encargados de organizar y controlar la gestión administrativa de los tribunales de juicio oral en lo penal, juzgados de garantía, del trabajo, de familia, cobranza laboral y previsional y en los juzgados de competencia común que cuentan con dos o más jueces.

El objetivo general de este cargo es ser responsable por organizar y controlar la gestión administrativa del Tribunal, administrando eficaz y eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros asignados a su Tribunal.

⁴ Art. 15, La distribución de las causas entre los jueces de los juzgados de garantía se realizará de acuerdo a un procedimiento objetivo y general, que deberá ser anualmente aprobado por el Comité de Jueces del juzgado a propuesta del juez presidente, o sólo por este último, según corresponda.

Art. 17, (inciso cuarto) La distribución de las causas entre las diversas salas se hará de acuerdo a un procedimiento objetivo y general que deberá ser anualmente aprobado por el Comité de Jueces del tribunal, a propuesta del Juez Presidente.

⁵ Presidir el Comité de Jueces, y Proponer al Comité de Jueces el procedimiento objetivo y general a que se refieren los artículos 15 y 17.

⁶ Presentar al Comité de Jueces una terna para la designación del Administrador del Tribunal; Proponer al Comité de Jueces la remoción del Administrador de Tribunal.

El Art. 389 B del Código Orgánico de Tribunales otorga al Administrador de Tribunal las siguientes funciones o responsabilidades:

- a) Dirigir las labores administrativas propias del funcionamiento del tribunal o juzgado, bajo la supervisión del Juez Presidente del Comité de Jueces.
- b) Proponer al Comité de Jueces la designación del subadministrador, de los jefes de unidades y de los empleados del tribunal.
- c) Proponer al Juez Presidente la distribución del personal.
- d) Evaluar al personal a su cargo.
- e) Distribuir las causas a las salas del respectivo tribunal, conforme a un procedimiento objetivo y general aprobado.
- f) Remover al subadministrador, a los jefes de unidades y al personal de empleados, de conformidad al artículo 389 F.
- g) Llevar la contabilidad y administrar la cuenta corriente del tribunal, de acuerdo a las instrucciones del Juez Presidente.⁷
- h) Dar cuenta al Juez Presidente acerca de la gestión administrativa del tribunal.
- i) Elaborar el presupuesto anual, que deberá ser presentado al Juez Presidente a más tardar en el mes de mayo del año anterior al ejercicio correspondiente. El presupuesto deberá contener una propuesta detallada de la inversión de los recursos que requerirá el tribunal en el ejercicio siguiente.
- j) Adquirir y abastecer de material de trabajo al tribunal, en conformidad con el plan presupuestario aprobado para el año respectivo.
- k) Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por el Comité de Jueces o el Juez Presidente o que determinen las leyes.

El mismo artículo establece que *“para el cumplimiento de sus funciones, el administrador de tribunal se atenderá a las políticas generales de selección de personal, de evaluación, de administración de recursos materiales y de personal, de diseño y análisis de la información estadística y demás que dicte el Consejo de la Corporación Administrativa del Poder judicial, en el ejercicio e sus atribuciones propias.”*

4. UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Los tribunales reformados se dividen internamente en unidades administrativas especializadas según las competencias del tribunal.

En todos los tribunales reformados existe las unidades de: Administración de Causas, Servicios y Atención de Público.

La unidad de sala se encuentra presente en todos los tribunales reformados, excepto en los juzgados de cobranza laboral y previsional.

En Tribunales de Juicio Oral en lo Penal existe la unidad de Testigos y Peritos. En juzgados de familia existe la Unidad de Cumplimiento. En tribunales que deban conocer materias de cobranza laboral y previsional existen la Unidad de Liquidaciones.

A. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CAUSAS:

Esta unidad es responsable de desarrollar toda la labor relativa al manejo de causas y registros del proceso penal en el tribunal o juzgado, incluidas las relativas a las notificaciones, al manejo de las fechas y salas para las audiencias; al archivo judicial básico, al ingreso y número de rol de las causas nuevas; a la primera audiencia judicial de los detenidos; a la actualización diaria de la base de datos que contenga las causas del tribunal o juzgado, y a las estadísticas básicas del tribunal o juzgado.

B. UNIDAD DE SERVICIOS:

Esta unidad es la encargada de las labores de soporte técnico de la red computacional del tribunal, de la contabilidad y de apoyo a la actividad administrativa del tribunal, y la coordinación

⁷ De acuerdo a las políticas establecidas por la Corporación Administrativa del Poder Judicial.



y abastecimiento de todas las necesidades físicas y materiales para la realización de las audiencias.

C. UNIDAD DE ATENCIÓN DE PÚBLICO:

Es la unidad responsable de otorgar una adecuada atención, orientación e información al público que concurra al tribunal, especialmente a la víctima, al defensor y al imputado, recibir la información que éstos entreguen y manejar la correspondencia del tribunal.

D. UNIDAD DE SALA:

Es la unidad responsable de la organización y asistencia a la realización de audiencias.

Esta encargada de optimizar el tiempo disponible para audiencias, para ello debe colaborar con los jueces en la administración de la agenda de audiencias y desarrollar las funciones de preparación, registro y ejecución de las audiencias.

E. UNIDAD DE APOYO A TESTIGOS Y PERITOS:

Esta unidad es responsable de brindar adecuada y rápida atención, información y orientación a los testigos y peritos citados a declarar en el transcurso del juicio oral. Esta unidad existe sólo en los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal.

F. UNIDAD DE CUMPLIMIENTO

Esta unidad es responsable por desarrollar las gestiones necesarias para el adecuado y cabal cumplimiento de las resoluciones, particularmente de aquellas que requieren de cumplimiento sostenido en el tiempo.

G. UNIDAD DE LIQUIDACIÓN:

En tribunales que deban conocer materias de cobranza laboral y previsional deberán considerar la existencia de una Unidad de Liquidación, responsable por efectuar los cálculos, con especial mención del monto de la deuda, reajustes e interés y eventualmente las multas que determine la sentencia.

5. LOS CONSEJOS TÉCNICOS

Los Consejos Técnicos, según el Código Orgánico de Tribunales, son organismos auxiliares de la administración de justicia, compuestos por profesionales, cuya función es asesorar individual o colectivamente a los jueces con competencia en asuntos de familia, en el análisis y mayor comprensión de los asuntos sometidos a su conocimiento en el ámbito de su especialidad.

6. AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

El Código Orgánico de Tribunales, en sus Títulos XI y XII, establece los aspectos relativos a los Auxiliares de la Administración de Justicia, en cuanto los determina y fija, asimismo, el régimen de sus nombramientos, requisitos, inhabilidades e incompatibilidades.

Es posible definir a los Auxiliares de la Administración de Justicia como aquellos funcionarios, debidamente nombrados, encargados de coadyuvar en la administración de justicia, en la gestión de los tribunales, y en el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

Algunos de ellos gozan de sueldo fiscal y, otros, perciben por el cumplimiento de sus funciones el arancel u honorarios que las leyes o instrucciones establezcan. Asimismo, para los efectos del Escalafón General de Antigüedad del Poder Judicial, algunos figuran en el Escalafón Primario y otros en el Escalafón Secundario.

Son Auxiliares de la Administración de Justicia los que se indican a continuación:

A. Fiscalía Judicial:

La fiscalía judicial es ejercida por el fiscal judicial de la Corte Suprema, quien es el jefe de servicio, y por los fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones. Las funciones de la fiscalía judicial se limitan a los negocios judiciales y a los de carácter administrativo del Estado en que una ley requiera especialmente su intervención.

B. Defensoría Pública (respecto de asuntos distintos a la Defensoría Penal Pública)

Los defensores públicos pueden representar en asuntos judiciales a los incapaces, a los ausentes y a las fundaciones de beneficencia u obras pías, que no tengan guardador, procurador o representante legal. Siempre que el mandatario de un ausente cuyo paradero se ignore, careciere de facultades para contestar nuevas demandas, asumirá la representación del ausente el defensor respectivo, mientras el mandatario nombrado obtiene la habilitación de su propia personería o el nombramiento de un apoderado especial para este efecto, conforme a lo previsto en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil.

En los casos que trata este artículo el honorario de los defensores públicos se determinará con arreglo a lo prevenido en el artículo 2117 del Código Civil, excepto los Defensores Públicos de Santiago y Valparaíso, que gozarán de sueldo fiscal.

Son responsables de velar por el recto desempeño de las funciones de los guardadores de incapaces, de los curadores de bienes, de los representantes legales de las fundaciones de beneficencia y de los encargados de la ejecución de obras pías; y puede provocar la acción de la justicia en beneficio de estas personas y de estas obras, siempre que lo estime conveniente al exacto desempeño de dichas funciones.

C. Relatores.

La Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones cuentan con relatores, encargados de: dar cuenta diaria de las solicitudes que se presenten en calidad de urgentes, de las que no pudieren ser despachadas por la sola indicación de la suma y de los negocios que la Corte mandare pasar a ellos; poner en conocimiento de las partes o sus abogados el nombre de las personas que integran el tribunal, en el caso a que se refiere el artículo 166 del Código de Procedimiento Civil; revisar los expedientes que se les entreguen y certificar que están en estado de relación. En caso que sea necesario traer a la vista los documentos, cuadernos separados y expedientes no acompañados o realizar trámites procesales previos a la vista de la causa, informará de ello al Presidente de la Corte, el cual dictará las providencias que correspondan; hacer relación de los procesos; anotar el día de la vista de cada causa los nombres de los jueces que hubieren concurrido a ella, si no fuere despachada inmediatamente; y, cotejar con los procesos los informes en derecho, y anotar bajo su firma la conformidad o disconformidad que notaren entre el mérito de éstos y los hechos expuestos en aquéllos.

D. Secretarios de Cortes y Juzgados de Letras.

Los secretarios de las Cortes y juzgados de letras, son ministros de fe pública encargados de autorizar, salvo las excepciones legales, todas las providencias, despachos y actos emanados de aquellas autoridades, y de custodiar los procesos y todos los documentos y papeles que sean presentados a la Corte o juzgado en que cada uno de ellos debe prestar sus servicios. Además corresponde a los secretarios de los juzgados de letras hacer al juez en la relación de los incidentes y el despacho diario de mero trámite, el que será revisado y firmado por el juez.

En caso de ausencia del Juez de Letras es subrogado por el Secretarios del respectivo Juzgado. A su vez, según lo dispone el artículo 500 del Código Orgánico de Tribunales, los secretarios pueden ser subrogados por los Oficiales 1° de sus respectivos juzgados.

E. Receptores.

Los receptores son ministros de fe pública encargados de hacer saber a las partes, fuera de las oficinas de los secretarios, los decretos y resoluciones de los Tribunales de Justicia, y de evacuar



todas aquellas diligencias que los mismos tribunales les cometieren. Además, deben recibir las informaciones sumarias de testigos en actos de jurisdicción voluntaria o en juicios civiles y actuar en estos últimos como ministros de fe en la recepción de la prueba testimonial y en la diligencia de absolución de posiciones.

Los receptores ejercen sus funciones en todo el territorio jurisdiccional del respectivo tribunal. Sin embargo, también podrán practicar las actuaciones ordenadas por éste, en otra comuna comprendida dentro del territorio jurisdiccional de la misma Corte de Apelaciones.

F. Procuradores del Número.

Los procuradores del número, son oficiales de la administración de justicia encargados de representar en juicio a las partes. Dentro de sus funciones específicas destacan: dar los avisos convenientes sobre el estado de los asuntos que tuvieren a su cargo, o sobre las providencias y resoluciones que en ellos se libraren, a los abogados a quienes estuviere encomendada la defensa de los mismos asuntos, y servir gratuitamente a los pobres con arreglo a lo dispuesto por el artículo 595.

G. Notarios.

Los notarios son ministros de fe pública encargados de autorizar y guardar en su archivo los instrumentos que ante ellos se otorgaren, de dar a las partes interesadas los testimonios que pidieren, y de practicar las demás diligencias que la ley les encomiende. En cada comuna o agrupación de comunas que constituya territorio jurisdiccional de jueces de letras, puede existir a lo menos un notario.

H. Conservadores.

Los conservadores son ministros de fe encargados de los registros conservatorios de bienes raíces, de comercio, de minas, de accionistas de sociedades propiamente mineras, de asociaciones de canalistas, de prenda agraria, de prenda industrial, de especial de prenda y demás que les encomienden las leyes. Puede existir un conservador en cada comuna o agrupación de comunas que constituya el territorio jurisdiccional de juzgado de letras.

I. Archiveros.

Los archiveros son ministros de fe pública encargados de la custodia de los documentos expresados en el artículo 455 del Código Orgánico de Tribunales y de dar a las partes interesadas los testimonios que de ellos pidieren.

7. PERSONAL PODER JUDICIAL

Los cargos en el Poder Judicial se clasifican en tres Escalafones: Primario, Secundario y Empleados. En el escalafón primario, se agrupan cargos como Ministro, Juez y Secretario y se distribuyen en categorías: los ministros y el fiscal judicial de la Corte Suprema (primera categoría); los ministros y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones y los relatores y secretario de la Corte Suprema (segunda categoría); los jueces de juzgado o tribunal de ciudad asiento de Cortes de Apelaciones y los relatores y secretario de Cortes de Apelaciones (tercera categoría); los jueces de juzgado o tribunal de ciudad capital de provincia (cuarta categoría); los jueces de juzgado o tribunal de comuna o agrupación de comunas y los secretarios de juzgado de ciudad asiento de Cortes de Apelaciones (quinta categoría); los secretarios de juzgado de ciudad capital de provincia, el prosecretario de la Corte Suprema y el secretario abogado del fiscal judicial de esa misma Corte (sexta categoría); y los los secretarios de juzgado de comuna o agrupación de comunas (séptima categoría)

En el escalafón secundario, se agrupan cargos como Defensor Público, Notario, Conservador, Archivero, Procurador y Receptor, por una parte, y cargos como Administrador de Tribunal, Jefe de



Unidad y Consejero Técnico. En el primero de los casos, sus cargos son proveídos por la Corte de Apelaciones respectiva, y en el segundo, por la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

En tanto, en el escalafón de empleados, se agrupan cargos como Administrativo Jefe, Administrativo 1° a 3°, Ayudante de Audiencia, Secretaria Ejecutiva, Auxiliar, Oficial de Sala, entre otros.

El personal del Poder Judicial corresponde a todas aquellas personas que, mediante resolución, han sido nombradas para asumir un cargo dentro del Poder Judicial, sea en calidad de Planta, Contrata, Suplente, Interino o en Práctica, de forma indefinida o transitoria, según la condición del nombramiento.

Tiene el cargo la calidad de “planta” cuando corresponde al conjunto de cargos permanentes asignados por la ley a ese tribunal. Un cargo de planta puede servirse como titular, suplente o interino. Son titulares, aquellos funcionarios que se nombran para desempeñar en propiedad un cargo vacante. Son interinos aquellos empleados que se nombran para ocupar una plaza vacante, mientras ésta se provee con un titular. Son suplentes aquellos empleados que se nombran para ocupar el empleo de un titular o interino, mientras éste se encuentre impedido por cualquier causa para desempeñarlo.

En cambio se trata de un cargo “a contrata” cuando se presta servicios en determinadas materias, cuando deban realizarse funciones propias del respectivo tribunal con una duración determinada, generalmente de un año. Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de Diciembre de cada año y los empleados que los sirven expirarán automáticamente en sus funciones en esa fecha, a menos que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación

CAPÍTULO III: PROCEDIMIENTOS PARA LOS TRIBUNALES QUE TRAMITAN CON CARPETA ELECTRÓNICA



Para la tramitación de las causas se utiliza en forma exclusiva el sistema informático, prohibiéndose, en consecuencia, la existencia de registros paralelos, ni se formará carpetas o expedientes físicos para tal efecto. Este sistema de tramitación creado por la Ley N° 20.886 se aplica a todos los tribunales del Poder Judicial: la Corte Suprema, Cores de Apelaciones, y a todos los tipos de causas que ven los tribunales de primera instancia (Civiles, Penales, Familia, Laboral, Cobranza Laboral y Previsional).

En virtud de lo anterior, los jueces y funcionarios están obligados al uso de los dispositivos técnicos disponibles en el sistema informático, para la correcta individualización y suscripción de documentos asignados para su desempeño.

Para las comunicaciones se utilizan los medios electrónicos, sea correo electrónico, vía sistema informático –aplicable para comunicaciones entre tribunales-, interconexión -respecto de aquellas instituciones con las cuales se cuente con este mecanismo-, o cualquier otro medio electrónico idóneo.

Es fundamental promover que todo litigante, desde su primera solicitud o comparecencia ante el Tribunal, individualice un medio electrónico único de notificación con el fin de facilitar la comunicación expedita de la información de que se trate.

Los registros administrativos deben efectuarse y almacenarse por medios electrónicos, quedando reservado para casos muy excepcionales el uso de libros o archivadores en formato análogo o de papel.

En el caso de las sentencias, se debe llevar un registro en soporte escrito de papel, firmado y autorizado.



Cabe hacer expresa mención que, en la medida que todos los funcionarios utilicen en forma adecuada el sistema informático, registrando toda la información relativa a la tramitación de cada causa, se podrá contar con información en mayor cantidad y calidad, lo cual se traducirá en mecanismos y antecedentes de seguimiento y evaluación más certeros y pertinentes.

1. TRAMITACIÓN

1.1. Ingreso de Causas

Las presentaciones deben ser ingresadas directamente al sistema informático.

Por otra parte, el patrocinio para un abogado puede ser constituido de dos formas: la primera, ante el ministro de fe del Tribunal y, la segunda, en audiencia, ante el juez que la dirija.

Conforme el Acta 37-2016, “en caso que la parte o interviniente no suscriba la primera presentación al tribunal con firma electrónica, simple o avanzada, bastará la firma electrónica del abogado patrocinante para ser incorporada en la Oficina Judicial Virtual, debiendo regularizarse la situación en los plazos establecidos por la ley o en la primera audiencia fijada por el tribunal. Tratándose de la demanda, el no cumplimiento de lo anterior facultará al tribunal para proceder a su archivo”.

1.2. Distribución de Causas

Una vez ingresada la causa al sistema informático, se le asigna en forma automática un RIT (Rol de Ingreso Tribunal).

La distribución de causas entre los jueces que integren el tribunal, se regirá conforme al procedimiento objetivo y general propuesto por el Administrador y Juez Presidente, y aprobado por el Comité de Jueces.

1.3. Solicitudes y presentaciones

Las solicitudes y presentaciones pueden ser realizadas bajo tres modalidades:

- a) Aquellas recibidas por medios electrónicos: se deben tramitar directamente en el sistema informático. Para facilitar la utilización de este medio, se deberá mantener publicado en la Página Web, el correo electrónico actualizado del Tribunal
- b) Aquellas recibidas por medios físicos: antes de ser ingresadas al sistema informático, debe verificarse que contengan la información básica requerida para poder ser incorporadas a la causa. A continuación serán digitalizadas e ingresadas al sistema informático.
- c) Aquellas realizadas en forma previa (mismo día) a una audiencia fijada: deben ser resueltos e ingresados en la audiencia.

1.4. Cumplimiento de Sentencias

Ejecutoriada una resolución que pone término definitivo al proceso, se deberá llevar a cabo el procedimiento establecido en la ley.

En caso que se impongan multas, el administrador deberá disponer de un procedimiento a fin de garantizar el oportuno cobro y pago de las multas que se dispongan por resolución ejecutoriada, empleando para tal fin el módulo computacional disponible para ello.



2. AUDIENCIAS

En los juzgados de primera instancia prima la oralidad e inmediación, salvo en el jurisdicción civil, que es la única que no ha sido reformada, en que rige el principio de escrituración.

3. NOTIFICACIONES

Las notificaciones son aquellas actuaciones que tienen por objeto poner en conocimiento de las partes o de terceros una resolución judicial.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 68 del Acta N°71-2016: “Todo litigante será llamado, desde su primera solicitud o comparecencia ante el tribunal, a individualizar un medio electrónico único de notificación con el fin de facilitar la comunicación expedita de la información de que se trate, el que será registrado en el sistema informático.”

CAPÍTULO IV: NORMAS COMUNES A TODO PROCEDIMIENTO

1. EL PROCESO

Es la secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente con el objeto de resolver, mediante un juicio de autoridad, el conflicto sometido a la decisión.

2. ELEMENTOS DEL PROCESO

3.1. Elementos subjetivos

Las partes y el juez, sin perjuicio de existir otros intervinientes que pueden participar en el.

3.2. Elemento objetivo

El conflicto sometido a decisión del tribunal. Se integra por dos instituciones procesales trascendentes: la pretensión del demandante, y las excepciones que haga valer el demandado.

3.3. La capacidad procesal

La capacidad procesal es la facultad para comparecer en juicio, para realizar actos procesales con efectos jurídicos en nombre propio o por cuenta de otros.

3.3.1. Elementos de la capacidad

- a. Capacidad para ser parte (de goce): Se refiere a la capacidad para ser sujeto en el proceso, y es inherente a toda persona, basta ser sujeto físico y vivo (o una sucesión), incluyéndose las personas jurídicas.
- b. Capacidad procesal (de ejercicio): Facultad para comparecer en juicio, para realizar actos procesales con efectos jurídicos en nombre propio o ajeno. Los incapaces intervienen a través de sus representantes legales, cumpliéndose los requisitos legales.
- c. Ius postulandi: Es la capacidad o el conjunto de requisitos que permiten a una persona poder formular peticiones frente a un tribunal.

3.3.2. Comparecencia en juicio



En este aspecto se debe distinguir el patrocinio, que es en sentido general y el mandato o representación judicial propiamente tal.

- a. **Patrocinio.** Es un contrato por el cual las partes o interesados en un asunto judicial, encomiendan a un abogado la defensa de sus pretensiones ante los tribunales de justicia.

Para ser abogado patrocinante se requiere ser abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, que se acredita por cualquier medio idóneo. Uno de ellos, es a través del certificado de título que emite la Excm. Corte Suprema.

- b. **Mandato Judicial.** Es un contrato por el cual una persona otorga a otra facultades suficientes para que la represente ante los tribunales de justicia

Pueden ser mandatarios judiciales, las siguientes personas:

- a) Abogado habilitado para el ejercicio de la profesión
- b) Procurador del Número
- c) Egresados de la carrera de derecho que se encuentren realizando su práctica profesional
- d) Estudiantes actualmente inscritos en 3°, 4° o 5° año de las Escuelas de Derecho
- e) Egresados de la carrera de derecho, que hubieren cursado 5° año, y hasta tres años después de haber rendido los exámenes correspondientes

Las formas de constituir el mandato judicial son:

- a) Por escritura pública
- b) Acta extendida ante Juez de Letras o Arbitro suscrita por todos los otorgantes
- c) declaración escrita del mandante autorizada por el secretario del tribunal
- d) Por endoso en comisión e cobranza de letra de cambio, pagaré y cheque

El término del mandato se produce por las siguientes causales:

- a) Cumplimiento del encargo
- b) Revocación
- c) Renuncia del mandatario. Para que opere debe ponerse en conocimiento del mandante así como el estado del juicio y debe transcurrir el término de emplazamiento a contar de la renuncia
- d) Muerte del mandatario

4. EL EMPLAZAMIENTO

Es la notificación que se le hace a la parte para que dentro de un determinado plazo haga valer sus derechos. Se encuentra compuesto de dos elementos: notificación y transcurso del plazo para hacer valer los derechos.

4.1. **Notificación válida de la demanda y de la resolución que recaiga en ella**

4.2. **Transcurso del plazo que la ley otorga al demandado para hacer valer sus derechos frente a la demanda deducida en su contra**

5. TRAMITACIÓN DIGITAL DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES



En relación a la tramitación de procedimientos judiciales, cabe tener presente lo dispuesto por la Ley N° 20.886 publicada el 18 de diciembre de 2015, que modifica el Código de Procedimiento Civil, para establecer la tramitación digital de los procedimientos judiciales, actualmente vigente para todas las causas que se tramiten ante los tribunales que ejerzan jurisdicción en los territorios jurisdiccionales de las Cortes de

Apelaciones de Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Rancagua, Talca, Chillán, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Coihaique y Punta Arenas, y a contar del 18 de diciembre de 2016 para las causas que se tramiten ante los tribunales que ejerzan jurisdicción en los territorios jurisdiccionales de Cortes de Apelaciones de Santiago, San Miguel, Valparaíso y Concepción.

Los principales contenidos de la mencionada ley se refieren a los siguientes aspectos:

5.1. **Ámbito de aplicación (artículo 1º)**

La ley se aplicará a todas las causas que conozcan la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, los Presidentes y Ministros de Corte, los tribunales de juicio oral en lo penal, los juzgados de letras, los juzgados de garantía, los juzgados de familia, los Juzgados de Letras del Trabajo y, los Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional.

5.2. **Principios generales (artículo 2º)**

a) *Principio de equivalencia funcional del soporte electrónico.* Los actos jurisdiccionales y demás actos procesales suscritos por medio de firma electrónica serán válidos y producirán los mismos efectos que si se hubieren llevado a cabo en soporte papel.

b) *Principio de fidelidad.* Todas las actuaciones del proceso se registrarán y conservarán íntegramente y en orden sucesivo en la carpeta electrónica, la que garantizará su fidelidad, preservación y la reproducción de su contenido.

c) *Principio de publicidad.* Los actos de los tribunales son públicos y, en consecuencia, los sistemas informáticos que se utilicen para el registro de los procedimientos judiciales deberán garantizar el pleno acceso de todas las personas a la carpeta electrónica en condiciones de igualdad, salvo las excepciones establecidas por la ley.

d) *Principio de buena fe.* Las partes, sus apoderados y todos quienes intervengan en el proceso conforme al sistema informático de tramitación deberán actuar de buena fe.

e) *Principio de actualización de los sistemas informáticos.* Los sistemas informáticos de tramitación del Poder Judicial deberán ser actualizados a través de la Corporación Administrativa del Poder Judicial con el objeto de permitir su correcto funcionamiento y la más fluida y expedita interconexión e interoperabilidad entre sí y con otras instituciones públicas.

f) *Principio de cooperación.* Los auxiliares de la administración de justicia, las instituciones públicas y el Poder Judicial deberán cooperar entre sí en la utilización de medios electrónicos con el objeto de garantizar la interconexión e interoperabilidad de los sistemas informáticos y, en particular, el reconocimiento mutuo de los documentos electrónicos y de los medios de identificación y autenticación respectivos.

En tal sentido en su artículo 10 se indica que los oficios y comunicaciones judiciales que se verifiquen desde o hacia instituciones públicas nacionales que cuenten con los recursos técnicos necesarios se diligenciarán a través de medios electrónicos.

7.3. **Normas generales**

a. *Uso obligatorio del sistema informático, respaldo y conservación (artículo 3º).* Los jueces, auxiliares de la administración de justicia y funcionarios de cada tribunal estarán obligados a utilizar y a registrar en el sistema informático todas las resoluciones y actuaciones procesales que se verifiquen en el juicio y para ello la carpeta electrónica y sus registros deberán ser respaldados informáticamente en forma periódica.

b. *Firma electrónica de resoluciones y actuaciones del tribunal y copias autorizadas (artículo 4º).* Las resoluciones y actuaciones del juez, del secretario, del administrador

del tribunal y de los auxiliares de la administración de justicia serán suscritas mediante firma electrónica avanzada. De la misma forma, las copias autorizadas de las resoluciones y actuaciones deberán ser obtenidas directamente del sistema informático de tramitación con la firma electrónica.

- c. *Presentación de demandas, de escritos y documentos* (artículos 5° y 6°). El ingreso de las demandas y de todos los escritos se hará por vía electrónica a través del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial, para cuyos efectos los abogados o habilitados en derecho se registrarán en los términos que se regulen en el auto acordado que la Corte Suprema dictará al efecto. En el caso de los documentos, en caso de requerirlo así las circunstancias, se acompañarán en el tribunal a través de la entrega de algún dispositivo de almacenamiento de datos electrónicos.

Los exhortos que se dirijan entre tribunales nacionales deberán ser remitidos, diligenciados y devueltos mediante la utilización del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial (artículo 10)

Sólo aquellos documentos cuyo formato original no sea electrónico podrán presentarse materialmente en el tribunal y quedarán bajo la custodia del funcionario o ministro de fe correspondiente.

Cualquiera de las partes o intervinientes podrá proponer para sí una forma de notificación electrónica, aun cuando la ley disponga que la notificación deba realizarse por cédula si el tribunal estima que resulta suficientemente eficaz y no causa indefensión (artículo 8)

- d. *Patrocinio y poder electrónico* (artículo 7°). El patrocinio por abogado habilitado para el ejercicio de la profesión podrá constituirse mediante firma electrónica avanzada, de igual forma respecto del mandato judicial. En relación a la constatación de la calidad de abogado habilitado la debe hacer el tribunal a través de sus registros.

- e. Registro de actuaciones de receptores (artículo 9°). La ley establece obligaciones para los receptores judiciales en relación a su registro en el sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial y registros georreferenciados (lugar, fecha y horario) en caso de las notificaciones, requerimientos o embargos. Asimismo establece sanciones en caso de incumplimiento culpable o doloso las que constituirán una falta grave a las funciones y será sancionado por el tribunal, previa audiencia del afectado.

7.4. Autoacordados Corte Suprema

En esta materia es importante tener presente que la Corte Suprema ha dictado dos Autoacordados que se refieren a la tramitación electrónica. El más general es el Acta 71-2016 referido a los tribunales a los tribunales que tramitan electrónicamente, y el Acta 37-2016, que se refiere de forma especial a la aplicación de la ley de tramitación electrónica. Entre sus principales contenidos se encuentran:

- Ingreso de presentaciones electrónicas. Se dispone para este efecto de una Oficina Judicial Virtual, y para hacer uso de sus servicios, entre los que se encuentran la presentación de demandas, escritos y documentos, los usuarios deberán utilizar la Clave Única del Estado, proporcionada y administrada por el Servicio de Registro Civil e Identificación. Las presentaciones efectuadas a través de la Oficina se entenderán suscritas por el usuario que las remite, sin necesidad de contener su firma manuscrita, entendiéndose la Clave Única del Estado como firma electrónica simple.

- Condiciones para realizar presentaciones materiales. Se entenderá entre aquellas circunstancias que habilitan para la entrega presencial de demandas, escritos y documentos en el tribunal, la inaccesibilidad al sistema de tramitación electrónica, bien sea por problemas del servicio o de conectividad.



- Carpeta electrónica. La Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) estará encargada de fijar, con el debido resguardo de la neutralidad tecnológica, las especificaciones técnicas de formato y tamaño de las demandas, escritos y documentos electrónicos que se ingresen a la carpeta electrónica.
- Firma electrónica avanzada de las actuaciones de los jefes de unidad, de las resoluciones y actuaciones judiciales.
- Las copias autorizadas de las resoluciones y actuaciones del proceso deberán ser obtenidas en la Oficina Judicial Virtual.
- Formación electrónica del Estado Diario conforme a especificaciones de CAPJ.

8. PLAZOS



Es el tiempo fijado por la ley, el juez o las partes para el ejercicio de una facultad o la realización de un acto dentro del proceso.

Dos son los principios que se establecen para computar los plazos:

1. Deben ser completos
2. Corren hasta la medianoche del último día del plazo.

9. LAS ACTUACIONES JUDICIALES

Son “*las resoluciones y demás actos de proceso en que interviene el tribunal y para cuya validez se exige la correspondiente autorización del funcionario llamado a dar fe o certificado de su existencia*”. Y también, todo acto jurídico procesal, más o menos solemne, realizado por o a través del tribunal, por las partes, los terceros o auxiliares de la administración de justicia, de los cuales se deja testimonio en el expediente y deben ser autorizados por un m. de fe.

10. LAS NOTIFICACIONES



Es la actuación judicial que tiene por objeto poner en conocimiento de las partes una resolución judicial.

8.1. Notificación personal

Es aquella en que el receptor judicial informa personalmente a la persona a quien se debe notificar la existencia de una presentación y la resolución recaída en ella, entregándole copia íntegra de la actuación judicial.

Debe efectuarse en lugar hábil, por funcionario competente, cumpliendo las demás formalidades previstas por la ley.

La primera notificación al demandado en el proceso es uno de aquellos casos en que debe notificarse personalmente.

8.2. Notificación Personal Subsidiaria

Se aplica cada vez que, intentando el ministro de fe competente practicar la notificación personal, ésta no se verifique por no haberse encontrado a la persona que se trata de notificar en su habitación o en el lugar donde habitualmente ejerce su profesión, industria o empleo, en 2 días distintos. El receptor certificará que ése es el domicilio de la persona y que se encuentra en el lugar del juicio, y previa solicitud de parte, concedida por el tribunal, se entenderá notificada



la persona por el hecho de dejar el receptor las copias íntegras de la actuación en el domicilio de la persona.

10.3. Notificación por Cédula

Consiste en la entrega que hace el ministro de fe en el domicilio del notificado, de copia íntegra de la resolución y de los datos necesarios para su acertada inteligencia. Se aplica por ejemplo cuando se debe notificar la resolución que recibe la causa a prueba en un proceso civil.

10.4. Notificación por el Estado Diario

Es aquella consistente en la inclusión de la noticia de haberse dictado una resolución en un determinado proceso, dentro de un Estado que debe contener las menciones que establece la ley el que debe formarse y fijarse diariamente en la secretaría del tribunal (en la práctica, en el hall del tribunal). Constituye la regla general, salvo en aquellos procesos en que las partes podrán fijar otra forma de notificación como correo electrónico.

10.5. Notificación Por Avisos

Aquella notificación substitutiva de la personal o de la notificación por cédula, que se utiliza cuando se trata de notificar a personas cuya individualidad o residencia sea difícil de determinar o por su número dificulten considerablemente la práctica de la diligencia.

10.6. Notificación Tácita o Presunta

Aquella que suple u opera en el caso de existir notificaciones defectuosas o inclusive en caso de no existir ninguna notificación respecto de una determinada resolución judicial, cuando la persona a quien debiera haberse notificado, efectúa en el proceso cualquier gestión, distinta de alegar la falta o nulidad de la notificación, que supone que ha tomado conocimiento de ella.

10.7. Notificación Ficta o Presunta Legal

Cuando se ha efectuado una notificación nula, y el afectado comparece en el procedimiento a alegar tal nulidad, la ley establece que una vez fallado el incidente y declarada la nulidad, la resolución judicial se entenderá notificada desde que se notifique válidamente la sentencia que declara la nulidad de la notificación.

11. RESOLUCIONES JUDICIALES



La resolución judicial es el acto jurídico procesal que emana de los agentes de la jurisdicción, y mediante el cual dan curso al procedimiento, resuelven los incidentes que se promueven durante el curso de él o deciden la causa o asunto sometido a su conocimiento.

9.1. Requisitos comunes a toda resolución

1. Expresión en letras y números de la fecha en que se expide
2. Llevar al pie la firma del juez o jueces que la dictaron o que intervinieron en el acuerdo.
3. Llevar al pie la firma del Secretario, autorizándolas. Conforme a la ley de tramitación electrónica, este requisito se cumple mediante firma electrónica avanzada.

9.2. Requisito de la primera resolución judicial

Además de los requisitos generales, la primera resolución debe asignar a la causa un número de orden, con el que figurará en el rol del tribunal hasta su terminación.

9.3. Requisitos de las sentencias

Las sentencias definitivas constan de 3 partes:



Parte Expositiva:

- i) Identificación de las partes (nombre, domicilio y profesión u oficio).
- ii) Enumeración breve de todas las acciones y excepciones opuestas.
- iii) Indica si se recibió o no la causa a prueba.
- iv) Indica si se citó o no a oír sentencia.

Parte Considerativa:

- i) Consideraciones de hecho en que se funda el fallo.
- ii) Consideraciones de derecho aplicables al caso.

Parte Resolutiva: Debe contener la decisión del asunto controvertido, pronunciándose sobre todas y cada una de las acciones y excepciones, indicando si se aceptan o rechazan.

No puede extenderse a puntos no sometidos expresamente a la decisión del tribunal, bajo sanción de ser casada por “ultra petita”.

9.4. Estado en que pueden encontrarse las resoluciones judiciales

- a. Firmes o ejecutoriadas: Aquellas que producen plenamente el efecto de cosa juzgada. Para determinar cuándo tiene dicho carácter, se debe distinguir:
 - i. Si no procede recurso alguno, queda firme desde que se notifica a las partes.
 - ii. Si proceden recursos, y se han deducido oportunamente, desde que se notifica el decreto que las manda cumplir (del tribunal de primera instancia). Si no se han deducido, desde que transcurren todos los plazos que la ley concede para su interposición.
- b. Que causan ejecutoria: Son aquellas que pueden cumplirse a pesar de existir recursos pendientes deducidos en su contra.
- c. Sentencia de término: Si bien no cabe en la clasificación, el art. 98 CPC las define expresamente como aquellas que ponen fin a la última instancia del juicio (así será de término, las sentencias definitivas de única instancia y la sentencia definitiva de segunda instancia).

10. EFECTOS DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

Las resoluciones judiciales producen dos importantes efectos:

10.1. El Desasimio del Tribunal

Es el efecto que producen las sentencias definitivas e interlocutorias, en virtud del cual una vez que han sido notificadas a alguna de las partes no pueden ser modificadas o alteradas en manera alguna por el tribunal que las pronunció (art. 152 CPC).

10.2. Efecto de cosa juzgada

Se puede definir como la autoridad y eficacia que produce una sentencia judicial, cuando no existen contra ella medios de impugnación que permitan modificarla.

CAPÍTULO V: DE LOS PROCEDIMIENTOS

1. PROCEDIMIENTO ORDINARIO CIVIL DE MAYOR CUANTÍA

El juicio ordinario civil de mayor cuantía, se encuentra reglamentado en el Libro II del CPC (art. 253 a 433). Es un procedimiento esencialmente escrito, salvo algunas audiencias establecidas en el proceso.

Se aplica a los asuntos contenciosos de cuantía superior a 500 UTM, y a los conflictos respecto de materias que no puedan fijarse en un valor en dinero, siempre que en tales casos la ley no haya establecido un procedimiento especial.

Es un procedimiento supletorio de todos los demás. Dispone el art. 3 del CPC que “se aplicará el procedimiento ordinario en todas las gestiones y actuaciones que no estén sometidos a una regla especial diversa, cualquiera que sea su naturaleza”.



Se desarrolla en una serie de etapas en las cuales se puede distinguir las siguientes:

- 1) Período de discusión, el que está compuesto por los siguientes escritos y actuaciones: demanda, contestación de la demanda, réplica y dúplica
- 2) Período de prueba
- 3) Período de discusión sobre la prueba
- 4) Período de fallo
- 5) Período de ejecución del fallo



1.1. Período de discusión en el juicio ordinario

1.1.1. La demanda

1.1.1.1. Requisitos de la demanda

La demanda debe cumplir con todos los requisitos de los escritos judiciales y además con los requisitos propios de la demanda que son (art. 254 CPC):

- a. La designación del tribunal ante quien se entabla. El requisito se da por cumplido, señalando, mediante abreviaturas, la jerarquía del tribunal (Ej.: S.J.L).
- b. El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandante y de las personas que lo representen, y la naturaleza de la representación.
- c. El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado.
- d. La exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya.



- e. La enunciación precisa y clara consignada en la conclusión de las peticiones que se sometan al fallo del tribunal.

Si la demanda no contiene los 3 primeros requisitos del artículo 254, puede el juez de oficio no dar curso a la demanda, expresando el defecto de que adolece (art. 256 CPC).

1.1.1.2. Documentos acompañados a la demanda

No existe obligación de acompañar los documentos con los que la parte probará sus hechos, pues para ello la oportunidad procesal adecuada es el término probatorio. Sin embargo aquí la demandante está obligada a acompañar los “instrumentos habilitantes”, es decir, los que acreditan la calidad en la que comparece una parte y los que se refieren a la naturaleza de su representación (Ej. el que desempeña un mandato).

1.1.1.3. Modificaciones de la demanda

El actor puede realizar ampliaciones y rectificaciones a la demanda en dos oportunidades:

- a. Presentada la demanda, pero antes de ser notificado el demandado (art. 148 CPC).
- b. Una vez notificada la demanda, pero antes de la contestación (art. 261 CPC).

1.1.2. La contestación de la demanda

1.1.2.1. Requisitos de la contestación

La demanda debe cumplir con todos los requisitos de los escritos judiciales y además con los requisitos propios de la contestación de la demanda que son (art. 309 CPC):

- a. Designación del tribunal ante quien se presente.
- b. El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado. En caso de no hacerlo, todas las resoluciones que deben notificarse por cédula se harán por el estado diario.
- c. Las excepciones que se oponen a la demanda y la exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoyan.
- d. La enunciación precisa y clara, consignada en la conclusión, de las peticiones que se sometan al fallo del tribunal.
- e. Constitución de patrocinio y poder si es su primera presentación.

1.1.2.2. Alegaciones, Defensas y Excepciones

El contenido de la contestación, se refiere a alegaciones o defensas y excepciones.

- a. Excepciones Perentorias. Tienen por objeto destruir el fundamento de la pretensión e importan la introducción al proceso de un hecho de carácter impeditivo, modificativo o extintivo de la pretensión del actor.
- b. Excepciones Anómalas. Perentorias que pueden ser deducidas con posterioridad a la contestación de la demanda, durante todo el juicio, hasta la citación para oír sentencia en primera instancia y hasta la vista de la causa en segunda instancia. Estas son: Prescripción Extintiva, Cosa Juzgada, Transacción y Pago Efectivo de la Deuda, siempre que se funde en un antecedente escrito.



1.1.3. La reconvencción

La reconvencción se tramita y falla conjuntamente con la demanda principal.

1.1.4. La réplica

El demandante tendrá el plazo fatal de 6 días para replicar y hacer observaciones a la reconvencción, si la ha habido.

En el escrito de réplica el actor puede ampliar, adicionar o modificar las acciones que haya formulado en la demanda, pero sin que pueda alterar las que sean objeto principal del pleito.

1.1.5. La dúplica

El demandado tiene el plazo fatal de 6 días para duplicar y para hacer valer observaciones sobre lo alegado por el demandante en su réplica.

El demandado en el escrito de dúplica puede ampliar, adicionar o modificar las excepciones que haya formulado en la contestación, pero sin poder alterar las que sean objeto principal del pleito.

1.2. Período o trámite de llamado obligatorio a conciliación



Es el segundo período o etapa del juicio ordinario y consiste en una audiencia en la cual el juez actúa como amigable componedor entre las partes en la búsqueda de un acuerdo total o parcial respecto de las cuestiones sometidas a juicio.

De la conciliación total o parcial se levantará acta, que consignará sólo las especificaciones del arreglo. La suscribirán el juez, las partes que lo deseen y el secretario, y se estimará como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales.

1.3. Período de prueba

1.3.1. Recepción de la causa a prueba



Terminado el período de discusión, y efectuado el llamado obligatorio a conciliación cuando sea procedente, el tribunal procederá a examinar personalmente el proceso y conforme a ello, puede:

- a. Citar a las partes para oír sentencia cuando el demandado acepta llanamente las peticiones del demandante, o cuando en sus escritos no contradice en manera sustancial y pertinente los hechos sobre los que versa el juicio.
- b. Recibir la causa a prueba si estima que hay o puede haber controversia sobre algún hecho sustancial y pertinente en el juicio, y fijará en la misma resolución los hechos sustanciales controvertidos sobre los cuales deberá recaer.

1.3.2. Notificación de la resolución que recibe la causa a prueba

La resolución que recibe la causa a prueba se notifica por cédula a las partes.

1.4. Término probatorio



Espacio de tiempo que la ley señala a las partes para rendir prueba en el juicio y, particularmente, para rendir la prueba testimonial, como para ofrecer las pruebas si no hubieren sido pedidas con anterioridad a su iniciación.

1.4.1. Características

- a. Plazo legal, por regla general: para rendir prueba dentro del territorio jurisdiccional del tribunal en que se sigue el juicio tendrán las partes el término de 20 días.
- b. Plazo común: Corre para todas las partes a la vez.
- c. Plazo fatal: Lo es para ofrecer y rendir la testimonial y para solicitar la realización de las otras diligencias probatorias.

1.4.2. Clasificación del término probatorio

1.4.2.1. Término probatorio ordinario

Es la regla general, con una duración de 20 días, salvo que las partes de común acuerdo convengan reducirlo.

1.4.2.2. Término probatorio extraordinario

- a. Para rendir prueba dentro del territorio de la República, pero fuera del territorio jurisdiccional del tribunal en que se sigue el juicio.
- b. Para rendir prueba fuera del territorio de la República.

El término probatorio extraordinario corresponde al aumento de la tabla de emplazamiento, y corre inmediatamente luego del término probatorio ordinario. Para el caso que el demandado deba ser notificado en otro territorio jurisdiccional o fuera del territorio de la República, se forma una tabla de días de aumento de plazos que, cada 5 años, la Corte Suprema tomando en consideración las distancias y las facilidades o dificultades que existan para las comunicaciones.

1.4.2.3. Término probatorio especial o término especial de prueba

Hay diversas situaciones en que no es posible rendir la prueba, sin culpa de las partes, contemplándose distintas situaciones en las cuales el tribunal puede dar lugar a términos especiales de prueba:

- a. Entorpecimiento que imposibilita la recepción de la prueba durante el probatorio, sea absoluto o en un lugar determinado. Se debe reclamar del obstáculo en el momento de presentarse o dentro de los 3 días siguientes. El término especial durará el número de días que dure el entorpecimiento.
- b. Término especial para rendir prueba de testigos iniciada oportunamente.
- c. Término especial por inasistencia del juez de la causa.

1.4.3. Los medios de prueba

Son:

- a. Instrumentos;
- b. Testigos;
- c. Confesión de parte;

- d. Inspección personal del tribunal;
- e. Informes de peritos; y
- f. Presunciones.

Cabe señalar que conforme a lo dispuesto en el artículo 428 del CPC, entre dos o más pruebas contradictorias, y a falta de ley que resuelva el conflicto, los tribunales preferirán la que crean conforme con la verdad.



A. Instrumentos

Instrumento es todo aquel documento que da cuenta de un hecho, y pueden ser públicos o privados. Instrumento público es el autorizado con las solemnidades legales por el competente funcionario, y el instrumento privado en cambio, es aquel que no cumple con tales requisitos.

La prueba instrumental puede ser producida por las partes o el tribunal, en este último caso, sólo como medida para mejor resolver.

Los instrumentos podrán presentarse en cualquier estado del juicio hasta el vencimiento del término probatorio en primera instancia, y hasta la vista de la causa en segunda instancia.

1. *Instrumentos Públicos.* Se acompañan “con citación”. Para este efecto y como dispone el artículo 342 del CPC, son considerados como instrumentos públicos en juicio, siempre que en su otorgamiento se hayan cumplido las disposiciones legales que dan este carácter:

- a) Los documentos originales;
- b) Las copias dadas con los requisitos que las leyes prescriban para que hagan fe respecto de toda persona, o, a lo menos, respecto de aquella contra quien se hacen valer;
- c) Las copias que, obtenidas sin estos requisitos, no sean objetadas como inexactas por la parte contraria dentro de los tres días siguientes a aquel en que se le dio conocimiento de ellas;
- d) Las copias que, objetadas en el caso del número anterior, sean cotejadas y halladas conforme con sus originales o con otras copias que hagan fe respecto de la parte contraria;
- e) Los testimonios que el tribunal mande agregar durante el juicio, autorizados por su secretario u otro funcionario competente y sacados de los originales o de copias que reúnan las condiciones indicadas en el número anterior; y
- f) Los documentos electrónicos suscritos mediante firma electrónica avanzada.

El instrumento público hace plena fe entre las partes del hecho de haberse otorgado, y no sólo de ello, sino que al hecho de haberse otorgado realmente por las personas y de la manera que en el instrumento se expresa. Además hace plena prueba entre las partes sobre su fecha. Respecto de terceros tiene pleno valor probatorio en cuanto al hecho de haberse otorgado y en cuanto a su fecha, a igual que entre las partes. En cuanto a su contenido hace plena fe, tanto entre las partes como frente a terceros.

2. *Instrumentos Privados.* Para estos efectos se debe distinguir si emana de un tercero o de las partes. Si es de un tercero, se le debe citar como testigo para que declare sobre él. Si es de las partes, para que se tenga por reconocido debe encontrarse en una de las situaciones escritas por el artículo 346 del CPC:

- a) Cuando así lo ha declarado en el juicio la persona a cuyo nombre aparece otorgado el instrumento o la parte contra quien se hace valer;
- b) Cuando igual declaración se ha hecho en un instrumento público o en otro juicio diverso;
- c) Cuando, puestos en conocimiento de la parte contraria, no se alega su falsedad o falta de integridad dentro de los seis días siguientes a su presentación, debiendo el tribunal, para este efecto, apercibir a aquella parte con el reconocimiento tácito del instrumento si nada expone dentro de dicho plazo; y
- d) Cuando se declare la autenticidad del instrumento por resolución judicial.

En virtud de lo anterior, si el instrumento se tiene por reconocido tiene respecto de los que lo otorgan o de los que reputan haberlo otorgado y de los sucesores el mismo valor probatorio del instrumento público.

B. Testigos



Es aquella prueba que se refiere a la declaración que hacen personas ajenas en el pleito, las cuales reúnen las condiciones exigidas por la ley y que deponen en la forma que ellas establece, acerca de los hechos substanciales, pertinentes y controvertidos en el juicio.

Los testigos deben ser capaces. La ley lo establece claramente al señalar que es hábil para declarar en juicio toda persona a quien la ley no declare inhábil. Esta inhabilidad puede ser absoluta o relativa. Será absoluta cuando afecta a toda persona que se encuentre en determinadas circunstancias, y están descritas en el artículos 357 del CPC, sea por falta de capacidad (N°1 a 5) o falta de probidad (N°6 al 9).

En cambio las inhabilidades relativas, afectan a ciertas personas en casos determinados, como lo es la falta de imparcialidad para apreciar los hechos sobre los cuales declara (artículo 358 CPC).

Las inhabilidades relativas mencionadas no podrán hacerse valer cuando la parte a cuyo favor se hallan establecidas presente como testigos a las mismas personas a quienes podrán aplicarse dichas tachas. Las *tachas* son el medio que la ley concede a las partes, para hacer efectivas las inhabilidades que puedan afectar a un testigo, las cuales deben ser opuestas antes de que los testigos presten su declaración, y si el tribunal lo estima necesario para resolver el juicio, recibirá las tachas a prueba.

I. Admisibilidad de la prueba de testigos. No se admitirá prueba de testigos respecto de una obligación que haya debido consignarse por escrito.

II. Obligaciones de los testigos. Concurrir a la audiencia que el tribunal fije para recibir la prueba testimonial, declarar en la misma audiencia en la forma establecida por la ley y decir verdad acerca de lo que se le pregunte.

III. Forma de rendir la prueba. Dentro de los 5 días siguientes a la última notificación de la resolución que recibe la causa a prueba, la parte que desee rendir prueba testimonial, deberá presentar una minuta de puntos de prueba y una nómina de los testigos de que piensa valerse.

Todo testigo debe prestar juramento de decir verdad de aquello que se le preguntare y declare, se principia por los testigos del demandante. Y cada pregunta se le preguntará al tenor de los puntos de prueba, pudiendo la contraparte formularle contrainterrogaciones.

C. Confesión de parte

Todo litigante está obligado a declarar bajo juramento, contestada que sea la demanda, sobre hechos pertenecientes al mismo juicio, cuando lo exija el contendor o lo decrete el tribunal como medida para mejor resolver.

Esta diligencia se podrá solicitar en cualquier estado del juicio y sin suspender por ella el procedimiento, hasta el vencimiento del término probatorio en primera instancia, y hasta antes de la vista de la causa en segunda. Este derecho sólo lo podrán ejercer las partes hasta por dos veces en primera instancia y una vez en segunda; pero, si se alegan hechos nuevos durante el juicio, podrá exigirse una vez más.

Esta prueba se realiza al tenor de un "*pliego de posiciones*" (lista de preguntas) que presenta la parte que solicita la declaración. El litigante está obligado comparecer, para lo cual se le cita una primera vez, si el litigante no comparece al segundo llamado (citación), o si, compareciendo, se niega a declarar o da respuestas evasivas, se le dará por confeso, a petición

de parte, en todos aquellos hechos que estén categóricamente afirmados en el escrito en que se pidió la declaración bajo el apercibimiento correspondiente.

En relación con el valor probatorio, la confesión sobre hechos personales –sea provocada, espontánea o tácita-, produce plena prueba en contra del que confiesa. Si los hechos confesados no son personales del confesante o de la persona a quien representa, producirá también prueba la confesión, pero podría destruirse con otro medio probatorio.

D. Inspección personal del tribunal

Es el acto por el cual el juez se traslada al lugar donde se refiere la controversia o se encuentra la cosa que la motiva, para obtener mediante el examen personal, elementos de convicción para su fallo.

La inspección personal constituye prueba plena en cuanto a las circunstancias o hechos materiales que el tribunal establezca en el acta como resultado de su propia observación.

E. Informes de peritos.

Los peritos son técnicos o profesionales que tienen conocimientos especializados en alguna materia y que entregan su opinión fundada sobre algún punto de interés dentro del litigio.

Se oirá informe de peritos en todos aquellos casos en que la ley así lo disponga, ya sea que se valga de estas expresiones o de otras que indiquen la necesidad de consultar opiniones periciales.

Para proceder al nombramiento de peritos, el tribunal citará a las partes a una audiencia, que tendrá lugar con sólo las que asistan y en la cual se fijará primeramente por acuerdo de las partes, o en su defecto por el tribunal, el número de peritos que deban nombrarse, la calidad, aptitudes o títulos que deban tener y el punto o puntos materia del informe. Si las partes no se ponen de acuerdo sobre la designación de las personas, hará el nombramiento el tribunal, no pudiendo recaer en tal caso en ninguna de las dos primeras personas que hayan sido propuestas por cada parte.

Los tribunales apreciarán la fuerza probatoria del dictamen de peritos en conformidad a las reglas de la sana crítica.

F. Presunciones.

Las presunciones son legales o judiciales. Las legales se reglan por lo establecido en el Código Civil (artículo 47). Las que deduce el juez deberán ser graves, precisas y concordantes.

Una sola presunción puede constituir plena prueba cuando, a juicio del tribunal, tenga caracteres de gravedad y precisión suficientes para formar su convencimiento.

Sin perjuicio de las demás circunstancias que, en concepto del tribunal o por disposición de la ley, deban estimarse como base de una presunción, se reputarán verdaderos los hechos certificados en el proceso por un ministro de fe, a virtud de orden de tribunal competente, salvo prueba en contrario. Igual presunción existirá a favor de los hechos declarados verdaderos en otro juicio entre las mismas partes.

1.5. Período de procedimientos posteriores a la prueba

1.5.1. Escritos de observaciones a la prueba



Vencido el término de prueba, y dentro de los 10 días siguientes, las partes podrán hacer por escrito las observaciones que el examen de la prueba les sugiera.

1.5.2. La citación para oír sentencia



Con la resolución que cita para oír sentencia queda cerrado el debate y la causa queda en estado de fallo. Después de ella, por regla general, no se admiten escritos ni pruebas de ninguna especie.

La sentencia definitiva deberá pronunciarse dentro de 60 días desde que la causa ha quedado en estado de sentencia.

Excepcionalmente el inciso 2º del art. 433 CPC permite que, ya citadas las partes para oír sentencia, se admitan las siguientes peticiones:

- a. Incidentes sobre nulidad de lo obrado.
- b. Decretar una o más medidas para mejor resolver del art. 159 CPC.
- c. Solicitud de medidas precautorias.

1.6. Las medidas para mejor resolver



Son las diligencias probatorias establecidas en la ley y que puede decretar de oficio el tribunal, luego de dictada la resolución citación para oír sentencia, con el fin de acreditar o esclarecer alguno de los hechos que configuran el conflicto, para la adecuada decisión de éste.

1.6.1. Oportunidad

Sólo dentro del plazo para dictar sentencia, es decir, dentro de los 60 días siguientes a la citación para oír sentencia. Es una excepción a que los plazos concedidos para que el tribunal realice actuaciones no tengan carácter fatal. Si no se realizan dentro de este plazo, se tendrán por no decretadas.

1.6.2. Medidas para mejor resolver

- 1.6.2.1. Agregación de cualquier documento que se estime necesario para esclarecer el derecho de los litigantes**
- 1.6.2.2. Confesión Judicial de cualquiera de las Partes**
- 1.6.2.3. La Inspección Personal del objeto de la cuestión**
- 1.6.2.4. Informe de Peritos**
- 1.6.2.5. La comparecencia de testigos que hayan declarado en el juicio**
- 1.6.2.6. La presentación de cualesquiera otros autos que tengan relación con el pleito**

1.6.3. Plazo para su cumplimiento

Deben cumplirse dentro del plazo de 20 días desde la notificación de la resolución que las decreta. Si no se cumple dentro de ella, se tienen por no decretadas y el tribunal deberá dictar sentencia sin más trámite.

1.7. Término del juicio ordinario en primera instancia



El modo normal de terminar el juicio ordinario en primera instancia es la sentencia definitiva. Se entiende que una sentencia resuelve un asunto cuando ella se



pronuncia sobre todas las acciones y excepciones interpuestas por las partes en tiempo y forma. Sin embargo, existen otros medios anormales de ponerle fin:

- a. Conciliación
- b. Avenimiento
- c. Desistimiento
- d. Abandono del procedimiento
- e. Transacción
- f. Compromiso

1.7.1. La Sentencia Definitiva



A contar de la notificación de la resolución que cita a las partes a oír sentencia, o desde que se cumple una medida para mejor resolver, el juez tiene un plazo de 60 días para dictar sentencia definitiva (Art. 162 inc. 3º CPC). Si el juez no dicta la sentencia dentro de este plazo incurre en responsabilidad funcionaria.

La sentencia definitiva de primera instancia se notifica por cédula (art. 48 inc. 1º CPC), sin perjuicio de su anotación en el estado diario, lo cual no implica notificación (Art. 162 inc. final CPC).

Notificada la sentencia las partes pueden deducir los recursos procesales que correspondan. Si no los deducen, una vez transcurridos los plazos para ello, la sentencia queda firme o ejecutoriada, debiendo el secretario certificar este hecho a continuación del fallo (art. 174 CPC). Si se deducen recursos, se entiende que la sentencia queda firme o ejecutoriada, cuando se notifique el decreto que la manda cumplir una vez terminados los recursos deducidos.

1.8. Recursos procesales

Son los medios que la ley confiere las partes para obtener que se modifique, enmiende o invalide una resolución judicial.

1.8.2. Recurso de Apelación

Es un recurso ordinario que tiene por objeto obtener del Tribunal Superior respectivo que enmiende, con arreglo a Derecho, la resolución del inferior.

Para que sea procedente, la sentencia apelada debe causar agravio a la parte que recurre, el cual tiene lugar cuando existe una diferencia entre lo pedido por una parte al juez y lo que éste concede al peticionario, perjudicando a éste la diferencia entre lo pedido y concedido.

El plazo, por regla general son 5 días hábiles desde la notificación de la resolución; si es sentencia definitiva el plazo es de 10 días hábiles.

1.8.3. Recurso de Hecho

Regulado en los artículos 196, 203 al 206 CPC. Existen dos tipos de recurso de hecho:

- a. Verdadero recurso de hecho. Aquel que se interpone ante el tribunal superior jerárquico en contra de la resolución del tribunal de primera instancia que deniega una apelación procedente, en el plazo establecido en el art. 200 CPC, desde notificada la inadmisibilidad (por el estado diario).
- b. Falso recurso de hecho. Aquel que se interpone ante el tribunal superior jerárquico en contra de la resolución del tribunal de primera instancia que concede un recurso de



apelación improcedente o en un efecto contrario al debido, en el plazo establecido en el art. 200 CPC, contado desde su ingreso a la Secretaría.

Ambos se interponen por escrito ante el tribunal de alzada.

1.8.4. Recurso de Reposición

Se interpone en contra del mismo tribunal que dicta la resolución y es él quien la resuelve. Procede en contra de autos y decretos y excepcionalmente en contra de sentencias interlocutorias como la que recibe la causa a prueba, aquella que cita a las partes a oír sentencia luego de vencido el plazo para formular observaciones a la prueba y, la que declara inadmisibles las casaciones, entre otras.

En cuanto al plazo, si se deduce en contra de autos y decretos: 5 días hábiles. En contra de alguna de las sentencias interlocutorias indicadas precedentemente: 3 días hábiles.

1.8.5. Recurso de Casación

Regulado en los artículos 764 al 890 del CPC. Existen dos tipos de recurso de casación:

- a. Recurso de Casación en la Forma. Aquel destinado a obtener del tribunal superior jerárquico la invalidación de una sentencia, por haber sido pronunciada por el tribunal inferior con prescindencia de los requisitos legales o emanando de un procedimiento viciado al haberse omitido las formalidades esenciales que la ley establece.

Procede en contra de sentencias definitivas e interlocutorias cuando ponen término al juicio o hacen imposible su continuación y, excepcionalmente, contra sentencias interlocutorias que no pongan término al juicio o hagan imposible su continuación, siempre que: (i) se hubieren dictado en segunda instancia y, (ii) se hubieren dictado sin previo emplazamiento de la parte agraviada o sin señalar día para la vista de la causa. También procede en contra de sentencias que se dicten en los juicios o reclamaciones regidos por leyes especiales, con excepción de aquellos que se refieran a la constitución de las juntas electorales y a las reclamaciones de los avalúos de la Ley sobre impuesto territorial y de las demás que prescriban las leyes.

Sólo procede por alguna de las causales señaladas en el art. 768 CPC y debe interponerse en el mismo plazo que para el recurso de apelación, tratándose de resoluciones de primera instancia; y en el plazo de 15 hábiles días desde la notificación de la resolución, en el caso de resoluciones de única o segunda instancia.

Cabe tener presente que este recurso debe ser “preparado”, lo que significa que la parte que lo entabla, debe haber reclamado el vicio que invoca al interponerlo, ejerciendo oportunamente y en todos sus grados los recursos establecidos en la ley.

En caso de que se interponga recurso de apelación o casación en el fondo, deben interponerse conjuntamente, y en el mismo escrito, con la casación en la forma.

- b. Recurso de Casación en el Fondo. Aquel que tiene por objeto obtener de la Corte Suprema que invalide una resolución judicial por haberse pronunciado con infracción de ley que ha influido substancialmente en lo dispositivo del fallo, para que la reemplace por otra resolución en que la ley se aplique correctamente.

Procede en contra de sentencias definitivas o interlocutorias que pongan término al juicio o que hagan imposible su continuación. Estas sentencias deben tener el carácter de inapelables.

El plazo para su interposición es de 15 días hábiles contados desde la fecha de notificación de la sentencia contra la que se recurre.

Ambos se interponen ante el tribunal que dictó la resolución impugnada.



2. PROCEDIMIENTO EJECUTIVO

Es un procedimiento contencioso, por el cual se persigue el cumplimiento forzado de una obligación que consta de un título fehaciente e indubitado.



Este juicio mantiene dos procedimientos paralelos y simultáneos: uno el ejecutivo mismo, donde se discuten las excepciones al cumplimiento de la obligación; y el otro el llamado de apremio, donde se tramita el embargo y de la realización de los bienes del deudor.

Hay 3 clases de Juicio Ejecutivo:

- a. Juicio Ejecutivo de Obligación de Dar: Título I Libro III CPC (artículos 434 al 529).
- b. Juicio Ejecutivo de Obligación de Hacer: Título II Libro III CPC (artículos 530 al 544).
- c. Juicio Ejecutivo de Obligación de No Hacer: Título II Libro III CPC (artículos 530 al 544).

2.1. Presupuestos de la ejecución forzada



Para obtener el cumplimiento forzado de la obligación en juicio ejecutivo, es menester que se cumplan los siguientes requisitos:

- a. Que la Obligación cuyo cumplimiento se busca, conste en un **título** al que la ley le atribuya el carácter o **mérito ejecutivo** (Art. 434, 530 y 544 CPC).
- b. Que la Obligación sea **actualmente exigible** (Art. 437, 53 y 544 CPC).
- c. Que la Obligación sea **Líquida**, tratándose de obligaciones de dar, **Determinada**, en el caso de obligaciones de hacer, y susceptible de **convertirse** en una obligación de destruir la obra hecha en el caso de las obligaciones de no hacer (Art. 438, 530 y 544 CPC).
- d. Que la acción ejecutiva **no** se encuentre **prescrita** (Art. 442, 531 y 544 CPC).

2.1.1. Título Ejecutivo



Un título ejecutivo es un documento al cual la ley le atribuye la suficiencia necesaria para exigir el cumplimiento forzado de una obligación que consta en él. Sólo la ley puede crear títulos ejecutivos y éstos están taxativamente enumerados en el art. 434 del CPC y en leyes especiales.

De esta manera, establece el art. 434 del CPC que son títulos ejecutivos los siguientes:

Nº 1. Sentencia firme, bien sea definitiva o interlocutoria

Para que la sentencia tenga mérito ejecutivo, es necesario que esté firme, y se entiende que se encuentra en este estado cuando no procede recurso alguno en contra de ella, o procediendo éstos se han resuelto, o no se han hecho valer dentro del plazo legal. Es necesario que esta sentencia contenga una obligación de dar, hacer o no hacer.

Nº 2. Copia autorizada de escritura pública.

Son aquellas copias autorizadas por un Notario Público o un Archivero Judicial.



Nº 3. Acta de avenimiento pasada ante el tribunal competente y autorizada por un ministro de fe o por dos testigos de actuación.

Nº 4. Instrumento privado reconocido judicialmente o mandado tener por reconocido.

El instrumento privado adquiere mérito ejecutivo cuando ha sido reconocido judicialmente o cuando ha sido mandado tener por reconocido. Sin embargo la letra de cambio, el pagaré o el cheque cuya firma aparezca autorizada por un Notario o por el Oficial del Registro Civil -en las comunas donde no tenga su asiento un Notario- tendrá mérito ejecutivo sin necesidad de reconocimiento previo.

El reconocimiento se consigue a través de gestiones previas que se denominan "diligencias preparatorias de la vía ejecutiva".

Nº 5: Confesión judicial.

Nº 6: Cualesquiera títulos al portador o nominativos, legítimamente emitidos, que representen obligaciones vencidas, y los cupones también vencidos de dichos títulos, siempre que los cupones confronten con los títulos, y estos, en todo caso, con los libros talonarios.

Nº 7: Cualquiera otro título a que las leyes den fuerza ejecutiva.

Por ejemplo, la cuarta copia de la factura, los acuerdos de la junta ordinaria de comuneros de una comunidad de aguas sobre gastos y fijación de cuotas, el certificado de deuda de gastos comunes autorizada por el administrador, etc.

2.1.2. Obligación Actualmente Exigible

Es decir, la obligación cuyo cobro se pretende, no debe hallarse sujeta a ninguna modalidad (condición, plazo o modo) y de estarlo, deberá acreditarse fehacientemente que la modalidad se ha cumplido a favor del acreedor.

2.1.3. Obligación Líquida, Determinada o Convertible

2.1.3.1. Si la obligación es de dar, la deuda debe ser líquida.

2.1.3.2. Si la obligación es de hacer, la deuda debe ser determinada, es decir, se debe poder conocer exactamente en qué consiste la prestación del deudor, sin margen a segundas interpretaciones.

2.1.3.3. Si la obligación es de no hacer, debe poder convertirse en la destrucción de la obra hecha, con lo cual la obligación se transforma en una de hacer (544 CPC y 1555 Código Civil).

2.1.4. Acción Ejecutiva No Prescrita



La regla general es que el título ejecutivo prescribe en 3 años contados desde que la obligación contenida en él se hizo exigible (art. 2514 y 2515 Código Civil).

Sin embargo, otra particularidad es que la acción ejecutiva prescrita subsiste por otros 2 años más como ordinaria. En efecto, si ya ha transcurrido el plazo de 3 años para deducir la acción ejecutiva, de igual manera puede perseguirse el cumplimiento de la obligación por los dos años que restan para completar los 5 años de la acción ordinaria de prescripción.

Ahora bien, hay obligaciones cuya acción ejecutiva tiene plazos de prescripción especiales:

- a. Cuando el título es un cheque protestado: La acción ejecutiva prescribe dentro de 1 año contado desde la fecha del protesto (artículo 34 Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y de Cheques).
- b. Letra de cambio y pagaré: El plazo de prescripción es también de 1 año contado desde que la obligación se hizo exigible (artículo 98 Ley N° 18.092).
- c. La cuarta copia de la factura también prescribe en un año contado desde el vencimiento (art. 10 Ley N° 19.983).

2.2. Gestión preparatoria de la vía ejecutiva



Si el acreedor tiene un documento que da cuenta de una obligación líquida, determinada o determinable, actualmente exigible y no prescrita, la que no consta en un título ejecutivo, puede preparar su entrada en juicio ejecutivo por medio de las denominadas gestiones preparatorias de la vía ejecutiva, como el econocimiento de firma puesta en instrumento privado; la notificación judicial de protesto de letra, pagaré o cheque, o confesión judicial o confesión de deuda.

2.3. Etapas en el juicio ejecutivo

La tramitación del juicio ejecutivo se lleva en dos cuadernos: El cuaderno principal y el de apremio, que se conservan juntos en la causa y que se tramitan en paralelo.

En el cuaderno principal consta la demanda y las excepciones a su ejecución opuestas por el deudor. El cuaderno de apremio, en tanto, contiene todas las gestiones destinadas a obtener la realización de los bienes.



La tramitación de cada cuaderno sigue las siguientes etapas, que analizaremos:

CUADERNO PRINCIPAL: demanda → excepciones → admisibilidad o inadmisibilidad de las excepciones → recepción del juicio a prueba → término probatorio → plazo para formular observaciones a la prueba → sentencia definitiva → recursos.

CUADERNO DE APREMIO: mandamiento de ejecución y embargo → requerimiento de pago → embargo → entrega al depositario de los bienes → realización de los bienes embargados → consignación de su valor → liquidación del crédito y de las costas → pago al acreedor.

2.3.1. El cuaderno principal

2.3.1.1. La Demanda Ejecutiva

La demanda ejecutiva, que puede ser la primera gestión en el juicio ejecutivo o puede ir precedida de una gestión preparatoria de la vía ejecutiva, es el medio por el cual el actor ejerce su pretensión y funda su título ejecutivo. Ésta debe cumplir con los requisitos generales de todo escrito y los específicos del art. 254 CPC, dentro de las cuales es fundamental que contenga la enunciación precisa y clara de las peticiones que se someten al fallo del tribunal, la más importante de las cuales debe ser la petición de **requerir de pago al deudor despachándose el mandamiento de ejecución y embargo contra él**, y que en definitiva se acoja la demanda siguiendo adelante con la ejecución hasta el completo pago del crédito.

Hay otros que además señalan bienes para la traba de embargo, designan depositario de los bienes embargados, solicitan la custodia del título ejecutivo en que funda la ejecución.

2.3.1.2. Examen de Admisibilidad



Presentada la demanda a tramitación, el juez tiene el deber de examinar el título y conceder o denegar la ejecución, tras analizar el cumplimiento de los requisitos propios de la acción ejecutiva. Si se ha verificado como admisible la demanda, el tribunal deberá declararlo en la resolución y mandará a notificar la demanda al deudor y ordenará en el mismo escrito: “despáchese mandamiento de ejecución y embargo”. Si se deniega la ejecución, el ejecutante podrá apelar o si, fuera procedente, recurrir de casación en la forma o en el fondo.

2.3.1.3. Notificación del ejecutado



Se lo notificará de la demanda personalmente o por cédula (cuaderno principal), y en el mismo acto, se le requerirá de pago (en el cuaderno de apremio). Si al momento de requerirse de pago el deudor no se encuentra, se le dejará un aviso para presentarse el día, hora y lugar que fije el ministro de fe para practicar el requerimiento. No concurriendo a esta citación el deudor, se le tendrá por requerido de pago, y se hará inmediatamente y sin más trámite el embargo.

2.3.1.4. Excepciones

Plazo

Requerido de pago el deudor tiene 4 días para deducir excepciones, si vive en la misma comuna donde funciona el tribunal. Si el ejecutado vive dentro del territorio jurisdiccional del tribunal pero en una comuna distinta de la del asiento del tribunal, el plazo se ampliará a 8 días.

Todos estos plazos son fatales (art. 463 CPC), y se cuentan desde el día del requerimiento de pago (art. 462 inc. 1° CPC).

La Oposición del Ejecutado

La posición del ejecutado sólo podrá fundarse en alguna de las excepciones establecidas en forma taxativa por el art. 464 CPC, referidas por ejemplo a la incompetencia del tribunal ante quien se haya presentado la demanda; la ineptitud de libelo por falta de algún requisito legal en el modo de formular la demanda; la falsedad del título; el pago de la deuda; la concesión de prórroga del plazo; la compensación; la transacción; entre otras excepciones.

La prueba



La resolución que recibe la causa a prueba debe notificarse por cédula a las partes. El término probatorio de las excepciones será de 10 días. El término probatorio podrá ampliarse por 10 días más a solicitud del acreedor formulada antes de su vencimiento, y en todo caso, las partes de común acuerdo podrán concederse términos probatorios extraordinarios.

La prueba se rinde y tramita de la misma manera que en el juicio ordinario.

Trámites posteriores a la prueba

Vencido el término probatorio, las partes tendrán 6 días para hacer observaciones a la prueba, luego de lo cual, el tribunal citará a las partes a oír sentencia.

2.3.1.5. Sentencia

El tribunal tendrá 10 días para dictar sentencia contados desde que el pleito quedó concluso (art. 470 CPC). La sentencia se limitará a declarar si acoge o rechaza las excepciones. Si acoge una excepción, puede omitir referirse a las demás.



La sentencia puede ser absolutoria o condenatoria para el ejecutado. Si es condenatoria, puede ser condenatoria de pago o condenatoria de remate. En el primer caso, obligará al deudor a entregar una suma líquida de dinero o el bien que se adeuda. En el segundo, el juez ordenará el embargo de bienes suficientes del deudor, los que serán rematados para pagar con su producido al acreedor.

Finalmente, si el deudor no dedujo excepciones, se omitirá el fallo y bastará el mandamiento de ejecución y embargo para que el acreedor pueda perseguir los bienes del deudor y el pago de su deuda conforme a las normas de apremio.

2.3.1.6. Recursos

Contra la sentencia definitiva caben los recursos de Aclaración, Rectificación, Apelación, Casación y Revisión.

2.3.2. El cuaderno de apremio

En este cuaderno se contienen todas las gestiones que se realizan para el pago compulsivo de la deuda. En la primera foja de este cuaderno debe constar el mandamiento de ejecución y embargo.

2.3.2.1. Mandamiento de Ejecución y Embargo



Debe cumplir los requisitos que señala el Art. 443 CPC, es decir, debe contener la orden de que el Ministro de Fe requiera de pago al deudor para que en el acto del requerimiento pague la deuda con intereses, reajustes, si corresponde, y costas. Señalando que de no verificarse el pago en el acto de la intimación, se procederá a trabarle embargo sobre bienes suficientes. Debe contener asimismo, la firma del juez y del secretario del Tribunal (art. 70 CPC).

2.3.2.2. El Requerimiento de Pago



Es el acto por el cual el Receptor Judicial u otro ministro de fe cumplen la orden del tribunal, intimándole el mandamiento al deudor a fin de que pague la deuda.

2.3.2.3. Actitudes que puede adoptar el Deudor

- a. Si se paga la deuda antes o durante el requerimiento: Deberá hacerse cargo el deudor del pago del capital, los reajustes e intereses que procedan, y las costas. (art. 446 y 457 CPC).
- b. Si se le embargan bienes para el pago de la deuda, el deudor conserva el derecho de restituir estos bienes, pagando lo que debe (art. 457 CPC).

2.3.2.4. El Embargo



Es la aprehensión compulsiva de bienes del deudor, que un receptor judicial realiza a solicitud del Tribunal, con el fin de que posteriormente el tribunal ordene la venta o realización de estos bienes, y luego se pague con su producto al deudor.

Sin embargo hay un límite establecido en el art. 447 del CPC, ya que los bienes que señalen no podrán exceder de los necesarios para responder a la demanda, haciéndose esta apreciación por el ministro de fe encargado de la diligencia, sin perjuicio de lo que pueda resolver el Tribunal.

Si el acreedor no designó bienes a embargar, éste recaerá sobre los bienes que el deudor presente en el acto del embargo, si en concepto del ministro de fe encargado de la diligencia, son suficientes o si, no siéndolo tampoco hay otros conocidos (art. 448 CPC).

A falta de esta designación, el ministro de fe procederá a determinar los bienes objeto del embargo en el siguiente orden: 1° El dinero; 2° Otros bienes muebles; 3° los bienes raíces; y, 4° los salarios y pensiones (art. 449 CPC).

Bienes Inembargables (art. 445 CPC)

Entre los bienes inembargables se cuentan por ejemplo:

- a. Los sueldos, gratificaciones y pensiones de gracia, jubilación, retiro y montepío que pagan el Estado y las Municipalidades (art. 445 N°1);
- b. Las remuneraciones (pero son embargables en la parte que exceda de 56 UF) de los empleados y obreros;
- c. Las pensiones alimenticias forzosas (art. 45 N° 3);
- d. Los Libros relativos a la profesión del deudor hasta el valor de 50 UTM y a elección del mismo deudor (art. 445 N°9);
- e. Las máquinas e instrumentos de que se sirve el deudor para la enseñanza de alguna ciencia o arte, hasta dicho valor y sujetos a la misa elección (art. 445 N°10);
- f. Los objetos indispensables al ejercicio profesional del arte u oficio de los artistas, artesanos y obreros de fábricas; y los aperos, animales de labor y material de cultivo necesarios al labrador o trabajador de campo para la explotación agrícola, hasta la suma de 50 UTM y a elección del mismo deudor (art. 445 N°12);



- g. Los utensilios caseros y de cocina, y los artículos de alimento y combustibles que existan en poder del deudor, hasta la concurrencia de lo necesario para el consumo de la familia durante un mes (art. 445 N°13).

Forma de efectuar el Embargo



El embargo se entenderá hecho por la entrega real o simbólica de los bienes al depositario que se designe (art. 450 CPC), aunque éste deje la especie en poder del mismo deudor. Si el deudor no concurre a la diligencia, o si se niega a hacer la entrega al depositario, procederá a efectuarla el ministro de fe (art. 452 CPC), para lo cual, cuando haya fundado temor de que la orden sea desobedecida, podrá solicitar auxilio de la fuerza pública (art. 443 inc. final CPC).

Efectos del Embargo

- a. Efectos respecto del ejecutante: El embargo le da derecho a pagarse con el producto resultante de la realización de esos bienes. Pero no adquiere en ningún caso derechos de dominio, de disposición, ni preferencia sobre los bienes.
- b. Efectos respecto del ejecutado: El efecto del embargo será la privación del derecho a administrar los bienes embargados, derecho que adquiere el depositario (art. 479 inc. 1° CPC); y pierde asimismo el derecho a disponer de los bienes ya que los bienes embargados salen del comercio humano y cualquier acto de enajenación constituye objeto ilícito (art. 1.464 N° 3 del Código Civil).

Ampliación del Embargo

La ampliación del embargo consiste en trabar embargo sobre nuevos bienes, luego de haberse efectuado un embargo previo, ante la insuficiencia de los bienes para cubrir el total adeudado.

Puede el acreedor pedir ampliación del embargo en cualquier estado del juicio, siempre que haya justo motivo para temer que los bienes embargados no basten para cubrir la deuda y las costas

Reducción del Embargo

La reducción del embargo consiste, por el contrario, en alzar el embargo sobre determinados bienes, los que a partir del alzamiento quedan excluidos.

Esta reducción de embargo ocurre cuando los bienes embargados exceden de los necesarios para cubrir el total de la deuda.

Sustitución del Embargo

Consiste en el reemplazo por dinero de un determinado bien embargado, y no puede sustituirse el embargo cuando éste recaiga sobre la especie objeto de la ejecución. La sustitución puede ser parcial o total y en este último caso significa el término del juicio ejecutivo.



Exclusión del Embargo

Consiste en el alzamiento del embargo respecto de los bienes inembargables cuando por error éste se ha trabado sobre alguno de ellos (art. 519 inc. 2° CPC). En este caso el alzamiento se decretará a la sola solicitud del deudor.

Cesación del Embargo

En este caso se alza íntegramente el embargo, lo que se puede decretar cuando el embargo se ha sustituido íntegramente por dinero, lo que equivale al pago total de la deuda y las costas.

El Reembargo

Ello ocurre cuando se traban dos o más embargos sobre un mismo bien de propiedad del deudor, en virtud de diversas ejecuciones iniciadas en su contra, lo que suele ocurrir cuando el deudor acumula deudas con distintos acreedores y sus bienes no alcanzan a cubrirlas todas. En este caso, si no se justifica derecho preferente para el pago, el producto del remate se distribuirá entre todos sus acreedores, proporcionalmente al monto de los créditos que se hagan valer (art. 527 CPC).

Por lo tanto, en estos casos de reembolso se producirá la figura de la tercería de pago.

2.3.2.5. El Depositario

Es el encargado de la custodia y administración de los bienes embargados. Puede ser provisional y depositario definitivo.

Por regla general el depositario provisional será el deudor, salvo que el ejecutante haya designado a un tercero en la demanda o que el ejecutante haya pedido que no se designe depositario.

El Depositario definitivo es el nombrado por las partes de común acuerdo en audiencia verbal, a falta de acuerdo, lo designa el Tribunal.

Las facultades del Depositario se refieren en términos generales a la administración de los bienes embargados.

Obligaciones del Depositario

- a. Depositar en la cuenta del Tribunal los fondos líquidos que provengan de su administración, tan pronto como cuente con ellos.
- b. Rendir la cuenta de su administración ante el tribunal y al final de la administración.

2.3.2.6. La Liquidación de los bienes



La tramitación en el cuaderno principal, concluirá con sentencia definitiva, bien sea absolutoria o condenatoria y, en este último caso, dicha sentencia podrá ser de pago o de remate.



También podrá concluir con el certificado de no haberse opuesto excepciones a la ejecución, caso en el cual se omitirá la sentencia y bastará el mandamiento de ejecución para continuar el cobro ejecutivo.

En cada uno de estos casos, la liquidación de los bienes se hace de diferente manera:

Liquidación de los bienes cuando hay sentencia Condenatoria de Pago

En este caso, la cosa embargada es la *especie o cuerpo cierto debida o dinero*.

La liquidación de los *bienes* se hace mediante la entrega de ellos al ejecutante (art. 512 CPC). Esto puede hacerse a partir del momento en que la sentencia definitiva queda firme o ejecutoriada.

Si lo embargado es *dinero*, deberá practicarse por el Secretario del Tribunal, a petición de cualquiera de las partes, una liquidación del crédito y regulación de las costas a pagar (art. 510 CPC). Efectuada, se notificará a las partes, las que tendrán derecho a presentar objeciones, las que se tramitarán incidentalmente.

Una vez firme la liquidación, se podrá pedir el giro del cheque de los fondos consignados en la cantidad que la liquidación determine (art. 511 inc. 1° CPC), pues los fondos están depositados en la cuenta corriente del Tribunal. El cheque se emitirá a nombre del ejecutante o de su abogado si le dio facultades de percibir (art. 7° inc. 2° CPC), siendo siempre nominativos.

Liquidación de los bienes cuando hay sentencia Condenatoria de Remate

En este caso, la cosa embargada son *bienes que deben rematarse o realizarse*, para poder pagar al ejecutante.

En este caso, la sentencia definitiva ordenará la realización (venta) de los bienes embargados y luego el pago al acreedor con el producido del remate, cuestión que trataremos a continuación.

Para proceder al remate, basta con que se haya notificado la sentencia, sin que sea necesario esperar a que se encuentre ejecutoriada (art. 481 CPC). Pero para pagar al ejecutante, ahí sí se requiere el certificado de ejecutoria.

2.3.2.7. La realización de los bienes embargados



Respecto del procedimiento, hay que distinguir:

Bienes muebles sujetos a corrupción, deterioro o de difícil conservación

Debe venderlos rápidamente el depositario, previa autorización judicial, sin necesidad de hacer tasación y luego, consignar el producto de la venta en la cuenta corriente del Tribunal.

Bienes Muebles Corporales

Se venderán por martillero habilitado, designado por el Tribunal, quien informará al Tribunal, y éste a su vez a las partes, el día y hora de la venta. La venta se hará al mejor postor y sin necesidad de tasación, luego de lo cual rendirá cuenta del remate y consignará el producto en la cuenta corriente del tribunal (art. 482 CPC).



Bienes Muebles Incorporales

Atendida su inmaterialidad, deben ser previamente tasados por peritos, luego de lo cual se venderán en remate público ante el Tribunal que conoce de la ejecución, o ante el Tribunal en cuya jurisdicción estén situados los bienes, cuando así se resuelva a solicitud de partes y por motivos fundados (art. 485 CPC).

Bienes Inmuebles

En la realización de los bienes raíces se seguirá el siguiente procedimiento:

a. La Tasación.

Se tasará el inmueble con el fin de fijar un mínimo para la subasta, sea por perito o aquel valor que figure en el Rol de Avalúo Fiscal vigente.

b. Bases del Remate.

Aprobada la tasación del bien raíz, se fijarán las bases de acuerdo a las cuales se realizará la pública subasta, fijando, entre otras bases: cauciones para participar en el remate, mínimo de posturas, las condiciones de venta, forma de pago, fecha y oportunidad de entrega del inmueble, venta ad corpus, quién paga los gastos de la venta, etc.

c. Oportunidad del Remate.

Aprobada la tasación, se señalará día y hora para la subasta (art. 488 CPC). El remate se realiza en las dependencias del mismo Tribunal, en lo posible fuera de horario de las audiencias.

d. Formalidades de Publicidad.



El remate, con el señalamiento del día y hora en que debe tener lugar, se anunciará por medio de avisos publicados, a lo menos por 4 veces en un diario de la comuna en que tenga su asiento el tribunal, o de la capital de la provincia o de la capital de la región, si en aquélla no lo hubiere.

e. Trámites previos al Remate.

- i. Notificación y citación de los acreedores hipotecarios.
- ii. Autorización de los acreedores embargantes o autorización judicial en su caso
- iii. Calificación de las cauciones. Todo postor, para tomar parte en un remate, deberá rendir caución suficiente, calificada por el Tribunal, sin ulterior recurso, para responder que se llevará a efecto la compra de los bienes rematados.

f. El Remate propiamente tal.



El remate es judicial, forzado, público y al mejor postor.



La subasta recaerá sobre los derechos que el deudor tenga o pretenda tener sobre la cosa embargada (art. 523 inc. 2° CPC).

Si llegado el momento de la subasta, no se presentan postores, podrá el acreedor solicitar cualquiera de estas dos cosas, a su elección:

- 1a. Que se le adjudiquen por los dos tercios de la tasación los bienes embargados; o
- 2a. Que se reduzca prudencialmente por el tribunal el avalúo aprobado. La reducción no podrá exceder de una 3ª parte de este avalúo (art. 499 CPC).



g. Trámites posteriores al remate.

Luego del remate se levantará acta, que será firmada por todos los concurrentes al remate, y en caso de haber habido adjudicatarios de las especies rematadas, se otorgará escritura pública de adjudicación.

Esta acta de remate valdrá como escritura pública, para el efecto del art. 1801 del Código Civil; pero sin perjuicio de ello, deberá otorgarse dentro de 3° día la escritura pública definitiva con inserción de los antecedentes necesarios y con los demás requisitos legales.

9.3.2.8. El Pago al ejecutante

Una vez efectuado el remate o la venta, se deben consignar los fondos en la cuenta corriente del tribunal, se debe liquidar el crédito y luego de ejecutoriada la sentencia, se debe pagar al ejecutante, salvo que exista apelación pendiente.

9.3.2.9. La Cosa Juzgada

La sentencia recaída en el juicio ejecutivo produce cosa juzgada en el juicio ordinario tanto respecto del ejecutante como del ejecutado (art. 478 inc. 1° CPC).

2.4. Las tercerías



En términos generales, la tercería es la intervención en el proceso de un tercero que no es parte en el juicio.

En el caso del juicio ejecutivo, el interés del tercero sólo puede recaer sobre el crédito que se ejecuta o sobre los bienes embargados, y sólo puede deducirse tercería para alegar (Art. 518 CPC):

1. Dominio sobre los bienes embargados (tercería de dominio).
2. Posesión sobre los bienes embargados (tercería de posesión).
3. Mejor derecho que el acreedor para pagarse con el resultado de la ejecución (tercería de prelación).
4. Derecho para concurrir en el pago a falta de otros bienes (Tercería de pago).



3. EL PROCEDIMIENTO SUMARIO

3.1. Concepto, características e importancia

3.1.1. Concepto



El Juicio Sumario es un procedimiento de carácter declarativo, de aplicación general, oral y concentrado, que se encuentra regulado en los Artículos 680 al 692, Título XI del Libro III del Código de Procedimiento Civil.

3.1.2. Características

- a. Es un juicio que se aplica en los casos en que la naturaleza del asunto requiera un procedimiento rápido para que sea eficaz, así como en algunos específicos que la ley señala expresa y determinadamente.
- b. Es un juicio con instituciones específicas y especialísimas como la substitución de procedimiento o la aceptación provisional de la demanda.
- c. Es un juicio esencialmente oral.
- d. En este juicio, la rebeldía del demandado presume efectividad de aquello que alega el demandante.
- e. Es un juicio breve y rápido, por el plazo en que deben dictarse las resoluciones.
- f. Es un juicio concentrado: Todas las cuestiones del juicio deben promoverse y tramitarse en la audiencia respectiva, sin paralizar el curso del proceso, debiendo la sentencia definitiva pronunciarse sobre la acción deducida y los incidentes, o sólo sobre éstos cuando sean previos o incompatibles con dicha acción.

3.2. Aplicación

3.2.1. Aplicación General

Como se dijo, para solicitar la aplicación del juicio sumario, se requiere justificar y acreditar al tribunal dos circunstancias:

- 1° Que la acción requiere un procedimiento rápido para ser eficaz.
- 2° Que no existe un procedimiento especial para la acción que se pretende deducir.

Acreditadas estas circunstancias, el Juez se pronunciará acogiendo o rechazando la solicitud de aplicación de este procedimiento.

3.2.2. Aplicación Especial

El art. 680 CPC y otros cuerpos legales, han determinado expresamente la aplicación del procedimiento sumario. Estos casos son, por ejemplo:

- Aquellos en que la ley ordene proceder sumariamente, breve y sumariamente, o en otra forma análoga.
- Los juicios sobre cobro de honorarios.
- Juicios sobre comodato precario.



- A los juicios en que se deduzcan las acciones civiles derivadas de un delito o cuasidelito.

3.3. Tramitación

3.3.1. La Demanda y su proveído



La demanda podrá presentarse oralmente o mediante minutas escritas (Art. 682 CPC).

Una vez deducida la demanda, el tribunal citará a las partes a una audiencia que se celebrará el 5° día hábil después de la última notificación, ampliándose este plazo, si el demandado no está en el lugar del juicio, con todo el aumento que corresponda según la Tabla de Emplazamiento (art. 683 inc. 1° CPC). Esta resolución se notifica personalmente al demandado, por ser la primera gestión judicial, salvo que el procedimiento haya iniciado por medida prejudicial.

3.3.2. Comparendo de Contestación y Conciliación



A esta audiencia puede comparecer, además del demandante y demandado, el defensor público en los casos en que según la ley deba intervenir o cuando el tribunal lo juzgue necesario, y asimismo, cuando haya de oírse a los parientes, se citará en términos generales y los parientes de alguna de las partes, cuando sea necesario (art. 683 inc. 2° y 689 CPC).

3.3.3. Trámites posteriores al Comparendo



De todo lo obrado en la audiencia se levantará acta. Tanto del comparendo de contestación, como del de conciliación se levantará acta. De no producirse la conciliación, o de ser ésta sólo parcial, el tribunal podrá:

- a. Recibir la causa a prueba.
- b. Citar a las partes a oír sentencia: En caso que se haya accedido provisoriamente a la demanda y el demandado no haya deducido oposición dentro del 5to día desde que se accedió a la demanda (art. 684 y 685 CPC).

3.3.4. Sentencia

Terminado el comparendo en caso de no recibir la causa a prueba, o vencido el término probatorio, el tribunal, de inmediato, citará a las partes para oír sentencia (Art. 687 CPC). La sentencia deberá dictarse en el plazo de 10 días contados desde la fecha de la resolución que citó a las partes para oír sentencia.

3.4.5. Recursos

Contra la sentencia definitiva podrá deducirse recurso de Apelación y Casación en la forma. En segunda instancia, la sentencia definitiva será susceptible de casación en la forma y en el fondo. La tramitación del recurso de apelación, se ajustará a las reglas establecidas para los incidentes (art. 691 inc. 3° CPC).

3. PROCEDIMIENTOS ANTE LOS JUZGADOS DE FAMILIA

3.1. PROCEDIMIENTO ORDINARIO



La ley establece un procedimiento ordinario aplicable ante los Juzgados de Familia, ello implica que él será el utilizado en todos aquéllos asuntos en que el conflicto entre las partes corresponda a estos tribunales y no haya un procedimiento distinto establecido en la misma ley o en otras leyes.



3.1.1. Presentación de la demanda

La demanda deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el art. 254 CPC.



Tratándose de las causas en que la ley exige la mediación como trámite previo a la presentación de la demanda –derecho de alimentos, cuidado personal y el derecho de los padres e hijos e hijas que vivan separados a mantener una relación directa y regular- se deberá acompañar un certificado que acredite que se dio cumplimiento al procedimiento de mediación previo, dispuesto en el artículo 106 de la Ley N°19.968, que crea los tribunales de familia.

3.1.2. Contestación



El demandado deberá contestar la demanda por escrito, con al menos cinco días de anticipación a la fecha de realización de la audiencia preparatoria. Si desea reconvenir, deberá hacerlo de la misma forma, conjuntamente con la contestación de la demanda y cumpliendo con todos los requisitos establecidos en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Deducida la reconvenición, el tribunal la pone en conocimiento del demandante, quien podrá contestarla por escrito, u oralmente, en la audiencia preparatoria.

3.1.3. Notificaciones

Admitida la demanda, el tribunal citará a las partes a una audiencia preparatoria, la que deberá realizarse en el más breve plazo posible. Esta resolución se notifica a ambas partes, al demandante por el estado diario, o por correo electrónico, mientras que al demandado, por tratarse normalmente de la primera notificación en el proceso, según lo que hemos revisado con anterioridad, personalmente.

La notificación de la resolución que cita a la audiencia preparatoria deberá practicarse siempre con una antelación mínima de 15 días.

3.1.4. Audiencia Preparatoria



El resto del procedimiento se lleva a cabo esencialmente a través de dos audiencias sucesivas: la primera de ellas, de carácter preliminar, tiene por objeto preparar adecuadamente el juicio y provocar la conciliación entre las partes y la audiencia siguiente, denominada de juicio, cuyo objeto es que en ella se rinda íntegramente la prueba, se formulen alegaciones por las partes y se dicte sentencia.

La ley ha establecido diversos trámites dentro de la audiencia preparatoria. Ellos son:

- 1) Relación breve y sintética, que harán las partes ante el juez, del contenido de la demanda, de la contestación y de la reconvenición que se haya deducido, y de la contestación a la reconvenición, si ha sido hecha por escrito.
- 2) Contestar la demanda reconvenicional, en su caso.
- 3) El tribunal podrá decretar las medidas cautelares que sean necesarias.
- 4) Promover, en los casos en que proceda, ya sea iniciativa del tribunal o a petición de parte, que las partes resuelvan el conflicto a través de mediación familiar, evento en el cual se suspenderá el procedimiento judicial hasta concluida la mediación, según lo que veremos más adelante.
- 5) El tribunal promoverá la conciliación entre las partes, ya sea sobre todo o parte del conflicto, conforme a las bases de acuerdo que el propio tribunal proponga a las partes.
- 6) Enseguida, el tribunal procederá a determinar el objeto del juicio, las pretensiones de las partes que serán objeto de prueba y consideradas para su resolución en la sentencia.
- 7) Una vez fijado el objeto del juicio, el tribunal procederá a fijar los hechos que deben ser probados.
- 8) Determinar las pruebas que deberán rendirse al tenor de la propuesta de las partes y disponer la práctica de las otras que estime necesarias.
- 9) Excepcionalmente, y por motivos justificados, recibir la prueba que deba rendirse en ese momento.
- 10) Fijar la fecha de la audiencia de juicio, la que deberá llevarse a efecto en un plazo no superior a treinta días de realizada la preparatoria. Sin perjuicio de ello, el juez podrá, previo acuerdo de las partes, desarrollar la audiencia de juicio inmediatamente finalizada la preparatoria.

En caso de advertir la existencia de niños, niñas o adolescentes gravemente vulnerados o amenazados en sus derechos, el juez, de oficio o a petición de parte, podrá decretar la apertura del procedimiento especial previsto para la aplicación de medidas de protección y citar a la audiencia respectiva, procediendo a la acumulación necesaria, pudiendo decretar en todo caso medidas cautelares.



3.1.5. Audiencia de juicio



La audiencia se llevará a efecto en un solo acto, pudiendo prorrogarse en sesiones sucesivas si fuere necesario, y tendrá por objetivo recibir la prueba admitida por el tribunal y la decretada por éste.

El juez, con miras a salvaguardar el interés superior del niño, niña o adolescente, podrá ordenar que éste mismo u otro miembro del grupo familiar se ausente de la audiencia durante determinadas actuaciones.

En cuanto a la producción de la prueba, ella se rendirá de acuerdo al orden que fijen las partes, comenzando por la del demandante. Rindiéndose en último término la prueba ordenada por el juez.

Durante la audiencia, los testigos y peritos serán identificados por el juez, quien les tomará el juramento o promesa de decir verdad. A continuación, serán interrogados por las partes, comenzando por la que los presenta. Los peritos deberán exponer brevemente el contenido y las conclusiones de su informe y luego se autorizará su interrogatorio por las partes.

El juez también podrá efectuar preguntas al testigo o perito, así como a las partes que declaren, una vez que fueren interrogadas por los litigantes, con la finalidad de pedir aclaraciones o adiciones a sus dichos.

Los documentos, así como el informe de peritos en su caso, serán exhibidos y leídos en el debate, con indicación de su origen. En tanto que las grabaciones, los elementos de prueba audiovisuales, computacionales o cualquier otro de carácter electrónico apto para producir fe, se reproducirán en la audiencia por cualquier medio idóneo para su percepción por los asistentes. El juez podrá autorizar, con acuerdo de las partes, la lectura o reproducción parcial o resumida de los medios de prueba mencionados, cuando ello pareciere conveniente y se asegurare el conocimiento de su contenido. Todos estos medios podrán ser exhibidos a los declarantes durante sus testimonios, para que los reconozcan o se refieran a su conocimiento.

Practicada la prueba, el juez podrá solicitar a un miembro del Consejo Técnico que emita su opinión respecto de la prueba rendida, en el ámbito de su especialidad.

Finalmente, las partes formularán, oralmente y en forma breve, las observaciones que les merezca la prueba y la opinión del miembro del Consejo Técnico, así como sus conclusiones, de un modo preciso y concreto, con derecho a replicar respecto de las conclusiones argumentadas por las demás.

3.1.6. Sentencia

Una vez concluidas las alegaciones de las partes, el juez comunicará de inmediato su resolución, indicando los principales fundamentos tomados en consideración para dictarla. Excepcionalmente, cuando la audiencia de juicio se hubiere prolongado por más de dos días, el juez podrá postergar la decisión del caso hasta el día siguiente hábil, lo que se indicará a las partes al término de la audiencia, fijándose de inmediato la oportunidad en que la decisión será comunicada.

La redacción del fallo podrá ser pospuesta hasta por un plazo de cinco días, ampliables por otros cinco por razones fundadas, fijando la fecha en que tendrá lugar la lectura de la sentencia, la que podrá efectuarse de manera resumida.

3.1.7. Recursos

1) En el caso del recurso de reposición, la solicitud deberá presentarse dentro de tercero día de notificada la resolución reclamada, a menos que dentro de dicho término tenga lugar una

audiencia, ya que en tal caso deberá interponerse y resolverse durante ella misma. En tanto que, tratándose de una resolución pronunciada en audiencia, el recurso de reposición debe ser interpuesto por la parte y resuelto por el juez en el acto.

2) En cuanto al recurso de apelación, la ley limita el tipo de resoluciones apelables, de manera que sólo lo son la sentencia definitiva de primera instancia, las resoluciones que ponen término al procedimiento o hacen imposible su continuación –por ejemplo, la que decreta el abandono del procedimiento o acoge la excepción de incompetencia del tribunal–, y las que se pronuncien sobre medidas cautelares.

La apelación deberá entablarse siempre por escrito y se concederá en el solo efecto devolutivo.

La Corte de Apelaciones respectiva conocerá y fallará el recurso, sea que las partes o sus representantes comparezcan o no ante ella.

3) El recurso de casación en la forma procederá según lo establecido en el Código de Procedimiento Civil, aunque con las siguientes modificaciones: sólo podrá intentarse en contra de las sentencias definitivas de primera instancia y de las interlocutorias de primera instancia que pongan término al juicio o hagan imposible su continuación; se reducen las causales que lo hacen procedente; y, se atenúa la exigencia de patrocinio de abogado, la que se entenderá satisfecha por la sola circunstancia de interponerlos el abogado que patrocine la causa.

3.2. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN JUDICIAL DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES

La ley que crea los Juzgados de Familia establece también un procedimiento aplicable para aquéllos casos en que la ley exige o autoriza la intervención del tribunal para adoptar alguna de las medidas de protección jurisdiccionales establecidas en la ley, a efectos de proteger los derechos de los niños, niñas o adolescentes cuando éstos se encontraren amenazados o vulnerados.

El procedimiento podrá iniciarse a solicitud del mismo niño, niña o adolescente, de sus padres, de las personas que lo tengan bajo su cuidado, de los profesores o del director del establecimiento educacional al que asista, de los profesionales de la salud que trabajen en los servicios en que se atienda, del Servicio Nacional de Menores o de cualquier persona que tenga interés en ello; tal solicitud no requiere de formalidad alguna, bastando con la sola petición de protección para dar por iniciado el procedimiento. Por supuesto, el procedimiento también podrá iniciarse a instancias del propio tribunal, sin que haya mediado requerimiento de persona alguna.

3.2.1. Medidas cautelares especiales



En cualquier momento del procedimiento, inclusive antes de su iniciación, a solicitud de la autoridad pública o de cualquier persona, e incluso de oficio sin mediar tal solicitud, el juez podrá adoptar medidas cautelares cuando sea necesario para proteger los derechos del niño, niña o adolescente; tal medida cautelar no podrá durar más de noventa días.

Entre tales medidas, la ley prevé las siguientes:

- a) La entrega inmediata del niño, niña o adolescente a sus padres o a quienes tengan legalmente su cuidado;
- b) Confiar su cuidado en una persona o familia en casos de urgencia. En tal caso, el juez preferirá, para que asuman provisoriamente el cuidado, a sus parientes consanguíneos o a otras personas con las que tenga relación de confianza;

- c) El ingreso a un programa de familias de acogida o centro de diagnóstico o residencia, por el tiempo que sea estrictamente indispensable. En este caso, de adoptarse la medida sin la comparecencia del niño, niña o adolescente ante el juez, deberá asegurarse que ésta se verifique a primera hora de la audiencia más próxima;
- d) Disponer la asistencia de niños, niñas o adolescentes, sus padres, o las personas que los tengan bajo su cuidado, a programas o acciones de apoyo, reparación u orientación, para enfrentar y superar las situaciones de crisis en que pudieren encontrarse, e impartir las instrucciones pertinentes;
- e) Suspender el derecho de una o más personas determinadas a mantener relaciones directas o regulares con el niño, niña o adolescente, sea que tales condiciones de relación hayan sido establecidas por resolución judicial o por acuerdo entre las partes;
- f) Prohibir o limitar la presencia del ofensor en el hogar común;
- g) Prohibir o limitar la concurrencia del ofensor al lugar de estudio del niño, niña o adolescente, así como a cualquier otro lugar donde éste o ésta permanezca, visite o concurra habitualmente. En caso de que concurran al mismo establecimiento, el juez adoptará medidas específicas tendientes a resguardar los derechos de aquéllos;
- h) La internación en un establecimiento hospitalario, psiquiátrico o de tratamiento especializado, según corresponda, en la medida que se requiera de los servicios que éstos ofrecen y ello sea indispensable frente a una amenaza a su vida o salud; y,
- i) La prohibición de salir del país para el niño, niña o adolescente sujeto de la petición de protección.

3.3. PROCEDIMIENTO RELATIVO A ACTOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR



El conocimiento de los conflictos originados de los actos de violencia intrafamiliar será de competencia del Juzgado de Familia dentro de cuyo territorio jurisdiccional tenga residencia o domicilio el afectado, siempre que se trate de actos de violencia intrafamiliar que no sean constitutivos de delitos.

A efectos de brindar protección al afectado, cualquier tribunal que ejerza jurisdicción en asuntos de familia, un fiscal del Ministerio Público o un juez de garantía, que hayan tomado conocimiento de una demanda o denuncia por actos de violencia intrafamiliar, deberán, de inmediato, adoptar las medidas cautelares del caso, aun cuando no sea competente para conocer de ellas; ello es igualmente válido cuando entre las víctimas figuren personas mayores y niños, niñas o adolescentes.

El procedimiento se iniciará por demanda o por denuncia, la que podrán interponer la propia víctima, sus ascendientes, descendientes, guardadores o personas que la tengan a su cuidado. La denuncia, además, podrá hacerse por cualquier persona que tenga conocimiento directo de los hechos que la motiven.

Sin embargo, hay ciertas personas que están obligadas a denunciar los hechos que pudieren constituir violencia intrafamiliar de que tomen conocimiento en razón de sus cargos, tales como: los miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería; los fiscales y empleados públicos; los jefes de puertos, aeropuertos, estaciones de trenes o buses y otros análogos; los profesionales de la medicina y establecimientos de salud; y, los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales. También lo están quienes ejercen el cuidado personal de aquéllos que en razón de su edad, incapacidad u otra condición similar, no pudieren formular por sí mismos la respectiva denuncia. En caso de no cumplir tal obligación, el responsable será sancionado con pena de multa.

Cuando exista una situación de riesgo inminente para una o más personas de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, aun cuando éste no se haya llevado a cabo, el tribunal,

con el solo mérito de la denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan.

3.3.1. Medidas cautelares en protección de la víctima



El juez de familia está obligado a dar protección a la víctima y al grupo familiar. Al efecto, debe cautelar su subsistencia económica e integridad patrimonial. Para ello, en el ejercicio de su potestad cautelar y sin perjuicio de otras medidas que estime pertinentes, podrá adoptar una o más de las siguientes:

- 1) Prohibir al ofensor acercarse a la víctima y prohibir o restringir la presencia de aquél en el hogar común y en el domicilio, lugar de estudios o de trabajo de ésta, así como en cualquier otro lugar en que la víctima permanezca, concurra o visite habitualmente. Si ambos trabajan o estudian en el mismo lugar, se oficiará al empleador o director del establecimiento para que adopte las medidas de resguardo necesarias.
- 2) Asegurar la entrega material de los efectos personales de la víctima que optare por no regresar al hogar común.
- 3) Fijar alimentos provisorios.
- 4) Determinar un régimen provisorio de cuidado personal de los niños, niñas o adolescentes, y establecer la forma en que se mantendrá una relación directa y regular entre los progenitores y sus hijos.
- 5) Decretar la prohibición de celebrar actos o contratos.
- 6) Prohibir el porte y tenencia de cualquier arma de fuego, municiones y cartuchos; disponer la retención de los mismos, y prohibir la adquisición o almacenaje de los objetos singularizados en el artículo 2º de la ley N° 17.798, sobre Control de Armas.
- 7) Decretar la reserva de la identidad del tercero denunciante.
- 8) Establecer medidas de protección para adultos mayores o personas afectadas por alguna incapacidad o discapacidad.

Estas u otras medidas cautelares podrán decretarse por un período que no excederá los 180 días hábiles, renovables, por una sola vez, hasta por igual plazo y podrán, asimismo, ampliarse, limitarse, modificarse, sustituirse o dejarse sin efecto, de oficio o a petición de parte, en cualquier momento del juicio.

El juez, para dar protección a niños, niñas o adolescentes, podrá, además, adoptar las medidas cautelares especiales aplicables en procedimientos de protección de sus derechos, antes mencionadas, cumpliendo con los requisitos y condiciones previstas en la ley.

Tratándose de adultos mayores en situación de abandono, el tribunal podrá decretar la internación del afectado en alguno de los hogares o instituciones reconocidos por la autoridad competente. Para estos efectos, se entenderá por situación de abandono el desamparo que afecte a un adulto mayor que requiera de cuidados.

En caso de incumplimiento de las medidas cautelares, el juez pondrá los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público para los efectos del delito de desacato, sancionado con pena privativa de libertad, de 541 días a cinco años, inclusive. Sin perjuicio de ello, impondrá al infractor, como medida de apremio, arresto hasta por quince días.

3.3.2. Audiencia preparatoria

Recibida la demanda o denuncia, el juez citará a las partes a la audiencia preparatoria, la que en este caso tiene previsto un plazo de realización dentro de los diez días siguientes.

En cuanto a los trámites que tienen lugar en la audiencia preparatoria, así como en lo que toca a la oportunidad y contenido de la audiencia de juicio, se aplican las disposiciones del procedimiento ordinario ante los Juzgados de Familia.

3.3.3. Término del proceso

El proceso puede terminar de cuatro formas: a) por requerimiento de la víctima; b) por sentencia; c) por suspensión condicional de la dictación de la sentencia; y d) por archivo. Examinemos brevemente cada una de ellas.

a) Requerimiento de la víctima. Cuando el proceso se hubiere iniciado por demanda o denuncia de un tercero, el juez de familia, durante la audiencia preparatoria y previo informe del Consejo Técnico, podrá poner término al proceso a requerimiento de la víctima, siempre que su voluntad sea manifestada libre y espontáneamente.



b) Sentencia. La sentencia contendrá un pronunciamiento sobre la existencia de hechos constitutivos de violencia intrafamiliar, establecerá la responsabilidad del denunciado o demandado y, en su caso, la sanción aplicable.

La ley de violencia intrafamiliar establece que el maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, atendida su gravedad, será sancionado con una multa de media a quince unidades tributarias mensuales a beneficio del gobierno regional del domicilio del denunciante o demandante, cuyo importe será destinado a los centros de atención de víctimas de violencia intrafamiliar existentes en la región respectiva y que sean de financiamiento público o privado.

Además de lo sanción de multa, la nueva ley de violencia intrafamiliar impone al juez el deber de aplicar en la sentencia una o más de las siguientes medidas accesorias:

- i. Obligación de abandonar el ofensor el hogar que comparte con la víctima.
- ii. Prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, lugar de trabajo o de estudio. Si ambos trabajan o estudian en el mismo lugar se oficiará al empleador o director del establecimiento para que adopte las medidas de resguardo necesarias.
- iii. Prohibición de porte y tenencia y, en su caso, el comiso, de armas de fuego.
- iv. La asistencia obligatoria a programas terapéuticos o de orientación familiar.

El juez fijará el plazo de estas medidas, que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a un año, prorrogable, a petición de la víctima, si se mantienen los hechos que las justificaron.

c) Suspensión condicional de la dictación de la sentencia. Si el denunciado o demandado reconoce ante el tribunal los hechos en cuestión y existen antecedentes que permiten presumir fundadamente que no ejecutará actos similares en lo sucesivo, el juez podrá suspender condicionalmente la dictación de la sentencia, siempre y cuando se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones:

- i) Que se hayan establecido y aceptado por las partes obligaciones específicas y determinadas sobre sus relaciones de familia y aquellas de carácter reparatorio a satisfacción de la víctima.
- ii) Que se haya adquirido por el demandado o denunciado, con el acuerdo de la víctima, el compromiso de observancia de una o más de las medidas cautelares previstas en la ley por un lapso no inferior a seis meses ni superior a un año.

d) Archivo. Si llegado el día de la celebración de la audiencia respectiva, no concurriere ninguna de las partes que figuren en el proceso, y el demandante o denunciante no pidiere una nueva citación dentro de quinto día, el juez de familia ordenará el archivo provisional de los antecedentes, pudiendo el denunciante o demandante solicitar, en cualquier momento, la reapertura del procedimiento. Transcurrido un año desde que se decreta el archivo provisional sin haberse requerido la reanudación del procedimiento, se declarará, de oficio o a petición de

parte, el abandono del procedimiento, debiendo el juez dejar sin efecto las medidas cautelares que haya fijado.

3.4. PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE ALIMENTOS



La Ley que crea los Juzgados de Familia también introduce modificaciones en la Ley N° 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias.

De los juicios de alimentos –sea que ellos sean requeridos para los hijos menores de edad o no– conocerá el juez de familia del domicilio del alimentante o del alimentario, a elección de este último. En cambio, de las demandas de rebaja o cese de la pensión conocerá el tribunal del domicilio del alimentario.

La madre, cualquiera sea su edad, podrá solicitar alimentos para el hijo ya nacido o que está por nacer. Si aquélla es menor, el juez deberá ejercer designarle representante en interés de la madre.

En los juicios en que se demanden el juez deberá pronunciarse sobre los alimentos provisorios, junto con admitir la demanda a tramitación, con el solo mérito de los documentos y antecedentes presentados, en caso contrario, incurrirá en falta o abuso. No obstante, el demandado tendrá cinco días para oponerse al monto provisorio decretado, debiéndosele informar de ello con la notificación de la demanda. En caso de mediar oposición, el juez resolverá de plano, salvo que del mérito de los antecedentes estime necesario citar a una audiencia, la que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes. En cambio, si no existe oposición, la resolución que fija los alimentos provisorios causará ejecutoria.

El tribunal podrá acceder provisionalmente a la solicitud de aumento, rebaja o cese de una pensión alimenticia, cuando estime que existen antecedentes suficientes que lo justifiquen.

Toda resolución que fije una pensión de alimentos deberá determinar el monto y lugar de pago de la misma, pudiéndose verificar mediante retención judicial por el empleador del alimentante. El monto de la pensión no podrá ser una suma o porcentaje que exceda del cincuenta por ciento de las rentas del alimentante. Y, cuando ella sea fijada en una suma determinada, ésta se reajustará por el tribunal semestralmente de acuerdo al alza que haya experimentado el Índice de Precios al Consumidor.

Toda resolución judicial que fije una pensión alimenticia, o que aprueba una transacción que cumpla con los requisitos legales, tienen mérito ejecutivo. Y, en caso de incumplimiento, será competente para conocer de la ejecución el mismo Juzgado de Familia que dictó la resolución o el del nuevo domicilio del alimentario.

3.7.1. Aplicación de medidas de apremio al alimentante

Si decretados los alimentos por resolución que cause ejecutoria en favor del cónyuge, de los padres, de los hijos o del adoptado, el alimentante no hubiere cumplido su obligación en la forma pactada u ordenada o hubiere dejado de pagar una o más cuotas, el tribunal que dictó la resolución deberá, a petición de parte o de oficio y sin necesidad de audiencia, imponer al deudor como medida de apremio, el arresto nocturno hasta por quince días. Tal medida tendrá lugar entre las veintidós horas de cada día hasta las seis horas del día siguiente. Además, el juez podrá repetir la medida hasta obtener el íntegro pago de la obligación.

CAPÍTULO VII. PROCEDIMIENTOS ANTE LOS JUZGADOS DE LETRAS DEL TRABAJO

1. PROCEDIMIENTO ORDINARIO

En el párrafo 3° del Capítulo II, inserto en el Título I del Libro V del Código del Trabajo, se establece un procedimiento de aplicación general u ordinario aplicable ante los Juzgados de Letras del Trabajo, el cual tiene el carácter general y supletorio.



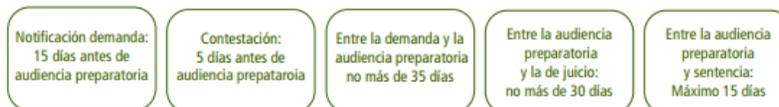
En efecto, el procedimiento ordinario es de general aplicación, ya que debe ser utilizado en todos aquellos asuntos en que el conflicto entre las partes corresponda a estos tribunales y no haya un procedimiento distinto establecido en la misma ley o en otras leyes. Así, por ejemplo, tratándose de demandas por despido injustificado o por despido indirecto, la ley no prevé un procedimiento especial, por lo cual debe aplicarse precisamente el ordinario.

Asimismo, el procedimiento de aplicación general tiene un carácter supletorio, ya que, cuando esta ley u otra establecen un procedimiento especial, pero en su regulación se omiten determinados trámites, las normas sobre procedimiento ordinario se aplican también, aunque supletoriamente.

El procedimiento se desarrolla en dos audiencias (art. 450 CT), la primera preparatoria y la segunda de juicio, conforme a las reglas que se explicarán más adelante. En el Gráfico N° 4 se observa un diagrama con los principales trámites del procedimiento ordinario aplicable ante los Juzgados de Letras del Trabajo.



DIAGRAMA DE PRINCIPALES PLAZOS DEL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN GENERAL



En base a información de Academia Judicial

1. La Demanda



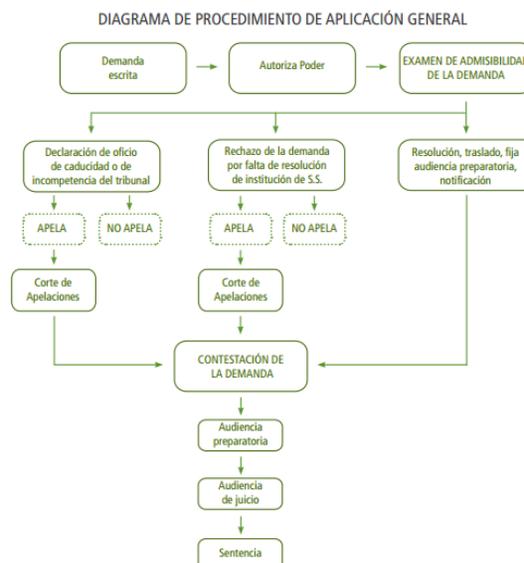
El procedimiento de aplicación general u ordinario comienza con la interposición de la demanda, la cual sólo puede ser presentada por escrito. Cabe señalar que, como se ha mencionado anteriormente, el proceso puede comenzar también con una medida prejudicial.

2. Primera resolución



Recibida la demanda, el tribunal puede:

- **Declararse de oficio incompetente cuando así lo estime:** En este caso, debe remitir los antecedentes al tribunal que señale como competente.
- **Declarar de oficio la caducidad de la acción:** Puede declarar de oficio la caducidad de la acción cuando esto se desprenda claramente de los antecedentes aportados, no admitiendo a tramitación la demanda respecto de esa acción.
- **Rechazar de plano la demanda sobre materias de previsión o seguridad social:** Lo anterior, cuando el demandante no adjunte la resolución final de la respectiva entidad o de la entidad fiscalizadora a la que se ha aludido precedentemente.
- **Declarar admisible la demanda:** En este caso, debe inmediatamente y sin más trámite, citar a las partes a una audiencia preparatoria, la que debe realizarse dentro del plazo de 35 días contados desde la resolución de citación.



En base a información de Academia Judicial

3. La Notificación

Admitida la demanda a tramitación, el tribunal debe, de inmediato y sin más trámite, citar a las partes a una audiencia preparatoria, fijando para tal efecto, dentro de los 35 días siguientes a la fecha de la resolución, el día y la hora para su celebración.

Esta resolución se notifica a ambas partes, al demandante por el estado diario, mientras que al demandado, por tratarse normalmente de la primera notificación en el proceso, de manera personal.



Esta resolución debe notificarse con a lo menos 15 días de anticipación respecto de la fecha fijada para la audiencia preparatoria.

En la misma resolución que cita a audiencia preparatoria se debe hacer presente a las partes que ella se celebrará con quienes asistan, afectándole a la inasistente todas las resoluciones que se dicten en la audiencia, sin necesidad de ulterior notificación. Además, se debe señalar que las partes, que en dicha audiencia, deben señalar al tribunal todos los medios de prueba que pretendan hacer valer en la audiencia de juicio, como así también requerir las diligencias de prueba necesarias (art. 451 CT).

4. Contestación y demanda reconvenzional



El demandado debe contestar la demanda por escrito con a lo menos 5 días de antelación a la fecha de celebración de la audiencia preparatoria.

Adicionalmente, el demandado puede demandar a su vez al demandante, en cuyo caso se denominará “reconvencción”, la cual sólo es procedente cuando el tribunal sea competente para conocer de ella como demanda y siempre que esté íntimamente ligada a ella.

5. La audiencia preparatoria



El resto del procedimiento se lleva a cabo esencialmente a través de dos audiencias sucesivas: la primera de ellas, de carácter preliminar, tiene por objeto fijar de los puntos de discusión y provocar la conciliación entre las partes y, en su defecto, preparar adecuadamente el juicio, es por ello que se denomina preparatoria; y la audiencia siguiente, denominada de juicio, cuyo objeto es que en ella se rinda íntegramente la prueba, se formulen alegaciones por las partes y se dicte sentencia.

Las partes deben comparecer con patrocinio de abogado y representadas por persona legalmente habilitada para actuar en juicio.

Si ninguna de las partes asiste a la audiencia preparatoria, éstas tienen el derecho de solicitar, por una sola vez, conjunta o separadamente, dentro de quinto día contados desde la fecha en que debió efectuarse, nuevo día y hora para la realización de dicha audiencia.

Por aplicación del principio de concentración, la ley ha establecido diversos trámites dentro de la audiencia preparatoria (art. 453 CT). Ellos se pueden dividir en cuatro etapas: Discusión, Conciliación, Preparación de la Prueba y Final.

Por último, el tribunal debe fijar la fecha para la audiencia de juicio, la que debe llevarse a cabo en un plazo no superior a 30 días de realizada la audiencia preparatoria. Las partes se entienden citadas a esta audiencia por el solo ministerio de la ley.

6. La audiencia de juicio

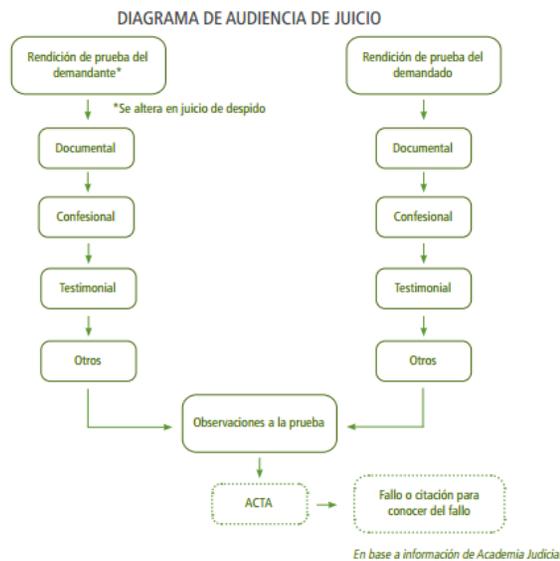


La audiencia se debe llevar a efecto en un solo acto, y tiene por objetivo recibir la prueba admitida por el tribunal y la decretada por éste. El día y hora fijados, las partes - al igual que en la audiencia preparatoria- deben comparecer representadas por persona legalmente habilitada para actuar en juicio.

Por aplicación del principio de concentración, la ley ha establecido diversos trámites dentro de la audiencia de juicio (art. 454 CT). Ellos son:

- La audiencia de juicio se inicia con la rendición de las pruebas decretadas por el tribunal, comenzando con la ofrecida por el demandante y luego con la del demandado, salvo en los juicios sobre despido, en cuyo caso corresponde la rendición de la prueba en primer lugar al demandado.
- El orden establecido por la ley para la recepción de las pruebas es el siguiente: i) documental; ii) confesional; iii) testimonial; y, iv) los otros medios ofrecidos. Cabe señalar que el tribunal puede modificarlos por causa justificada.
- Practicada la prueba, las partes pueden formular, oralmente, en forma breve y precisa, las observaciones que les merezcan las pruebas y sus conclusiones. La ley faculta al juez para pedir a las partes que aclaren los puntos oscuros de sus observaciones.

- Al finalizar la audiencia debe levantarse un acta, en la que debe constar el lugar, fecha e individualización del tribunal, de las partes comparecientes, de sus apoderados y abogados, y de toda otra circunstancia que el tribunal estime necesario incorporar (art. 455 CT).



7. La sentencia



Para resolver el asunto sometido a su conocimiento, el tribunal debe apreciar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, esto es, debe expresar las razones jurídicas y simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud les asigne valor o las desestime.

El juez puede pronunciar la sentencia al término de la audiencia de juicio o dictarla dentro del plazo de 15 días contados desde la realización de la audiencia.

La sentencia debe pronunciarse sobre las acciones y excepciones deducidas que no se hayan resuelto con anterioridad y sobre los incidentes, en su caso (art. 458 CT).

Como se señaló anteriormente, el juez puede dictar sentencia en la audiencia preparatoria, en el cual se omiten la síntesis de los hechos y las alegaciones de las partes, así como el análisis de la prueba rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento que conduzca a esta estimación. De esta manera, basta con que el fallo cumpla con los requisitos números 1, 2, 5, 6 y 7 precedentes.

8. Los recursos

8.1. Recurso de reposición

Se interpone frente al mismo tribunal que dicta una resolución y es él quien la resuelve.

En contra de la resolución dictada en audiencia, la reposición debe interponerse en forma verbal, inmediatamente de pronunciada la resolución que se impugna.

En contra de la resolución dictada fuera de audiencia, debe presentarse dentro de tercero día de notificada la resolución correspondiente, a menos que dentro de dicho término tenga lugar una audiencia, en cuyo caso debe interponerse a su inicio.

En aquellas ocasiones en que se presente en audiencia debe ser resuelta en el acto.



8.2. Recurso de apelación

Procede en contra de sentencias interlocutorias que pongan término al juicio o hagan imposible su continuación, las que se pronuncien sobre medidas cautelares y las que fijen el monto de las liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de seguridad social.

8.3. Recurso de nulidad

El recurso de nulidad tiene por finalidad invalidar el procedimiento total o parcialmente junto con la sentencia definitiva, o sólo esta última, según corresponda.

Procede sólo en contra de sentencias definitivas cuando en la tramitación del procedimiento o en la dictación de la sentencia definitiva se hayan infringido sustancialmente derechos o garantías constitucionales, o aquélla se haya dictado con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

El recurso de nulidad debe interponerse por escrito, ante el tribunal que dictó la resolución que se impugna, dentro del plazo de 10 días contados desde la notificación respectiva a la parte que lo entabla, para que sea conocido por la respectiva Corte de Apelaciones.

Debe expresar el vicio que se reclama, la infracción de garantías constitucionales o de ley de que adolece, según corresponda, y en este caso, además, señalar de qué modo dichas infracciones de ley influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

8.4. Recurso de unificación de jurisprudencia

Este recurso procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existen distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia.

La interposición del recurso no suspende la ejecución de la resolución recurrida, salvo cuando su cumplimiento haga imposible llevar a efecto la que se dicte si se acoge el recurso. La parte vencida puede exigir que no se lleve a efecto tal resolución mientras la parte vencedora no rinda garantía suficiente (fianza de resultas) a satisfacción de la Corte correspondiente, pero debe ejercer este derecho conjuntamente con la interposición del recurso y en solicitud separada. La Corte correspondiente, al declarar admisible el recurso, debe pronunciarse de plano sobre la petición antes señalada. En contra de tal resolución no procede recurso alguno.

En cuanto a la tramitación del recurso, cabe señalar que éste debe interponerse ante la Corte de Apelaciones correspondiente en el plazo de 15 días desde la notificación de la sentencia que se recurre, para que sea conocido por la Corte Suprema.

La sala especializada de la Corte Suprema sólo puede declarar inadmisibles el recurso por la unanimidad de sus miembros, mediante resolución fundada, si no se cumplió en el plazo para su interposición y carece de fundamento en las causales invocadas. Dicha resolución sólo puede ser objeto de recurso de reposición dentro de quinto día.

El fallo que se pronuncie sobre el recurso sólo tiene efecto respecto de la causa respectiva, y en ningún caso afecta a las situaciones jurídicas fijadas en las sentencias que le sirven de antecedente.

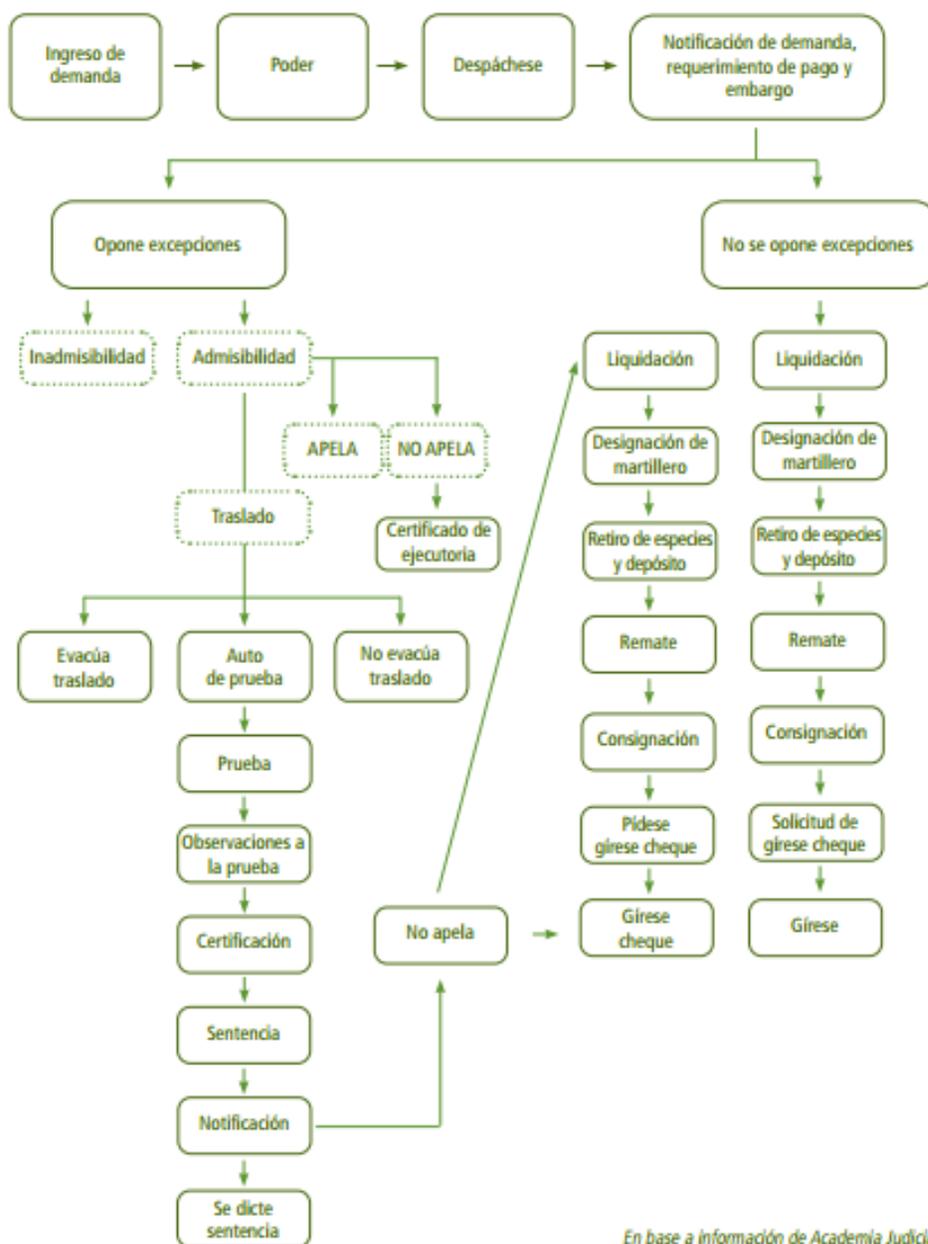
2. PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA Y DE LA EJECUCIÓN DE LOS TÍTULOS EJECUTIVOS LABORALES

A efectos de obtener el cumplimiento de las sentencias y la ejecución de los títulos ejecutivos laborales, la ley ha establecido un procedimiento que se verifica ante los Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional.

Cabe señalar que respecto de los juicios en que se demande el cumplimiento de obligaciones que emanen de títulos a los cuales las leyes laborales y de previsión o seguridad social otorguen mérito ejecutivo; y, especialmente, la ejecución de todos los títulos ejecutivos regidos por la Ley N° 17.322, relativa a la cobranza judicial de imposiciones, aportes y multas en los institutos de previsión, son de competencia de los Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional (art. 421 CT).

Es competente para conocer de estos procedimientos el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional en aquellos territorios donde fueron establecidos por ley. En cambio, donde no exista un tribunal de esta naturaleza, es competente para conocer de este procedimiento el Juzgado de Letras del Trabajo correspondiente o el Juzgado de Letras de competencia común (arts. 421 y 422 CT).

DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO EJECUTIVO LABORAL



3. PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL

Los derechos asegurados constitucionalmente no desaparecen en el entorno laboral, se conservan, aun cuando ello suponga en ciertos casos establecer un equilibrio adecuado para la consecución de los fines propios de la relación de trabajo.

Para garantizar que tales disposiciones no constituyan una mera declaración de principios, el legislador ha establecido un procedimiento específico a los asuntos que se susciten en una relación laboral que afecten derechos fundamentales de los trabajadores con ocasión del ejercicio, por parte del empleador, de las facultades que les concede la ley.

De esta manera, se establece el procedimiento de tutela laboral, que es un procedimiento especial que se aplica para las cuestiones que afecten a los derechos fundamentales de los trabajadores en sus relaciones con el empleador.

Al efecto, el procedimiento de tutela laboral, según cuanto detallaremos seguidamente, es empleado para conocer de infracción a los derechos fundamentales, actos discriminatorios y prácticas antisindicales o desleales que se realizan tanto durante la vigencia de la relación laboral como con ocasión del despido.

De esta manera, el procedimiento de tutela laboral tiene por objeto conocer y resolver los asuntos que se susciten en una relación laboral que afecten ciertos derechos fundamentales de los trabajadores, siendo incompatible con el recurso de protección.

Derechos Fundamentales protegidos

Respecto de la infracción a derechos fundamentales, la ley especifica cuáles son las garantías amparadas por este procedimiento (art. 485 CT). En este sentido, este procedimiento queda limitado a la tutela de los siguientes derechos fundamentales:

- a. El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica (19 N° 1 inc. 1° de la Constitución), siempre que la vulneración sea consecuencia directa de actos ocurridos en la relación laboral.
- b. Respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia (19 N° 4 de la Constitución).
- c. La inviolabilidad de toda forma de comunicación privada (19 N° 5 de la Constitución).
- d. La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público (19 N° 6 inc. 1° de la Constitución).
- e. Libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio (19 N° 12 inc. 1° de la Constitución).
- f. La libertad de trabajo y su protección. Derecho a su libre elección. Imposibilidad de prohibir alguna clase de trabajos. Actos que constituyan prácticas desleales de la negociación colectiva (19 N° 16 inc. 1° y 4° de la Constitución).

Los actos de discriminación corresponden a aquellas distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional u origen social que tenga por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. Es importante destacar que esta garantía supone la imposibilidad de cualquier tipo de discriminación en el empleo, esto es, de exigir requisitos que vayan más allá de las capacidades e idoneidad del trabajador con respecto al trabajo que se ofrece.

La denuncia que inicie un procedimiento de tutela laboral debe interponerse dentro del plazo de 60 días contados desde que se produzca la vulneración de derechos fundamentales alegada.

En el caso que la vulneración se haya verificado con ocasión del despido, el plazo se computa a partir de la separación efectiva del trabajador de sus labores.

4. PROCEDIMIENTO MONITORIO

Es un procedimiento especial, de carácter abreviado, el cual se rige por las siguientes disposiciones del procedimiento monitorio.

Este procedimiento se aplica para los conflictos cuya cuantía sea inferior a 10 Ingresos Mínimos Mensuales (sin considerar los incrementos que establece la ley por la denominada “Ineficacia del Despido, “Nulidad del Despido” o “Ley Bustos”) y en el caso de contiendas por aplicación del fuero maternal (art. 496 CT).

Tramitación Administrativa

Para que el procedimiento se inicie, es necesario que previo a la acción judicial se presente un reclamo ante la Inspección del Trabajo correspondiente, la que debe fijar día y hora para la realización del comparendo. Sin este reclamo no es posible iniciar la tramitación judicial. Sin perjuicio de lo antes señalado, se exceptúa de esta exigencia las acciones reguladas por el artículo 201 de este Código, las que se refieren al fuero maternal.

Presentado el reclamo, la Inspección del Trabajo debe citar a las partes a un Comparendo de Conciliación mediante carta certificada o mediante un funcionario de dicho organismo, quien actúa como ministro de fe.

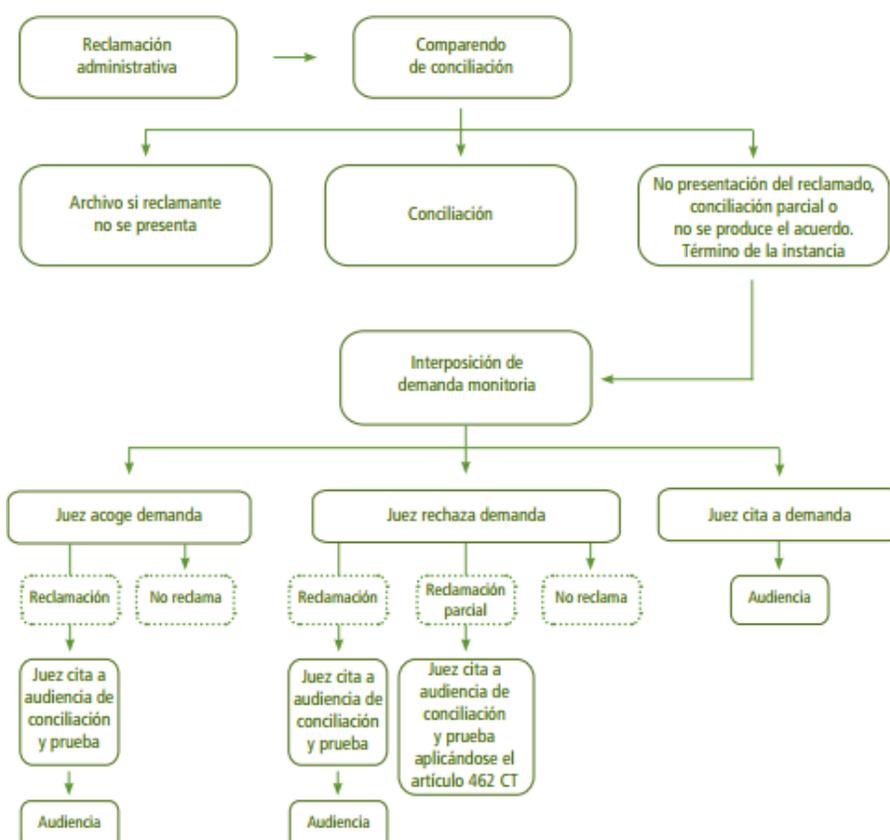
Si no se produce conciliación entre las partes o ésta es parcial, como asimismo en el caso que el reclamado no concurra al comparendo, el trabajador puede interponer demanda ante el juez del trabajo competente, a la cual debe acompañarse el acta levantada en el comparendo celebrado ante la Inspección del Trabajo y los documentos presentados en éste (art. 499 CT).

Tramitación Judicial

La demanda debe interponerse por escrito y contener las menciones que hemos hecho referencia respecto a la demanda en procedimiento de aplicación general.

Como se señaló anteriormente, a la demanda debe acompañarse a ella el acta levantada en el comparendo celebrado ante la Inspección del Trabajo y los documentos presentados en éste. Esta exigencia no rige en el caso de la acción emanada del artículo 201 del Código del Trabajo (art 499 CT).

DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO MONITORIO





CAPÍTULO IX. PROCESO PENAL

1. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES PENALES

Debemos distinguir entre la competencia territorial y la material de los tribunales penales.

1.1. Competencia territorial

Es competente para conocer de un delito el tribunal en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho que da motivo al juicio. El delito se considera cometido en el lugar donde se hubiere dado comienzo a su ejecución.

El juzgado de garantía del lugar de comisión del hecho investigado conocerá de las gestiones a que diere lugar el procedimiento previo al juicio oral.

Si existe conflicto de competencia entre jueces de varios juzgados de garantía, cada uno de ellos estará facultado para otorgar las autorizaciones o realizar las actuaciones urgentes, mientras no se dirima la competencia.

La competencia territorial de los tribunales es determinada por el Código Orgánico de Tribunales, respecto de los juzgados de garantía en su artículo 16 y, en el art. 21 tratándose de los tribunales de juicio oral en lo penal.

1.2. Competencia material

Se refiere a las materias de las que conoce cada tribunal, así podemos distinguir entre Juzgados de Garantía y Tribunal de Juicio Oral en lo Penal cuyas funciones y competencia ya fueron abordadas previamente.

2. PROCESO PENAL



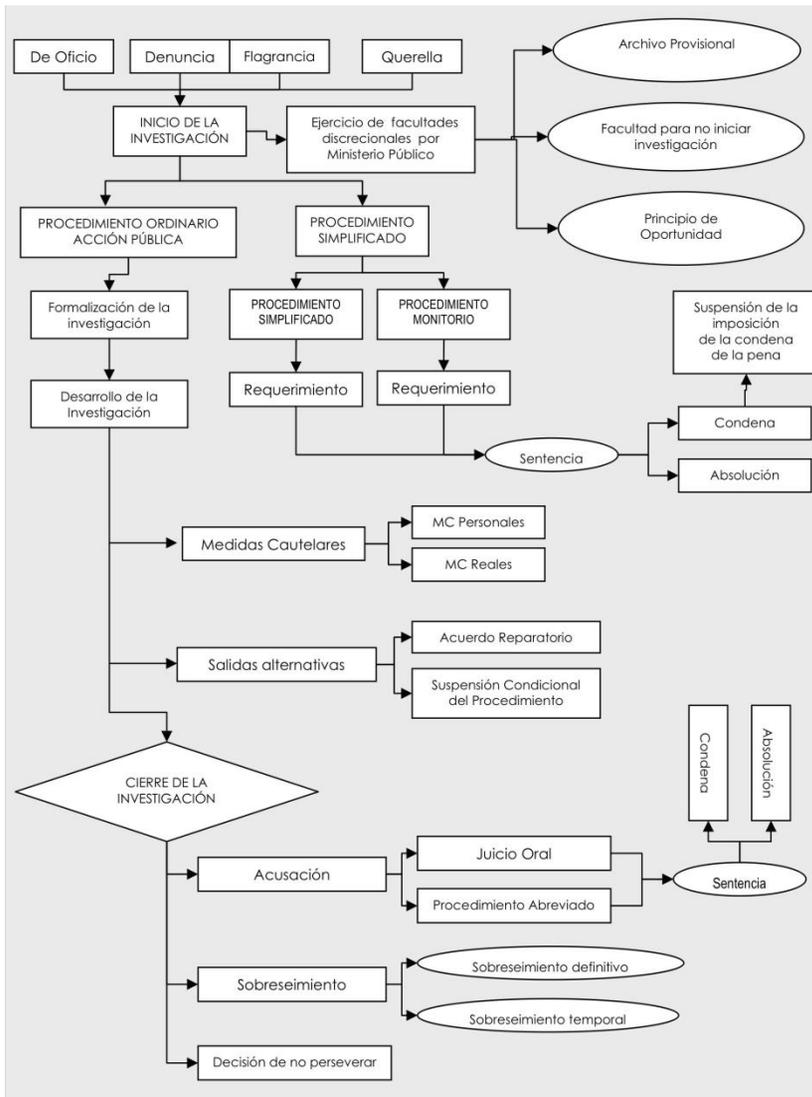
El proceso penal posee **tres fases** claramente diferenciadas:

1. La **Investigación**, en la que el Ministerio Público ordena la realización de las diligencias investigativas pertinentes tendientes al esclarecimiento de los hechos.

Participan en esta etapa:

- La víctima, que puede intervenir en tanto tal o como querellante presentando una querrela a través de un abogado.
 - El fiscal.
 - El imputado y su abogado defensor, y
 - El juez de garantía, que controla el respeto de las garantías de los intervinientes durante esta etapa y tiene varias funciones, como resolver acerca de la procedencia de medidas cautelares personales y reales y aceptar o rechazar otras decisiones tomadas por el fiscal.
2. La Etapa Intermedia o **preparatoria** de juicio oral, la cual comprende la acusación y la audiencia de preparación del juicio oral, en la cual se determina, entre otras cosas, la prueba que deberá rendirse en el juicio oral. Es competente para conocer de esta etapa el juez de garantía y concluye con la del auto de apertura de juicio oral.

3. El **Juicio Oral**, en el cual se rinde la prueba ofrecida y finalmente se determina la condena o absolución del imputado.



.2.1. Etapa de Investigación

2.1.1. Inicio y salidas anticipadas o discrecionales



La investigación de un hecho delictivo puede iniciarse por denuncia ante la policía, la fiscalía o un tribunal con competencia en lo penal, mediante querrela, que necesariamente debe presentarse ante el juez de garantía, o de oficio por el Ministerio Público. La regla general es que las investigaciones comiencen con la denuncia y que está se efectúe ante Carabineros de Chile.

Una vez que el fiscal toma conocimiento de los hechos denunciados, en tanto no se haya producido intervención del juez de garantía, puede tomar ciertas decisiones que suponen salidas anticipadas del proceso penal, de esta manera rápidamente se pone fin al proceso penal. Tales salidas son:

Archivo provisional

Tiene lugar cuando no existen antecedentes suficientes para seguir adelante con la investigación. Se trata de una decisión autónoma y provisional del fiscal, que puede ser revertida por la víctima mediante la presentación de una querrela o solicitando desarchivo acompañando nuevos antecedentes que permitan llevar adelante la investigación.

Tratándose de delitos que merecen pena aflictiva (mayor a tres años y un día) se requiere aprobación del fiscal regional para el archivo de la causa.

Facultad de no inicio de la investigación

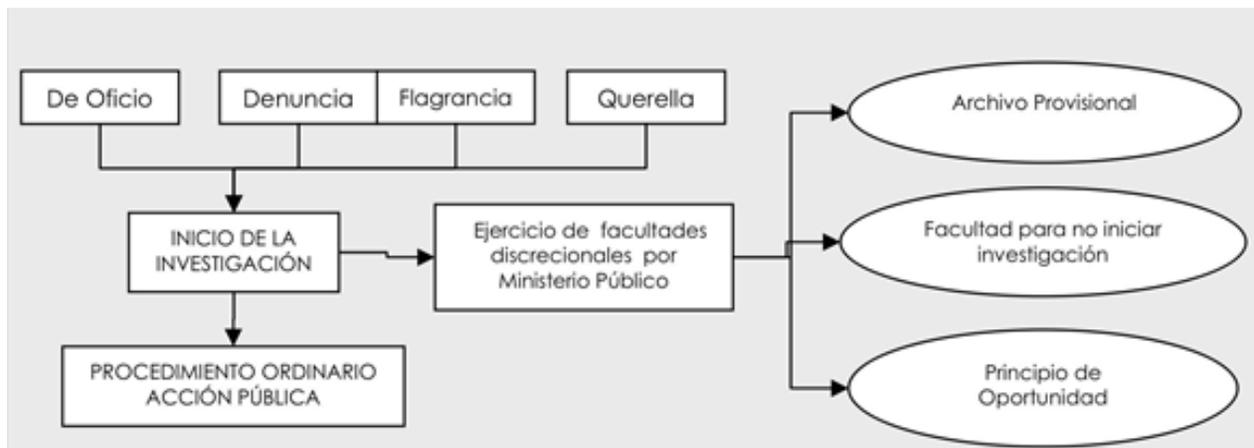
Se aplica cuando el hecho denunciado no es constitutivo de delito o se encuentra extinguida la responsabilidad penal del imputado. En este caso la decisión no es autónoma del fiscal porque requiere aprobación del juez de garantía y en caso de no aprobarse obliga al fiscal a proseguir con la investigación.

La víctima puede presentar querrela para revertir esta salida.

Principio de oportunidad

Corresponde a una decisión de la fiscalía que a diferencia de los casos anteriores puede ser aplicada incluso luego de la formalización de la investigación realizada ante el juez de garantía. Esta salida tiene lugar respecto de hechos delictivos que no son relevantes, tienen una penalidad baja y no comprometen gravemente el interés público. No puede ejercerse si la pena mínima asignada al delito es superior a 541 días, cuando se trata de un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, o bien se trata de un hecho que compromete gravemente el interés público. La decisión de ejercer esta facultad debe ser comunicada al juez de garantía, quien dentro de un plazo de 10 días, de oficio o a petición de parte, podrá dejarla sin efecto.

El inicio del proceso penal y la aplicación de estas salidas se puede graficar de la siguiente forma:



2.1.2. Características de la etapa investigativa

Si el fiscal no utiliza una salida anticipada, sigue con la investigación y se relacionará con los órganos auxiliares del sistema de justicia, principalmente las policías, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, pudiendo encargar las diligencias investigativas indistintamente a cualquiera de las dos.

La investigación que realiza la fiscalía debe ceñirse al principio de objetividad, en el sentido que debe investigar con igual celo tanto aquellas circunstancias que llevan a afirmar la responsabilidad penal de una persona como aquellas que lo exoneran de la misma.

Si existen antecedentes suficientes de la existencia de un delito y de la participación del imputado en él, el fiscal procederá a **formalizar la investigación**.

2.1.3. Formalización de la investigación

Consiste en la comunicación que efectúa el fiscal al imputado en presencia del juez de garantía de que actualmente lleva adelante una investigación en su contra por uno o más hechos



determinados. Desde este hito comienza a correr un plazo de investigación cuyo máximo legal es de dos años y se suspende la prescripción del delito.

2.1.4. Medidas Cautelares

Las medidas cautelares tienen por objeto asegurar el resultado del proceso penal, ya sea a través del aseguramiento de la persona del imputado en el caso de las cautelares personales o bien de los bienes que posee, en el caso de las cautelares reales, éstas últimas están asociadas en general a la demanda civil que la víctima pueda entablar contra el imputado en el proceso penal.

2.1.4.1 Medidas Cautelares Personales

Las medidas cautelares personales son la citación, detención, prisión preventiva y otras cautelares personales reguladas en el Código Procesal Penal.

A. CITACIÓN

Es el llamamiento que se hace al imputado para que concurra ante el tribunal. En general las faltas penales y los delitos no sancionados con penas privativas de libertad sólo dan lugar a esta medida cautelar.

En general las faltas penales sólo dan lugar a citación y no autorizan detención, salvo ciertas excepciones.

B. DETENCIÓN

La detención puede ser realizada en caso de delito flagrante por un funcionario policial o incluso por cualquier persona, en este último caso para el solo efecto de ser entregado a la autoridad policial más cercana, o bien puede ser realizada en cumplimiento de una orden de detención emanada de un juez.

En ambos casos el sujeto detenido deberá ser puesto a disposición del tribunal en un plazo no superior a 24 horas, quién controlará su detención. En esta misma audiencia de control se puede proceder a formalizar al imputado y pedir otras cautelares.

Plazos de la detención

Si se realizó en cumplimiento de una orden judicial se deberá conducir inmediatamente al juez que hubiere decretado la medida, o si se trata de una hora que no es de despacho, hasta la el momento de la primera audiencia judicial, que no podrá exceder de 24 horas desde el momento de la detención hasta que el detenido es puesto a disposición del tribunal.

Si se trata de una situación de flagrancia, es decir, se detiene a quien se encontrare cometiendo el delito o acabando de cometerlo u otras situaciones descritas en el artículo 130 del CPP, deberá informarse al Ministerio Público dentro de 12 horas de practicada la detención, y en todo caso dentro de las 24 horas ante el juez de garantía competente (igual cómputo de plazos que en el caso anterior).

El fiscal podrá solicitar la ampliación de la detención hasta por tres días, si en la primera audiencia no existieren los antecedentes necesarios para formalizar la investigación y solicitar medidas cautelares en contra del imputado; o cuando estimare que los antecedentes justifican esa medida.



El funcionario policial que practique la detención deberá informar al afectado el motivo de la detención, su derecho a ser asistido por un abogado, y a entrevistarse privadamente con él, a guardar silencio (no prestar declaración), y a tener a sus expensas, las comodidades compatibles con la seguridad del recinto donde fuere conducido (art. 135 CPP).

C. PRISIÓN PREVENTIVA

La solicitud de prisión preventiva puede fundarse en que la libertad del imputado es peligrosa para el éxito de la investigación, para la seguridad de la sociedad, la seguridad del ofendido o porque existe peligro de fuga.

Requisitos para decretarla (art. 140 CPP)

1. Que existan antecedentes que justifican la existencia del delito que se investiga.
2. Que existan antecedentes que permitieren presumir fundadamente que el imputado ha tenido participación en el delito como autor, cómplice o encubridor.
3. Que existen antecedentes calificados que permitieren al tribunal considerar que:
 - La prisión preventiva es indispensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación.
 - La libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido.

Recursos (art. 149 CPP)

La resolución que ordenare, mantuviere, negare lugar o revocare la prisión preventiva será apelable cuando hubiere sido dictada en una audiencia. No obstará a la procedencia del recurso, la circunstancia de haberse decretado, a petición de cualquiera de los intervinientes, alguna de las medidas cautelares señaladas en el artículo 155 CPP. En los demás casos no será susceptible de recurso alguno.

Ejecución de la medida cautelar

El tribunal que ordena la prisión preventiva, será competente para supervisar su ejecución y todas las solicitudes realizadas con ocasión de la ejecución de la medida cautelar. Deberá adoptar y disponer las medidas necesarias para la protección de la integridad física del imputado, en especial aquéllas destinadas a la separación de los jóvenes y no reincidentes respecto de la población penitenciaria de mayor peligrosidad.

Revisión

La prisión preventiva puede ser revisada en cualquier minuto a solicitud de parte, sin embargo deberá revisarse por el juez en audiencia transcurridos 6 meses desde que se hubiere ordenado la prisión preventiva o desde el último debate oral en que ella se hubiere decidido. También debe revisarse cuando la duración de la prisión preventiva hubiere alcanzado la mitad de la pena privativa de libertad que se pudiere esperar en el evento de dictarse sentencia condenatoria, o de la que se hubiere impuesto existiendo recursos pendientes.

Término de la prisión preventiva

Cuando no subsistieren los motivos que la hubieren justificado; cuando se dicte sentencia absolutoria y cuando decretare sobreseimiento definitivo o temporal, aunque existieran recursos pendientes en contra de dichas resoluciones; o cuando ha sido sustituida por otra medida cautelar de carácter personal.

D. OTRAS CAUTELARES PERSONALES

Están contempladas en el artículo 155 del CPP, ellas pueden tener por objeto garantizar el éxito de las diligencias de investigación o la seguridad de la sociedad, proteger al ofendido o asegurar la comparecencia del imputado a las actuaciones del procedimiento o ejecución de la sentencia, y pueden ser solicitadas después de formalizada la investigación a petición del fiscal, del querellante o la víctima.

Estas pueden consistir en:

- a. La privación de libertad, total o parcial, en su casa o en la que el propio imputado señalare, si aquélla se encontrare fuera de la ciudad asiento del tribunal;
- b. La sujeción a la vigilancia de una persona o institución determinada, las que informarán periódicamente al juez;
- c. La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designare;
- d. La prohibición de salir del país, de la localidad en la cual residiere o del ámbito territorial que fijare el tribunal;
- e. La prohibición de asistir a determinadas reuniones, recintos o espectáculos públicos, o de visitar determinados lugares;
- f. La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afectare el derecho a defensa;
- g. La prohibición de aproximarse al ofendido o su familia y, en su caso, la obligación de abandonar el hogar que compartiere con aquél;
- h. La prohibición de poseer, tener o portar armas de fuego, municiones o cartuchos;
- i. La obligación del imputado de abandonar un inmueble determinado, y
- j. Suspensión de la facultad de emitir licencias médicas (art.156 bis CPP).

El tribunal podrá imponer una o más de estas medidas según resultare adecuado al caso y ordenará las actuaciones y comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento. La procedencia, duración, impugnación y ejecución de estas medidas cautelares se regirán por las disposiciones aplicables a la prisión preventiva.

2.1.4.2. Medidas Cautelares Reales

Son aquellas que tienen por objeto asegurar los resultados de la demanda civil sobre los bienes del imputado, pueden consistir en:

- a. *El Secuestro de la cosa que es objeto de la demanda*, que es el depósito de la cosa mueble que se discute en el procedimiento judicial, en poder de un tercero, a fin de que la entregue a la parte vencedora;
- b. *El nombramiento de uno o más interventores (administradores o revisores de la administración de los bienes del imputado)*
- c. *La retención de bienes determinados*, que es el depósito de cosas muebles o dinero, en poder del mismo demandante; y
- d. *La prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes determinados.*



2.1.5. Salidas Alternativas

2.1.5.1. Suspensión Condicional del Procedimiento

2.1.5.1.1. Concepto

Esta salida alternativa supone un acuerdo entre imputado y fiscal y consiste en la suspensión del procedimiento penal, durante un lapso de tiempo entre uno y tres años, período en el cuál el imputado estará afecto al cumplimiento de ciertas condiciones y una vez cumplidas las mismas se extingue la responsabilidad penal, lo que requiere resolución judicial que lo decrete.

Sólo puede acogerse a esta salida el imputado que no tiene condenas previas por crimen o simple delito ni suspensiones condicionales vigentes al momento de verificarse los hechos materia del nuevo proceso y siempre y cuando la pena solicitada por el fiscal no supere los tres años. Tanto la suspensión condicional como las condiciones que debe cumplir el imputado y el plazo deben ser aprobados por el juez de garantía.

La suspensión condicional del procedimiento no extingue las acciones civiles de la víctima o terceros, sin embargo, si recibieron un pago como una condición impuesta, ese monto se imputará a la indemnización de perjuicios.

2.1.5.1.2. Condiciones por cumplir decretada la suspensión condicional del procedimiento

Según lo establece expresamente el artículo 238 del CPP, el juez de garantía dispondrá, que durante el período de suspensión, el imputado esté sujeto al cumplimiento de una o más de las siguientes condiciones:

- a. Residir o no residir en un lugar determinado;
- b. Abstenerse de frecuentar determinados lugares o personas;
- c. Someterse a un tratamiento médico, psicológico o de otra naturaleza;
- d. Tener o ejercer un trabajo, oficio, profesión o empleo, o asistir a algún programa educacional o de capacitación;
- e. Pagar una determinada suma, a título de indemnización de perjuicios, a favor de la víctima o garantizar debidamente su pago. Se podrá autorizar el pago en cuotas o dentro de un determinado plazo, el que en ningún caso podrá exceder el período de suspensión del procedimiento;
- f. Acudir periódicamente ante el ministerio público y, en su caso, acreditar el cumplimiento de las demás condiciones impuestas;
- g. Fijar domicilio e informar al ministerio público de cualquier cambio del mismo, y
- h. Otra condición que resulte adecuada en consideración con las circunstancias del caso concreto de que se tratare y fuere propuesta, fundadamente, por el Ministerio Público. Durante el período de suspensión y oyendo en una audiencia a todos los intervinientes que concurrieren a ella, el juez podrá modificar una o más de las condiciones impuestas.

2.1.5.2. Acuerdo Reparatorio

A diferencia de la salida anterior, en este caso el acuerdo es entre la víctima e imputado,



obligándose este último a efectuar alguna prestación o pago que permita reparar a la víctima a satisfacción de esta última.

Esta salida sólo procede respecto de delitos que afectan un bien jurídico disponible de carácter patrimonial, si consistieren en lesiones menos graves o delitos culposos.

Las bases del acuerdo reparatorio deben ser aprobadas por el juez de garantía, quién verificará si las partes prestaron su consentimiento en forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos.

Cumplidas las obligaciones contraídas en el acuerdo o garantizadas debidamente se extingue la responsabilidad penal, lo que requiere resolución judicial que lo decrete. La Víctima puede exigir el cumplimiento del acuerdo reparatorio ante el mismo Juez de Garantía que aprobó el acuerdo.

2.1.6. Cierre de la Investigación



El fiscal puede cerrar la investigación en cualquier minuto mientras esté vigente el plazo de investigación o deberá hacerlo una vez vencido el mismo.

Una vez cerrada la investigación, el fiscal deberá dentro de los diez días siguientes adoptar cualquiera de las siguientes decisiones:

- a) Solicitar sobreseimiento definitivo o temporal de la causa.
- b) Comunicar la facultad de no perseverar en el procedimiento por que no tiene antecedentes suficientes para acusar.
- c) Acusar, en cuyo caso el proceso pasa a la etapa intermedia.

2.1.7. Sobreseimiento Definitivo y Temporal

En cualquier momento durante el proceso penal se puede solicitar el sobreseimiento definitivo o temporal de la causa. También se contempla esta institución como sanción a ciertas acciones u omisiones del Ministerio Público.

Ambos tipos de sobreseimiento pueden ser totales o parciales según recaigan sobre todos los imputados y los delitos por los que son investigados o sólo algunos imputados o delitos.

En el caso del **sobreseimiento definitivo** se pone término al proceso penal y las causales por las que puede decretarse son:

- a. El hecho investigado no es constitutivo de delito.
- b. Aparece claramente establecida la inocencia del imputado.
- c. El Imputado está exento de responsabilidad penal
- d. La responsabilidad penal está extinguida.
- e. Sobreviene un hecho que extingue la responsabilidad penal como por ejemplo la muerte del imputado.
- f. El hecho de que se trate ya fue materia de un proceso penal en que recayó sentencia firme.

El sobreseimiento definitivo solo será impugnado a través de un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones respectiva.

El **sobreseimiento temporal** no pone fin al proceso sino que sólo lo suspende y tiene lugar cuando concurren las siguientes causales:



- a. Se requiere el juzgamiento previo de una cuestión civil.
- b. El imputado no comparece y fue declarado rebelde.
- c. Después de cometido el delito, el imputado cayó en enajenación mental.

Una vez que cesa la causal, a petición de alguno de los intervinientes, el juez ordenará la reapertura del procedimiento.

2.2. Etapa Intermedia o de Preparación del Juicio Oral



Se inicia esta etapa cuando el fiscal presenta acusación.

La acusación consiste en el requerimiento de apertura del juicio, fundado y formal, formulado por el Fiscal que precisa, desde su posición, el objeto del juicio, lo califica jurídicamente y esgrime los medios de prueba pertinentes.

La acusación se notifica a todos los intervinientes y el tribunal fija un día para la realización de la audiencia de preparación de juicio oral.

La audiencia preparatoria fija el contenido del juicio oral, en ella se discutirá todo lo relativo a la prueba que se rendirá en el juicio oral y se resolverán una serie de incidencias previas que son necesarias para el posterior desarrollo del juicio, como por ejemplo, Corrección de vicios formales de los escritos, solicitudes sobre cautelare y observaciones sobre la prueba.

Terminada esta audiencia preparatoria el juez de garantía determinará la prueba que será conocida en el juicio luego de resolver las observaciones y alegaciones de la partes. De esta manera quedará fijado el objeto del juicio y la prueba que se rendirá en él, lo que se materializa en la resolución emitida por el tribunal que se denomina **auto de apertura de juicio oral**.

2.3. Etapa de Juicio Oral



El juicio oral constituye la etapa final del proceso penal a la cual confluye y en la que encuentran manifestación todos los principios y garantías del proceso penal.

5.2.3.1. Principios Básicos del Juicio Oral

- Inmediación
- Continuidad y concentración
- Contradictoriedad
- Oralidad
- Defensa necesaria
- Publicidad
- Libre valoración de la prueba (sana crítica), como contrapartida se señala el deber de fundamentación de la decisión judicial (sentencia definitiva).
- Identidad física del juzgador



5.2.3.2. Actuaciones Previas

El juez presidente de la sala del TOP una vez recibida la causa procederá a decretar la fecha para la celebración del juicio, la cual se realizará no antes de quince ni después de sesenta días desde la notificación del auto de apertura de juicio oral.

Finalmente citará a todos los que debieran concurrir a la audiencia. El imputado debe ser citado con a lo menos siete días de anticipación.

2.3.3. Desarrollo del Juicio Oral

El tribunal deberá constituirse el día y hora fijados, con asistencia del fiscal, del acusado, de su defensor y de los demás intervinientes. Además, verificará la disponibilidad de los testigos, peritos intérpretes y demás personas que hubieren sido citados a la audiencia y declarará iniciado el juicio.

Dirigirá el juicio el juez presidente, quién deberá resolver además todas las incidencias que se promuevan durante la audiencia.

El juicio comienza con la lectura de las acusaciones, demandas civiles si las hubiere y las convenciones probatorias aprobadas por las partes.

Enseguida tienen lugar los alegatos de apertura de las partes en que darán a conocer su teoría del caso y efectuarán una síntesis de las materias sobre las que versará el juicio. A continuación se recibe la declaración del imputado si decide a declarar, en cuyo caso puede ser interrogado por las partes y se recibe la prueba.

El orden de recepción de las pruebas es primero el fiscal, luego querellante y finalmente defensa, sin embargo el orden en que cada uno decide rendir la suya es completamente discrecional.

La prueba es libre y puede consistir en objetos, documentos, testigos, peritos, filmaciones, fotografías o cualquier otro medio de prueba.

Concluida la recepción de las pruebas, el presidente del tribunal otorgará la palabra al fiscal, al acusador particular y al defensor, para que efectúen sus alegatos de clausura. Luego otorgará al fiscal y al defensor la posibilidad de replicar, debiendo referirse sólo a las conclusiones formuladas por las demás partes. Por último, se otorgará al acusado la palabra para que manifieste lo que estimare conveniente y luego se declarará cerrado el debate.

Inmediatamente después de clausurado el debate, sin suspender la audiencia, los jueces que hubieren asistido a ella, pasarán a deliberar en privado. El tribunal formará su convicción sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral, la que valorará libremente pero sin contradecir las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia ni los conocimientos científicamente afianzados.

Una vez terminada la deliberación señalada los jueces deben volver a la sala y comunicar la decisión adoptada de absolución o condena, inmediatamente se abrirá debate acerca de circunstancias relevantes para la determinación de la pena y la posibilidad de penas sustitutivas, pudiendo rendirse prueba para estos efectos.

Nadie puede ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgare adquiere, más allá de toda duda razonable, la convicción de que realmente hubiere cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él hubiere correspondido al acusado una participación culpable penada por la ley.

La sentencia condenatoria no puede exceder el contenido de la acusación, y ésta a su vez, no puede exceder el contenido de la formalización. A esto se le conoce como Principio de Congruencia.



2.4. Recursos Procesales

2.4.1. Recurso de Reposición

Se interpone frente al mismo tribunal que dicta la resolución y se pueden reponer sentencias interlocutorias, autos y decretos, dictados fuera de audiencia, dentro de tercero día y debe ser fundado.

La reposición de las resoluciones pronunciadas durante audiencias orales deberá promoverse tan pronto se dictaren y sólo serán admisibles cuando no hubieren sido precedidas de debate. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato, y de la misma manera se pronunciará el fallo.

2.4.2. Recurso de Apelación

Son inapelables las resoluciones dictadas por un tribunal de juicio oral en lo penal, excepto, la resolución que resuelve acerca de la medida cautelar de prisión preventiva.

Son apelables las resoluciones dictadas por el juez de garantía cuando pusieren término al procedimiento, hicieren imposible su prosecución o la suspendieren por más de treinta días, o bien, cuando la ley lo señalare expresamente.

El recurso de apelación deberá entablarse ante el mismo juez que hubiere dictado la resolución y éste lo concederá o lo denegará, en un plazo de 5 días desde la notificación de la resolución.

El recurso se debe interponer por escrito, debe ser fundado y contener peticiones concretas. La apelación se concede en el solo efecto devolutivo, a menos que la ley señale expresamente lo contrario.

2.4.3 Recurso de Hecho

Este recurso está asociado al de apelación.

Denegado el recurso de apelación, concedido siendo improcedente u otorgado con efectos no ajustados a derecho, los intervinientes podrán recurrir de hecho, dentro de tercero día, ante el tribunal de alzada, con el fin de que resuelva si hubiere lugar o no al recurso y cuáles debieren ser sus efectos.

2.4.4. Recurso de Nulidad

Este recurso tiene como objeto invalidar el juicio oral y la sentencia definitiva o solamente la sentencia definitiva, por las causales expresamente señaladas en la ley.

Son impugnables a través de este recurso la sentencia definitiva del juicio oral, la sentencia definitiva dictada en el procedimiento simplificado, la sentencia definitiva dictada en el procedimiento por delitos de acción penal privada y el juicio oral.

El recurso de nulidad debe interponerse en el plazo de diez días desde la notificación de la resolución y puede perseguir la nulidad del juicio oral completo o sólo de la sentencia.

Causales

Se puede interponer el recurso por las siguientes causales (Art. 373 CPP):



a) Cuando, en la cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento de la sentencia, se hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías asegurados por la Constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

b) Cuando, en el pronunciamiento de la sentencia, se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Son competentes para conocer este recurso la Corte Suprema, cuando la causal es la de la letra a) del artículo 373 y la Corte de Apelaciones, cuando la causal fuera la de la letra b) de la misma disposición o algún motivo absoluto de nulidad, como por ejemplo, cuando la sentencia hubiere sido pronunciada por un tribunal incompetente, o no integrado por los jueces designados por la ley; cuando hubiere sido pronunciada por un juez de garantía o con la concurrencia de un juez de tribunal de juicio oral en lo penal legalmente implicado, o cuya recusación estuviere pendiente o hubiere sido declarada por tribunal competente; cuando la audiencia del juicio oral hubiere tenido lugar en ausencia de alguna de las personas cuya presencia continuada exigen; cuando al defensor se le hubiere impedido ejercer las facultades que la ley le otorga; cuando en el juicio oral hubieren sido violadas las disposiciones establecidas por la ley sobre publicidad y continuidad del juicio; entre otros motivos que dan lugar para recurrir de nulidad.

CAPÍTULO X. COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTOS EN CORTE DE APELACIONES

1. Generalidades

Las Cortes de Apelaciones están reguladas por el Título V del COT, en sus artículos 54 al 92. Son tribunales ordinarios, colegiados, letrados, de derecho y permanentes, que ejercen sus funciones dentro de un territorio que es normalmente una Región o parte de una Región y son depositarias de la casi totalidad de la competencia de segunda instancia, conociendo además en única instancia o primera instancia de los demás asuntos que las leyes les encomienden.

Están compuestas por un número variable de jueces llamados Ministros, uno de los cuales es su Presidente y hay 17 Cortes de Apelaciones en todo el país. Son superiores jerárquicos de los Jueces de Garantía, de los Tribunales de juicio oral en lo penal y de los Jueces de Letras y dependen de la Corte Suprema.

2. Principales funciones

Entre las principales funciones de las Cortes de Apelaciones se mencionan:

- a) Ser tribunal de única, primera o segunda instancia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63 del COT y demás casos que determine la ley. Por consiguiente también es un tribunal de apelación.
- b) Las Cortes de Apelaciones son los superiores jerárquicos de los tribunales inferiores de justicia por lo cual deben velar por su correcto funcionamiento.
- c) Efectuar, por medio de un Ministro Visitador, la visita judicial, ordinaria o extraordinaria, con el fin de fiscalizar la conducta funcionaria de los miembros del Poder Judicial bajo su supervisión.
- d) En las comunas asiento de Corte de Apelaciones, efectuar, por medio de un ministro, designado con turno anual, la visita de las cárceles o establecimientos de detención o presidio.
- e) Ser tribunal de casación en la forma, vale decir velar por la correcta aplicación del debido proceso y procedimientos legales que la ley establece para los tribunales inferiores de justicia de su territorio.

- f) Conocer de los recursos de protección y amparo, según lo dispuesto en la Constitución Política de la República de Chile.
- g) Proponer ternas para la designación, por el Presidente de la República, de los jueces de letras de su jurisdicción.
- h) Llamar a concurso público de antecedentes para la formación de ternas de postulantes y proponer la terna para el nombramiento, de los Fiscales Regionales del Ministerio Público, de conformidad al artículo 86 de la Constitución Política de la República.
- i) Efectuar la propuesta para la designación, por el Presidente de la República, de los fiscales judiciales, defensores públicos, relatores y demás auxiliares de la Administración de Justicia.
- j) Integrar, por medio de los miembros correspondientes, los Consejos de Coordinación Zonal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, para el enlace y colaboración de los recursos humanos, financieros, logísticos, tecnológicos y materiales de la jurisdicción de la respectiva Corte de Apelaciones.
- k) Registrar correcta y oportunamente sus causas, a objeto de contar con estadísticas precisas y actualizadas sobre las reales cargas de trabajo de cada Corte de Apelaciones, lo que se llevará a cabo por medio de los Secretarios de las Cortes de Apelaciones, quienes deben cumplir dicha función respecto de las causas que se registren en el sistema de estos tribunales de alzada. Asimismo, uno de los Ministros de la Corte de Apelaciones coordinará las labores de registro de la información correspondiente a los tribunales de la jurisdicción en el Sistema General de Estadísticas judicial, incluyendo el inventario de causas en tramitación antes señalado. La información aportada y sus errores se considerarán en el proceso calificadorio de los funcionarios y magistrados del Poder Judicial y será fiscalizada y revisada por el Ministro Visitador de la Corte Suprema.

3. Organización y Composición

Cada Corte de Apelaciones posee Ministros, Relatores, de entre los cuales habrá un Relator de Pleno, Fiscales, un Comité de Ministros, un Administrador y Jefe(s) o Encargado(s) de Unidad de Corte de Apelaciones, Secretarios y otros funcionarios administrativos, tanto dependientes de la propia Corte de Apelaciones, como dependientes de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

- El tribunal es dirigido por un Presidente, cargo que es ejercido por los Ministros de la Corte, turnándose cada un año y atendiendo a su antigüedad.
- Los Relatores son los funcionarios encargados de exponer de manera detallada, a los miembros de la Corte, el asunto que está entregado a su conocimiento.
- Los Fiscales judiciales son funcionarios que ejercen el Ministerio Público judicial ante el tribunal.
- El Comité de Ministros es el encargado de evaluar y concordar el Plan Plurianual de la Jurisdicción que posteriormente debe ser aprobado por el Tribunal Pleno, así como también de coadyuvar al gobierno judicial de la jurisdicción conforme a los lineamientos que determine el Pleno, en concordancia con los objetivos estratégicos del Poder Judicial.
- Los Administradores de Corte de Apelaciones son los encargados de elaborar e implementar y tutelar operativamente el Plan Plurianual de la Jurisdicción, el que será concordado y evaluado por el Comité de Ministros y que posteriormente debe ser aprobado por el Tribunal Pleno. Le corresponderá asimismo, elaborar el Plan de Trabajo Anual de la Corte, estableciendo planes y prácticas de apoyo al trabajo jurisdiccional que optimicen los recursos humanos, tecnológicos y materiales de la Corte de Apelaciones respectiva,
- El Relator de Pleno, tendrá bajo su radicación las áreas estratégicas de Asuntos Administrativos y de Pleno, donde se comprenden todas las gestiones vinculadas a

asuntos administrativos que por mandato legal o económico debe resolver el Pleno de Ministros.

- Los Jefes de Unidad encabezan las Unidades Administrativas, que conjunta o separadamente, dependiendo el tamaño de la Corte, deberán concretar las siguientes áreas de la Planificación Estratégica del Poder Judicial: a) Área de Causas; b) Área de Salas; c) Área de Control de Gestión; d) Área de Servicios; e) Área de Atención de Público; f) Área de Asuntos Administrativos y de Pleno; g) Área de Coordinaciones de tribunales de primera instancia; h) Área de Presidencia.
- Los Encargados de Unidad sustituirán a los Jefes de Unidad en las Cortes de Apelaciones con menor cantidad de Salas y menor carga de trabajo, encabezando las áreas estratégicas de gestión indicadas precedentemente.
- Los Secretarios de Corte de Apelaciones, son Ministros de Fe Pública encargados de autorizar, salvo las excepciones legales, todas las providencias, despachos y actos emanados de la autoridad, así como de certificar ciertas actuaciones y de custodiar todos los documentos y papeles que sean presentados en la Corte en que deben prestar sus servicios.
- Los demás funcionarios administrativos de las Cortes de Apelaciones ejercen labores de apoyo de la función jurisdiccional, de orientación a los usuarios y de asistencia en el cumplimiento de las funciones propias de la Corte.

4. Características de las Cortes de Apelaciones

Las Cortes de Apelaciones presentan las siguientes características:

- a) Son tribunales ordinarios.
- b) Son tribunales colegiados, compuestos por un número variable de miembros llamados Ministros.
- c) Son tribunales letrados y de derecho.
- d) Sus miembros permanecen en el cargo mientras dure su buen comportamiento.
- e) Ejercen sus funciones dentro de un determinado territorio jurisdiccional, que generalmente es una Región o parte de una Región.
- g) Son tribunales de competencia común, pues conocen indistintamente de causas Civiles, Laborales, de Menores, Policía Local y Criminales.
- h) Sus miembros están afectos a responsabilidad criminal, civil disciplinaria y política.

5. El funcionamiento ordinario y extraordinario de las Cortes de Apelaciones

Se distingue entre el funcionamiento en Pleno y en Sala; y además el funcionamiento ordinario y extraordinario, generándose éste último según si existe o no retardo (se entiende que hay retardo cuando dividido el total de las causas en estado de tabla y de las apelaciones que deban conocerse en cuenta, inclusive las criminales, por el número de Salas, el cociente es superior a ciento, conforme a la regla del art. 62 COT).

En funcionamiento ordinario, las Cortes trabajan en Pleno. Aun cuando esta regla se enuncia como general, ella en la práctica constituye la excepción, dado que en el funcionamiento ordinario solo funcionan en Pleno las Cortes de Apelaciones de Iquique, Copiapó, Chillán, Puerto Montt, Coihayque y Punta Arenas. Las demás funcionan en salas compuestas por tres Ministros, a excepción de la primera, que puede funcionar con cuatro si la integra el Presidente, sorteados anualmente.

En el funcionamiento extraordinario, las Cortes de Apelaciones sesionan dividiéndose en Salas de tres miembros cada una. Para los efectos de completar el número de tres miembros, las Salas se integran con sus Fiscales Judiciales y con los abogados integrantes (art. 62). Las



salas en las Cortes de Apelaciones no pueden funcionar con mayoría de abogados integrantes.

El quórum necesario para el funcionamiento del Pleno es, como lo expresa el art. 67, "la mayoría absoluta de los miembros que se componga la Corte". En cambio, con arreglo al mismo precepto legal, "las Salas no podrán funcionar sin la concurrencia de tres jueces como mínimo".

6. Competencia de las Salas de la Corte de Apelaciones

a) Competencia en única instancia: Recurso de casación en la forma que se interponga en contra de sentencias pronunciadas por jueces de letras de su territorio o uno de sus ministros o en contra de las sentencias definitivas de primera instancia dictadas por jueces árbitros. De los recursos de nulidad interpuestos en contra de sentencias definitivas dictadas por un tribunal con competencia en lo criminal; De los recursos de queja que se deduzcan en contra de jueces de letras, jueces de Policía local, jueces árbitros; extradiciones activas, de las recusaciones contra un juez de letras de su jurisdicción, entre otras.

b) Competencia en primera instancia: De los recursos de amparo y protección; De los recursos de queja contra los jueces de su jurisdicción; De los recursos de protección; De los reclamos contra la resolución que rechaza el reclamo por ilegalidad de las resoluciones u omisiones de la municipalidad, entre otras.

c) Competencia en primera instancia: De las causas civiles, de familia y del trabajo y de los actos no contenciosos de que hayan conocido en primera instancia los jueces de letras de su territorio jurisdiccional o uno de sus ministros; De las apelaciones interpuestas en contra de las resoluciones dictadas por un juez de garantía; De las apelaciones o reclamaciones en contra de las resoluciones que se indican en el Código del Trabajo; Del Recurso de Nulidad en materia laboral; Del Recurso de Nulidad en materia penal; De los casos en que la Ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, declara procedente la apelación.

d) Consulta: De las sentencias civiles dictadas por los jueces de letras; De toda sentencia definitiva desfavorable al interés fiscal, pronunciada en primera instancia en juicio de hacienda de la cual no se haya apelado; De la sentencia que constituye una concesión minera, cuando se ha incurrido en su tramitación, en una causal de caducidad.

7. De la tramitación de los recursos

En cuanto a la tramitación procesal de las materias sometidas a su conocimiento, es menester distinguir si el asunto sometido a la decisión de la Corte requiere o no de tramitación antes de ser resuelto.

a) Si el asunto requiere de tramitación antes de ser resuelto, dicha tramitación corresponderá a la llamada "Sala Tramitadora", que es la Primera Sala cuando la Corte se componga de más de una Sala (art. 70 inc. 1° COT), en cuenta que debe ser dada por el secretario. Las resoluciones que se dicten para dar curso progresivo a los autos, sin decidir ni prejuzgar ninguna cuestión debatida entre partes, el inciso 2° del art. 70 COT autoriza que ellas sean dictadas por un sólo Ministro.

b) Si el asunto no requiere de tramitación antes de ser resuelto o si la tramitación respectiva está cumplida, la Corte debe entrar a resolverlo en Sala o en Pleno, según corresponda.

Las Cortes deben resolver los asuntos sometidos a su conocimiento "en cuenta" o "previa vista de la causa, según corresponda.



La resolución "**en cuenta**" significa que procederá a fallarlos con la cuenta que les dé el Secretario o Relator, sin que exista fijación de la causa en tabla y alegato de abogados, o en general, un procedimiento especial para el conocimiento del asunto.

La resolución "**previa vista de la causa**" significa que procederá a fallarlos luego que se cumplan ciertos actos que en su conjunto reciben la denominación de "vista de la causa", como la Relación que debe hacer el relator y los alegatos que pueden hacer los abogados, después de lo cual la Corte debe emitir su sentencia.

c) Suspensión de la vista de la causa, es decir, es posible que la causa no se vea el día fijado para ese efecto, como por ejemplo, que lo impida el examen de las causas colocadas en lugar preferente, o la continuación de la vista de otro pleito pendiente del día anterior; por falta de miembros del tribunal en número suficiente para pronunciar sentencia; o por solicitarlo alguna de las partes el día anterior antes del mediodía.

d) Los acuerdos de las Cortes de Apelaciones, en el caso de un tribunal colegiado, el camino para arribar a la formulación de la sentencia que resuelve el conflicto se dificulta notoriamente. A fin de precaver los inconvenientes que pueden suscitarse ante un tribunal colegiado respecto del estudio de los antecedentes del proceso y dar una solución a las diversas discrepancias que pudieran plantearse en la determinación de las premisas previas que servirán de base para el pronunciamiento de la sentencia por esta clase de tribunales ha establecido las normas sobre los acuerdos.

Los acuerdos son secretos y se adoptan por mayoría absoluta de votos, excepcionalmente la ley establece otros quórum. En síntesis, debe procederse de la siguiente manera:

- Primeramente, se resuelven las cuestiones de hecho.
- A continuación, se resuelven las cuestiones de derecho.
- Las resoluciones parciales se toman como base para dictar la resolución final.
- Se vota en orden inverso a la antigüedad. El último voto será siempre el del Presidente.
- Hay acuerdo cuando existe mayoría legal sobre la parte resolutive del fallo y sobre un fundamento a lo menos en apoyo de cada uno de los puntos que dicho fallo comprenda, esto es, cuando hay mayoría legal sobre la parte dispositiva de la sentencia y sobre alguna de las consideraciones de hecho y/o de derecho que sirven de fundamento a la parte resolutive de la sentencia.

8. Integración de las Cortes de Apelaciones

Ellas se integran con:

- 1.- Con los miembros no inhabilitados del mismo tribunal.
- 2.- Con sus fiscales.
- 3.- Con los abogados que se designen anualmente con este objeto (abogados integrantes).

En las Cortes de Apelaciones, las salas no se pueden integrar con mayoría de abogados integrantes a partir de la modificación introducida en ese sentido al art. 215 del COT por la Ley 19.810.

4.- Si en una sala de la Corte de Apelaciones no queda ningún miembro hábil se deferirá el conocimiento del negocio a otra de las salas de que se componga el tribunal y si la inhabilidad o impedimento afecta a la totalidad de los miembros, pasará el asunto a la Corte de Apelaciones que deba subrogar según las reglas establecidas en el art. 216 del COT, y, en los casos en que no puedan aplicarse esas reglas, conocerá la Corte de Apelaciones cuya sede esté más próxima a la de la que debe ser subrogada.

De la integración debe dejarse testimonio tanto en un libro de integraciones que llevará el Secretario de la Corte, como también, en el respectivo proceso.



Antes de comenzar la vista de la causa, el relator o el secretario, deberá poner en conocimiento de las partes el nombre de los abogados integrantes.

Los abogados o procuradores de las partes podrán, por medio del relator de la causa, recusar sin expresión de causa a uno de los abogados de la Corte, no pudiendo ejercerse este derecho sino respecto de dos miembros aunque sea mayor el número de partes litigantes. Esta recusación deberá hacerse antes de comenzar la audiencia en que va a verse la causa, cuando se trate de abogados que hayan figurado en el acto de instalación del respectivo tribunal o en el momento de la notificación a que se refiere el art. 166 CPC en los demás casos.

Para hacer valer la recusación se debe pagar en estampillas el impuesto que contempla el inciso final del art. 198 COT.

En caso de recusación de un abogado integrante, el Presidente de la respectiva Corte procederá de inmediato a formar sala llamando a otro miembro que puede integrar no inhabilitado salvo que ello no fuere posible por causa justificada. La regla general es que se suspenda la vista.

En materia penal, existe una regla especial para evitar que se produzca esa situación y se establece la integración en forma obligatoria, proveyendo el presidente su reemplazo inmediato.

CAPÍTULO XI. CORTE SUPREMA

1. Composición

Está compuesta por 21 miembros, cada uno de los cuales recibe el nombre de Ministro, uno de los cuales es su Presidente, elegido por los propios ministros, y dura dos años en sus funciones, no pudiendo ser reelegido.

La Corte Suprema de Justicia funciona dividida en *salas especializadas* o en *pleno*, según lo determine la ley para las materias que le corresponda conocer.

Los demás miembros se llamarán Ministros y gozarán de precedencia los unos respecto de los otros por el orden de su antigüedad, además tendrá un fiscal judicial, un secretario, un prosecretario y ocho relatores.

La Corte Suprema debe tener su sede en la capital de la República.

El primer día hábil de marzo la Corte Suprema iniciará sus funciones en audiencia pública, a la cual deberán concurrir su fiscal judicial y los miembros y fiscales judiciales de la Corte de Apelaciones de Santiago, y en la cual se realizará la cuenta pública anual por parte del Presidente de la Corte Suprema.

2. Competencia y funcionamiento

2.1. Reglas generales

Es aplicable a la Corte Suprema lo dispuesto para los acuerdos de las Cortes de Apelaciones ya señalado en el capítulo respectivo.



Dentro de las horas ordinarias de su funcionamiento y antes de la vista de las causas, el tribunal se ocupará con preferencia, según el orden que fije el Presidente, en los asuntos que deban resolverse en cuenta, en el estudio de proyectos de sentencias, y en el acuerdo de las mismas.

La Corte Suprema otorga además el título de abogado a los licenciados en ciencias jurídicas y sociales o licenciados en derecho de todas las facultades de derecho del país. Para ello, dispone de una oficina de Títulos que es la unidad encargada de realizar todos aquellos trámites administrativos tendientes a dar curso a la solicitud de titulación, la que debe, además, proporcionar toda la información relevante acerca del procedimiento de titulación y del estado en que este se encuentra.

Asimismo, es la encargada de notificar a los postulantes, en cada caso, las resoluciones adoptadas por el Tribunal Pleno o el Presidente de la Corte Suprema y los informes evacuados por el Comité de Comunicaciones y por el Fiscal Judicial de la Corte Suprema. A este efecto se utiliza el portal web de seguimiento de causas de la Corte Suprema, que se encuentra habilitado para dicho fin.

Las actuaciones que corresponda realizar ante la Corte Suprema, en el marco de las reformas procesales en lo penal, familia, laboral y previsional, se registrarán en formato computacional y de audio, en su caso, incorporadas a una carpeta informática individual por recurso que sólo se integrará con el registro, en dicho soporte, de los antecedentes que den cuenta de las actuaciones, presentaciones de las partes y resoluciones adoptadas por el tribunal en el curso del procedimiento y que de acuerdo a la ley corresponda registrar.

El ingreso de causas se efectuará en la Secretaría que corresponda y, en su caso, en la Oficina de Ingreso y Distribución de la Corte, mediante interconexión electrónica con los diversos tribunales haciendo uso del Sistema Informático conforme a las materias de que se trate. Al ingresar el recurso en Secretaría o en la Oficina de Ingreso y Distribución, se le asignará en la Corte un Rol Interno del Tribunal (RIT).

Los Relatores, dentro de las funciones que por disposición de la ley les corresponden, deberán dar cuenta al tribunal sobre la admisibilidad de los recursos y servir de ministros de fe en el desarrollo y conclusión de las audiencias.

Del mismo modo, y sin perjuicio de las obligaciones del Secretario, será de responsabilidad de los Relatores o de los digitadores de cada Sala, el ingreso de los datos de las causas en cada audiencia, regulación del sistema de audio y de la digitación de las resoluciones pronunciadas por la Sala.

2.2. Pleno Corte Suprema

El artículo 96 del COT establece la competencia de la Corte Suprema en su funcionamiento en pleno. Entre las funciones más importantes se encuentran:

- 1° Conocer de las apelaciones que se deduzcan en las causas por desafuero de personas como diputados o senadores.
- 2° Conocer en segunda instancia, de los juicios de amovilidad fallados en primera por las Cortes de Apelaciones o por el Presidente de la Corte Suprema, seguidos contra jueces de letras o Ministros de Cortes de Apelaciones, respectivamente;
- 3° Ejercer facultades administrativas, disciplinarias y económicas,
- 4° Informar al Presidente de la República, cuando se solicite su dictamen, sobre cualquier punto relativo a la administración de justicia y sobre el cual no exista cuestión de que deba conocer.



Las reuniones ordinarias del Tribunal Pleno se llevarán a cabo los días viernes de cada semana, entre las 8:30 y las 13:30 horas, y las extraordinarias en el día y horario señalado en la convocatoria. En ambos casos, se iniciarán tan pronto se reúna el quórum necesario para adoptar acuerdos.

En cada audiencia se considerará un tiempo adecuado para recibir la cuenta del Presidente y otro para que los Ministros puedan plantear asuntos de interés institucional.

En la discusión propiamente tal de las materias incluidas en las minutas, cada Ministro podrá intervenir hasta en dos oportunidades respecto de cada asunto y los demás deberán evitar interrumpir a quien hace uso de la palabra, mantener conversaciones o formular comentarios, sin haber solicitado participar en el debate.

El Presidente adoptará las medidas conducentes a la estricta observancia de estas reglas y podrá poner término a la intervención de un Ministro, si ella se extiende en demasía y en desmedro de la participación del resto.

Una vez agotado el debate y en caso que deba procederse a una votación, el Presidente fijará los puntos sobre los cuales ella deba recaer.

Durante la votación no podrán plantearse nuevas cuestiones relativas a la materia debatida, aunque el Ministro no haya intervenido en su discusión.

2.3. Presidente de la Corte Suprema

Las atribuciones del Presidente de la Corte se encuentran reguladas en el artículo 105 del COT, y se refieren a formar la tabla para cada sala, atender al despacho de la cuenta diaria y dictar los decretos o providencias de mera sustanciación de los asuntos de que corresponda conocer al tribunal, o a cualquiera de sus salas; vigilar la formación del rol general de las causas que ingresen al tribunal y de los roles especiales para las causas que califique de despacho urgente u ordinario; adoptar las medidas convenientes para que las causas de que conocen la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones se fallen dentro del plazo que establece la ley, oír y resolver las reclamaciones que se interpongan contra los subalternos de la Corte Suprema.

En caso de licencia, imposibilidad u otra causa accidental, será reemplazado por el ministro más antiguo del mismo tribunal que se halle presente.

2.2. Salas Corte Suprema

En el Acta 233-2014, se regula aquella obligación que tiene la Corte Suprema de establecer cada dos años las materias de que conocerá cada una de las salas en que ésta se divida, tanto en funcionamiento ordinario como extraordinario, debiendo especificar la o las salas que conocerán de materias civiles, penales, constitucionales, contencioso administrativas, laborales, de menores, tributarias u otras que el propio tribunal determine.

En cuanto a la tramitación de los recursos deberá estarse a lo señalado respecto de las Cortes de Apelaciones con la salvedad que cada sala en la Corte Suprema ve “en cuenta” la admisibilidad de los recursos sobre las materias que les corresponde.

El horario de funcionamiento de la Corte Suprema, en Salas Especializadas, será de 8:30 a 14:00 horas.



a) Distribución de materias durante el funcionamiento ordinario. Durante el funcionamiento ordinario, las tres Salas Especializadas en que se divide la Corte Suprema conocerán:

A.- Primera Sala o Sala Civil:

1º.- De los recursos ordinarios y extraordinarios de conocimiento de la Corte Suprema en materia civil, comercial, laboral y previsional.

2º.- De los demás asuntos que incidan en procesos civiles, comerciales, laborales y previsionales que corresponda conocer a la Corte Suprema y que no estén entregados expresamente al Tribunal Pleno o a otra Sala.

B.- Segunda Sala o Sala Penal:

1º.- De los recursos ordinarios y extraordinarios de conocimiento de la Corte Suprema en materia penal, tributaria y civil relacionada a una causa vigente del antiguo sistema procesal penal.

2º.- De los recursos de apelación deducidos en contra de las sentencias dictadas en recursos de amparo.

3º.- De las apelaciones y consultas de las sentencias o resoluciones dictadas por uno de los ministros del Tribunal en las causas a que se refiere el artículo 52 del Código Orgánico de Tribunales.

4º.- De los demás asuntos que incidan en procesos penales, infraccionales y tributarios que corresponda conocer a la Corte Suprema y que no estén entregados expresamente al Tribunal Pleno o a otra Sala.

C.- Tercera Sala o Sala Constitucional y Contencioso Administrativa:

1º.- De los recursos ordinarios y extraordinarios de conocimiento de la Corte Suprema en materia contencioso administrativa.

2º.- De las apelaciones y consultas de las sentencias recaídas en los recursos sobre amparo económico.

3º.- De las apelaciones de las sentencias dictadas por el Presidente de la Corte Suprema en las causas a que se refieren los números 2º y 3º, en lo relativo a causas de presas, del artículo 53 del Código Orgánico de Tribunales.

4º.- De las apelaciones de sentencias recaídas en recursos de protección resueltos en primera instancia por las Cortes de Apelaciones del país, y

5º.- De los demás asuntos de orden constitucional y contencioso administrativo que corresponda conocer a la Corte Suprema y que no estén entregados expresamente al Tribunal Pleno o a otra Sala.

b) Distribución de materias durante el funcionamiento extraordinario. Durante el funcionamiento extraordinario, las cuatro Salas Especializadas en que se divide la Corte Suprema conocerán:

A.- Primera Sala o Sala Civil:

1º.- De los recursos ordinarios y extraordinarios de conocimiento de la Corte Suprema en materia civil y comercial, incluidos los asuntos conocidos por jueces árbitros, los juicios de quiebra y de responsabilidad extracontractual entre particulares, con excepción de aquellos cuyo conocimiento corresponda a la Tercera o a la Cuarta Sala.

2º.- De los demás asuntos que incidan en procesos civiles y comerciales que corresponda conocer a la Corte Suprema y que no estén entregados expresamente al Tribunal Pleno o a otra Sala.



3º.- De los exhortos internacionales y solicitudes de exequátur que incidan en las materias antes indicadas.

B.- Segunda Sala o Sala Penal:

1º.- De los recursos ordinarios y extraordinarios de conocimiento de la Corte Suprema en materia penal, infraccional, de propiedad industrial, tributaria y civil relacionada a una causa vigente del antiguo sistema procesal penal.

2º.- De los recursos de apelación deducidos en contra de las sentencias dictadas en recursos de amparo, con excepción de las que recaigan en la acción constitucional a que se refiere el artículo único de la Ley N° 18.971, sobre infracción al artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República, y los que incidan en asuntos regidos por el Derecho Laboral y de la Seguridad Social y el Derecho de Familia.

3º.- De las apelaciones y consultas de las sentencias o resoluciones dictadas por uno de los ministros del Tribunal en las causas a que se refiere el artículo 52 del Código Orgánico de Tribunales, y

4º.- De los demás asuntos que incidan en procesos penales, infraccionales y tributarios que corresponda conocer a la Corte Suprema y que no estén entregados expresamente al Tribunal Pleno o a otra Sala.

5º.- De los exhortos internacionales y solicitudes de exequátur que incidan en las materias antes indicadas.

C.- Tercera Sala o Sala Constitucional y Contencioso Administrativa:

1º.- De los recursos ordinarios y extraordinarios de conocimiento de la Corte Suprema en materias de orden contencioso administrativo, civiles en que sea parte el Estado y sus organismos -con excepción de aquellos entregados a la Segunda Sala- de aguas y de expropiaciones.

2º.- De las apelaciones y consultas de las sentencias recaídas en los recursos sobre amparo económico previsto por el artículo único de la Ley N° 18.971, sobre infracción al artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República.

3º.- De las apelaciones de las sentencias dictadas por el Presidente de la Corte Suprema en los procesos a que se refieren los números 2º y 3º, en lo relativo a causas de presas, del artículo 53 del Código Orgánico de Tribunales.

4º.- De las apelaciones de sentencias recaídas en recursos de protección resueltos en primera instancia por las Corte de Apelaciones del país.

5º.- De los demás asuntos de orden constitucional y contencioso administrativo que corresponda conocer a la Corte Suprema y que no estén entregados expresamente al Tribunal Pleno o a otra Sala.

6º.- De los exhortos internacionales y solicitudes de exequátur que incidan en las materias antes indicadas.

D.- Cuarta Sala o Sala Laboral y Previsional.

1º.- De los recursos ordinarios y extraordinarios de conocimiento de la Corte Suprema en materia laboral, previsional, cobranza laboral y previsional, familia, minería y demás asuntos relativos a ellas.

2º.- De los recursos de apelación deducidos en contra de las sentencias dictadas en recursos de amparo que incidan en asuntos regidos por el Derecho Laboral y de la Seguridad Social y el Derecho de Familia.

3º.- De los recursos ordinarios y extraordinarios de conocimiento de la Corte Suprema deducidos en juicios sumarios y especiales y en asuntos no contenciosos civiles.



4º.- De los demás asuntos que le corresponda conocer a la Corte Suprema y que no estén entregados expresamente al Tribunal Pleno o a otra Sala.

5º.- De los exhortos internacionales y solicitudes de exequátur que incidan en las materias antes indicadas

3. Estructura de Trabajo Interno de la Corte Suprema.

Con el objeto de asesor al Pleno de la Corte Suprema y entregar a éste proposiciones para que instruya a las unidades técnicas la ejecución de proyectos o acciones concretas, se ha dispuesto la creación de 3 comités estratégicos y propositivos, integrados por miembros de la Corte Suprema y que aborden las temáticas de modernización, comunicación y personas.

Los respectivos Comités se encargarán de recibir los antecedentes, revisarlos, reunir los elementos necesarios para su decisión, analizar sus alcances y efectuar una exposición adecuada con propuestas concretas al Tribunal Pleno, encargándose luego de preparar el acuerdo, redactar su resolución y, si fuere procedente, supervigilar su implementación o efectivo cumplimiento.

Los Comités tendrán una agenda mensual de trabajo, rendirán cuenta informativa al Pleno del estado de los proyectos que tienen en cartera tres veces al año, a lo menos, en los meses de junio, agosto y octubre.